

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Enero 2012

Editada en junio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 107!

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México***



Integrantes	Massimo Modonesi Lucio Oliver Mariana López de la Vega Fernando Munguía Galeana
-------------	--

Fuentes	diarios La Jornada y El Universal
---------	-----------------------------------

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México
Cronología del conflicto social
Enero de 2012

Domingo 1

El indígena chinanteco Onésimo Ramírez Estrada, militante del Frente de Izquierda Revolucionario (FIR), es asesinado por un grupo paramilitar priísta en Río Chiquito, Santiago Jocotepec, región de la cuenca del Papaloapan, cuando pretendía impedir la ocupación de la agencia municipal. Según Gustavo Adolfo López Ortega, miembro de la comisión política del FIR, los invasores pretendían apoderarse del edificio para destituir al agente municipal Florencio Carrasco Ramírez e imponer a un sustituto acorde a sus intereses. Ramírez Estrada, quien era comandante de topiles –policías comunitarios–, trató de contener al grupo paramilitar encabezado por José Luis Ojeda Jiménez, pero lo mataron a balazos, afirma.

Tres adolescentes acusan a un guardia del albergue del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la ciudad de Tijuana, Baja California, de golpearlos y a dos internos, también menores, de agredirlos sexualmente en varias ocasiones. Los tres afectados, dos de 11 años de edad y el otro de 14, huyen de las instalaciones del DIF, ubicadas en el callejón Quintana Roo, para poder realizar su denuncia. El Ministerio Público inicia la averiguación TVD/433/2011.

Durante la tercera jornada del seminario Internacional de Reflexión y Análisis que se realiza en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para conmemorar el 18 aniversario del alzamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Javier Sicilia, poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), afirma que “los actuales movimientos antisistémicos podemos mantenernos juntos en un profundo diálogo al margen del Estado y su economía, como lo han hecho las comunidades zapatistas creando formas pedagógicas y de gobierno”.

Lunes 2

Familiares de mujeres reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizan una protesta encadenándose en las cruces de madera y metal que se encuentran en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir justicia y que les permitan identificar con pruebas de ADN las osamentas que tiene la dependencia en el Servicio Médico Forense (Semefo). Se trata de 89 mujeres desaparecidas en el estado en 2011, además de 358 homicidios de género, de los que 193 fueron en esta ciudad fronteriza. Durante la protesta, exigen que les permitan ver los cuerpos que permanecen en las instalaciones del Semefo, así como las prendas que llevaban esas víctimas, con el fin de poder identificar si alguna pertenecía a sus hijas, pero hasta el momento no han sido atendidos. También demandan que les digan cuántos cuerpos y osamentas permanecen en las instalaciones, ya que el año pasado fueron identificadas cuatro que estuvieron en el anfiteatro varios años.

En medio de protestas se realizan los actos luctuosos organizados este lunes en Chilpancingo, Guerrero, por el gobierno estatal, en memoria de Gonzalo Miguel Cámara Rivas, empleado de la gasolinera quien murió tras 20 días de agonizar por las quemaduras que sufrió durante el desalojo policiaco del pasado 12 de diciembre sobre la Autopista del Sol, donde fallecieron además dos alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En las protestas, alumnos normalistas acusan al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero de orquestar una campaña para denigrar a dicha escuela. “Nunca mostró su rostro Ángel Aguirre cuando fueron asesinados nuestros dos compañeros, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, denuncian. Armando Meza,

dirigente estudiantil, reclama que el gobierno del estado no haya organizado un homenaje similar a los estudiantes asesinados “incluso no dice nada de los heridos de bala, tanto de los trailers, como de los estudiantes que fueron lesionados”.

Martes 3

Decenas de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” toman al mediodía, por un lapso de una hora, al menos cuatro radiodifusoras en Chilpancingo, Guerrero. Exigen al gobierno federal que informe si los policías que participaron en el desalojo del pasado 12 de diciembre se encuentran arraigados, “pues tenemos conocimiento de que ya los sacaron de Guerrero”, expresa un estudiante. Los alumnos señalan que se enteraron por los medios de comunicación de que en Chilpancingo están arraigados 12 policías estatales y ministeriales, “pero extrañamente el gobierno federal no ha dicho en qué lugar se encuentran los federales que participaron en el desalojo de nuestro movimiento”, destacan. La toma de las emisoras fue coordinada por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y se desarrolló de manera simultánea en Radio y Televisión de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero y dos empresas privadas. Finalmente, los normalistas, quienes se cubrían el rostro con capuchas y playeras, ratifican su exigencia de juicio político contra el gobernador guerrerense y castigo a los autores intelectuales y materiales de la muerte de sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Posteriormente se trasladan en autobuses a las instalaciones de la normal, ubicada en las inmediaciones del municipio de Tixtla.

Activistas y defensores de derechos humanos que realizan la Caminata para la Defensa y la Dignidad de los Migrantes, en la frontera con Guatemala, se manifiestan en su segundo día de actividades afuera de las oficinas de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Secretaría de la Frontera Sur y la Fiscalía para Migrantes del gobierno de Chiapas, para protestar por la explotación sexual de la que son víctimas menores de origen centroamericano. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa en un boletín de prensa que personal del organismo acompaña a la citada caminata, con el único objetivo de solicitar la defensa y el respeto de las garantías fundamentales de los migrantes, pues aún continúan los secuestros, las desapariciones, las extorsiones y los homicidios, y hay persecución y amenazas contra sus defensores. El recorrido pretende abarcar 500km, de la llamada ruta natural migratoria, que abarca la costa de Chiapas, hasta Oaxaca.

Unos 60 custodios del penal de Culiacán, Sinaloa, realizan un paro de cuatro horas en protesta por la falta de garantías para realizar su trabajo y por las vejaciones que sufrieron a manos de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) luego de la fuga de cuatro reos ocurrida la madrugada del lunes. Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, los custodios dormían cuando los convictos saltaron la barda perimetral del reclusorio y cortaron la malla ciclónica. Los inconformes exigen hablar con Francisco Córdova, titular de la SSP, para que les garantice condiciones de trabajo más seguras. No descartan que los reos hayan salido por la puerta principal, con la complicidad de los jefes del centro penitenciario.

Miércoles 4

Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa denuncian que “lejos de hacer una investigación especial y a profundidad, las indagatorias de la CNDH, ocurridos el pasado 12 de diciembre, han tenido un perfil muy bajo”. Advierten que, a reserva de los resultados que les presenten este día las autoridades en una reunión vespertina, las pesquisas del organismo no han sido ni imparciales ni exhaustivas. “Pese al compromiso hecho a finales del año pasado por el

ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, de que el organismo a su cargo realizaría una indagatoria integral sobre el homicidio de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el desempeño de sus visitadores ha sido insuficiente”, denuncia el representante estudiantil Emilio Albentosa.

Organizaciones empresariales y de comerciantes del estado Guerrero convocan a una movilización en Chilpancingo para el próximo jueves por el respeto al estado de derecho, a la tolerancia, por la paz y contra la violencia. En nombre de los convocantes, Mauricio Leyva Castrejón asegura: “Hay una sensibilidad social en Chilpancingo que rechaza la violencia, como son la muerte de las tres personas, tanto las de estudiantes –Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino–, como la de Gonzalo –Miguel Rivas Cámara, empleado de una gasolinera–, por eso decidimos formar parte activa de la sociedad, dejar las pláticas y salir para que se nos escuche”. Mientras, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, propone a los normalistas a iniciar una segunda etapa del diálogo para resolver el conflicto de la normal.

Unos 100 propietarios de vehículos Nissan modelo Tsuru que prestan servicio colectivo de pasajeros en la Ruta del Sol, en Acapulco, Guerrero, –que conecta comunidades rurales– demandan la destitución de Juan Larequi Radilla, director general de la Comisión Técnica del Transporte y Vialidad, así como de Jorge Pineda Ventura, delegado de la dependencia en la zona conurbada, a quienes acusan de otorgar concesiones y permisos de sustitución de esas unidades a por lo menos 20 propietarios de camionetas modelo Urvan sin tomar en cuenta que ellos tienen más antigüedad. Los manifestantes, quienes tienen permisos para conducir vagonetas pero usan autos compactos debido a que son más prácticos por lo accidentado de la ruta, aseguran que las autoridades otorgan permisos de sustitución por los que cobran entre 200 y 250 pesos, cuando el trámite es gratuito.

La sección 17 de Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP) en Chilpancingo, Guerrero, demanda al gobernador Ángel Aguirre Rivero aclarar al menos 10 asesinatos y tres desapariciones de periodistas ocurridos en la entidad en años recientes y más seguridad para el gremio. Al celebrar el Día del Periodista en la plaza Libertad de Expresión, el dirigente Salomón Cruz Gallardo demanda que el mandatario estatal instruya a César de los Santos Mendoza, encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia estatal, “esclarecer cuanto antes estos arteros y cobardes ataques”. Habitantes de comunidades indígenas de los municipios más marginados, principalmente de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, denuncian que los encargados de distribuir alimentos en la región les venden los paquetes en 30 pesos.

Alrededor de 200 productores de mezcal de Michoacán se manifiestan y toman por alrededor de cuatro horas las instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en demanda de que se les otorgue la denominación de origen. Los 700 productores, que dan empleo a 2 mil personas, tienen una producción anual de 350 mil litros de mezcal en 29 municipios de Michoacán. Están agrupados en la Asociación de Mezcaleros, la cual empezó hace cinco años ese trámite, explicó Emilio Vieira. Luego de la manifestación, autoridades del IMPI se comprometieron a dar una respuesta antes del 31 de enero.

Integrantes del Circuito de la Diversidad Sexual (Cidisex) denuncian al subsecretario del Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, el estado de simulación que prevalece, en el cual la comunidad lésbico-gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTTI) aún es discriminada, pues ni siquiera las líneas de acción del programa de derechos humanos, creado por el mismo gobierno local, se han cumplido. Durante la reunión que sostienen con el funcionario, representantes de las diferentes organizaciones que conforman el circuito exponen los acuerdos incumplidos en salud, educación y procuración de justicia, como la creación del instituto de la diversidad sexual, puntos en los que Juan José García Ochoa se había comprometido apoyarlos.

Jueves 5

Alrededor de 5 mil personas marchan en Chilpancingo, Guerrero, en apoyo al gobernador Ángel Aguirre Rivero y para demandar el cierre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con sede en Tixtla, a la que califican de “centro de concentración de terroristas”. Antes de que la manifestación arribara al Zócalo de la ciudad, seis normalistas de Ayotzinapa realizan un *performance*, tirados en el piso y pintados sus cuerpos de rojo, en alusión a sus compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, asesinados el 12 de diciembre de 2011 durante el desalojo de una manifestación. Una persona que asegura ser hermano de Mauricio Leyva, el escritor que convocó a la marcha, grita a los normalistas: “¡Hijos de su puta madre!”, mientras los marchistas aseguran que la manifestación de los normalistas es una provocación y comienzan a gritar consignas contra los jóvenes y les exigen que salieran de plaza, cosa que hicieron luego de unos 10 minutos de permanecer tirados en el suelo. Integran la manifestación empresarios, comerciantes, burócratas estatales y taxistas, así como estudiantes, trabajadores y maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG); atrás marchan también colonos y campesinos provenientes de los municipios de Tlapa, Chilapa, Marquelia, Ometepepec –la tierra del gobernador– Coyuca de Benítez, Atoyac, Taxco e Iguala, entre otros. La consigna más recurrente es: “¿Qué quieren los guerrerenses? Y la respuesta: Que se cierre la normal de Ayotzinapa”. En tanto, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, da a conocer un informe preliminar sobre el caso, que antecederá a un documento más completo –aunque todavía no definitivo– que será entregado la próxima semana, en el que se asegura que durante el operativo del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, que desembocó en el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los agentes policiacos no respetaron ningún protocolo de seguridad, no acudieron con el equipo adecuado ni demostraron estar capacitados para enfrentar un incidente de esta naturaleza.

Alrededor de 115 profesores de la escuela secundaria técnica 68, ubicada en Ciudad Renacimiento, Guerrero, y donde estudian unos mil 300 alumnos, suspenden labores y se concentran en la delegación de Servicios Educativos de la región Acapulco - Coyuca de Benítez, en protesta por el asesinato de la maestra Ninfa María Viruel Andraca. Aunque autoridades y mentores han asegurado que el crimen no se trata de un ataque contra el gremio magisterial, insisten que debe ser esclarecido. A las protestas se suman docentes de las secundarias 153, en la colonia Miguel Hidalgo, y la 25, de Xaltianguis, de Acapulco.

La caminata para la defensa y la dignidad de los migrantes para exigir el fin de la explotación sexual y laboral que padece ese sector llega a Villa Comaltitlán, en Chiapas, el sexto de los 11 municipios que recorrerá en la ruta migratoria hasta Oaxaca. Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Centroamericano, asegura que los manifestantes tienen lesiones en los pies, agotamiento y señales de deshidratación, por lo que una unidad médica acudió para atenderlos. Los activistas llevan recorridos cerca de 100 kilómetros de los más de 500 que comprende la costa de Chiapas.

Las familias tzeltales expulsadas por paramilitares priístas del ejido Cintalapa, en la selva norte de Ocosingo, Chiapas, cumplen 23 días en la Plaza de la Paz, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, exigiendo justicia por las agresiones que han sufrido: tortura, secuestro, violación sexual tumultuaria, cárcel, despojo de tierras y la usurpación de sus viviendas por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Conformados ahora en el Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, junto con ejidatarios de Busiljá, también desplazados y agredidos por la Opddic, se asumen adherentes de *la otra campaña* y exigen la libertad de Amílcar Méndez Núñez, encarcelado desde diciembre de 2008 en el penal de Playas de Catazajá acusado de un asesinato que sus familiares y compañeros aseguran que no cometió.

Más de 7 mil 500 trabajadores del gobierno de Michoacán paran labores ocho horas en demanda de 150 millones de pesos que, según la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe), la administración estatal adeuda a la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado. Desde las 7 de la mañana, los burócratas bloquean los accesos a las casi 300 dependencias estatales, con excepción de las de salud y seguridad pública.

La Unión de Trabajadores Afectados por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) indica que dicho organismo les propuso firmar un convenio para saldar sus deudas, a fin de que abonen al fondo entre 10 mil y 20 mil pesos semestrales, lo que para la agrupación es inaceptable, pues la mayoría de los trabajadores percibe salarios de entre mil 600 y 2 mil 400 pesos a la catorcena. “Los empleados no tienen ninguna posibilidad de hacer estos prepagos de deuda, sobre todo porque hay muchos jubilados y trabajadoras que son madres solteras. De aceptar el convenio que les propuso el fondo estarían condenados a pagar durante una década cantidades de hasta 20 mil pesos semestrales, a cambio de darles el perdón en las demandas judiciales” aseguran.

Viernes 6

El movimiento estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa esperará hasta que la CNDH entregue formalmente los resultados de la investigación respecto de los hechos ocurridos el 12 de diciembre en la Autopista del Sol, en los que perdieron la vida dos estudiantes, para emitir una postura concreta, expresa Eduardo Meza Gómez, integrante del Comité de Prensa. “Nosotros ya lo sabíamos”, afirma el representante acerca de que los policías no respetaron ningún protocolo de seguridad durante el desalojo, como informó el jueves el *ombudsman* Raúl Plascencia Villanueva. En tanto, estudiantes normalistas, padres de familia y organizaciones campesinas marchan en el Distrito Federal para exigir castigo a los responsables de la muerte de los dos alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, tras reiterar que no se reincorporarán a sus actividades escolares, como demanda el gobierno estatal, hasta hacer justicia “a nuestros compañeros caídos y que se sancione a los responsables”. Encabezada por la banda de guerra de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, un contingente de poco más de 2 mil normalistas y padres de familia partió pasadas las 2 de la tarde del metro Xola hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde reiteran su demanda de juicio político contra el gobernador de la entidad, Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Ante empresarios del estado de Quintana Roo, Andrés Manuel López Obrador sostiene que el crimen organizado no se combate con más militares y mano dura, sino con mayor crecimiento y empleos, que son la base de su propuesta económica. A la cúpula del sector privado local, que participó en el primer foro temático del precandidato presidencial de la izquierda denominado “Proyectos de desarrollo regional para reactivar la economía, el empleo y el turismo”, le aclara que “no es enemigo de los empresarios y que su proyecto para rescatar el país se centra en una economía mixta. No podemos ser enemigos de quienes con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logran un patrimonio. Nosotros estamos en contra, eso sí, de la riqueza mal habida y, sobre todo, de la corrupción”.

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifiestan en los alrededores de la Estela de Luz, en el Distrito Federal, para hacer patente que la opacidad y la corrupción del gobierno de Felipe Calderón está reflejada en este monumento, que además es un elefante blanco, señala Martín Esparza, líder del gremio.

El dirigente precisa que a casi 27 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) aún no hay avances concretos en la mesa de negociación que se instaló en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y subraya que los trabajadores electricistas que no cobraron su liquidación requieren que les sea regresada su fuente de trabajo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denuncia violaciones graves a las garantías individuales –desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación y desplazamiento interno– “cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra varias familias tzeltales del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas y adherentes a *la otra campaña*”.

Como muestra de voluntad para distender los conflictos de antaño, campesinos y comuneros de San Antonio Chimalapas, Oaxaca y Gustavo Díaz Ordaz, Chiapas, entregan dos vehículos que tenían retenidos debido a diferencias entre grupos pertenecientes a ambos estados. En un clima de armonía, donde las comunidades cumplieron con la resolución de uno de los acuerdos firmados en la ciudad de México el 22 de diciembre, las comunidades involucradas y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca coinciden en trabajar en unidad para mantener la paz y la concordia a favor de los habitantes de la zona.

Profesores de la sección 9 del SNTE denuncian que directores, inspectores y jefes de sector condicionan la inscripción al programa de carrera magisterial a que los aspirantes presenten un acta del representante sindical de escuela, aunque este requisito no existe en las nuevas reglas de operación vigentes para 2012. Francisco Bravo, secretario general del magisterio disidente en planteles de preescolar, primarias y educación especial de la capital del país, denuncia que “si bien 80% de los docentes declinó participar en este sistema de estímulos salariales, luego de los cambios aprobados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la cúpula del gremio magisterial, que obligan a los profesores a realizar labores sociales fuera de su turno de trabajo, quienes decidieron participar enfrentan un prerrequisito que los obliga a negociar con un comité seccional desconocido por la base y por la autoridad competente, para obtener el acta”.

Sábado 7

Agrupaciones ciudadanas inconformes con la construcción de La Estela de Luz se concentrarán el domingo a la seis de la tarde frente al monumento para promover una iniciativa con el propósito de que la próxima administración la convierta en el museo de la corrupción. La convocatoria ciudadana impulsada a través de las redes sociales, solicita que se acuda con veladoras y moños negros en memoria de las víctimas del crimen organizado producto, de la guerra impulsada por el gobierno federal. Asimismo, los convocantes recolectarán en el lugar firmas para un texto que entregarán a los candidatos presidenciales para que se comprometan a combatir de fondo la corrupción. De acuerdo con los organizadores, el propuesto museo de la corrupción tendría salas dedicadas a las fosas de San Fernando, la tragedia de la guardería ABC y otras para documentar los casos de corrupción que ha sufrido el país. La reunión se realizará a pesar de que el gobierno federal adelantó la inauguración de la Estela de Luz –concluida el último día de diciembre pasado con un retraso de 15 meses y un costo de más de mil millones de pesos– la cual estaba prevista para este día. Minutos antes de la inauguración, el presidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de *Twitter*: “La Estela de Luz conmemora el Bicentenario. Es diseño de arquitectos mexicanos que ganó el concurso calificado por expertos en la materia, además de que es un monumento al Bicentenario escogido por un comité de expertos integrado por los gobiernos federal y del DF”.

A propósito de la demanda que enfrenta el ex presidente de México, Ernesto Zedillo en Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en la masacre de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997, diversas organizaciones y activistas de derechos humanos afirman que los crímenes de lesa humanidad son considerados imprescriptibles por los organismos y las legislaciones de justicia internacional a los cuales se ha adherido México, por lo que pedir inmunidad ante una acusación por delitos graves, por el sólo hecho de haber sido presidente de la República, no es un argumento

jurídicamente viable, afirman. Por su parte, Jaime Martínez Veloz, integrante de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en Chiapas, asegura que Ernesto Zedillo incurrió en complicidad u omisión en la matanza de indígenas en Acteal. El también ex legislador considera que los sucesos en la comunidad indígena son la expresión más dramática del fracaso de la política de doble discurso que impulsó el ex presidente durante el proceso de negociación con el EZLN.

Domingo 8

Al grito de “¡No más sangre!”, un grupo de jóvenes logra retirar una de las cercas metálicas que impedían el acceso al área que circunda la Estela de Luz, en el Distrito Federal, para elevar la protesta por la construcción de esta polémica obra es bautizada por algunos manifestantes como “monumento a la corrupción”, mientras para otros representa el monumento a las víctimas de Felipe Calderón. Más de 500 personas hacen eco de la convocatoria que surgió el sábado pasado en las redes sociales, mientras el Ejecutivo federal adelantaba la inauguración de la estela. Con pancartas en mano, velas y veladoras, los decenas de manifestantes logran con su ingreso, casi al pie del monumento, suspender los bailes regionales que antecedieron el espectáculo de luces. Lo llevan a cabo en forma pacífica y sin que nadie se opusiera a su ingreso. También a coro exigen juicio político contra el Presidente y llaman al pueblo a unirse a sus exigencias.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero suspende un acto oficial en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, donde entregaría dos autobuses para el traslado de los trabajadores, debido a que los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, instalan un retén informativo en la Autopista del Sol, al norte de Chilpancingo. Desde las 11 de la mañana y hasta cerca de las dos de la tarde, alrededor de 100 afiliados a la FECSM bloquean en ambos carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Tierras Prietas, a un costado de una gasolinera.

La Unión de Juristas de México y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) SNTE comenzará una nueva etapa de demandas contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), la cual, subraya, vulnera los derechos laborales de un millón 200 mil trabajadores de la enseñanza pública; durante ésta se espera duplicar las 51 mil denuncias que presentaron el año pasado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

Lunes 9

Organizaciones campesinas regionales y nacionales emprenderán una caravana de Chihuahua a la ciudad de México para demostrar que los daños por la sequía prolongada, heladas atípicas e inundaciones dejaron en la indigencia a miles de productores. De forma simultánea, enviarán cartas a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y otros organismos, en la cual detallarán los daños producidos por el cambio climático en la agricultura. También propondrán una alianza internacional para elaborar una respuesta frente a las pérdidas en diversos países.

Unos cien pobladores de la comunidad Molino de Los Arcos, del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, adherentes a *la otra campaña*, denuncian ante la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas que grupos contrarios talaron clandestinamente decenas de árboles en la reserva Gertrudis Duby, ubicada en las inmediaciones de esa localidad que se sitúa en las afueras de esta ciudad. Salvador López López, representante de los inconformes informa que la tala comenzó en junio pasado pero aumentó en forma considerable el pasado mes de diciembre. Antes de acudir a la fiscalía, el centenar de habitantes de Molino de Los Arcos exigen la intervención de la alcaldesa Cecilia Flores Pérez para que detenga las graves violaciones a nuestros derechos ambientales.

Maestros del turno matutino de la secundaria técnica 68, de la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco, Guerrero, anuncian que suspenderán labores toda la semana, y el próximo miércoles marcharán por la avenida Costera Miguel Alemán para exigir que se esclarezca el asesinato de la maestra Ninfa María Viruel Andraca, perpetrado el pasado 2 de enero. Los docentes indican que este lunes y el próximo jueves entregarían guías de trabajo a los alumnos, y a partir de este martes se concentrarán en la delegación de los servicios educativos estatales de la región Acapulco - Coyuca de Benítez. Profesores del turno vespertino anuncian que sí tendrían labores.

Integrantes del Frente Popular Juvenil bloquean durante media hora el puente Internacional Raynosa - Hidalgo, para exigir la liberación del precandidato del PRD a senador, Francisco Chavira Martínez, acusado de los presuntos delitos de privación ilegal, robo y lesiones contra Jorge Valdez, dirigente estatal del sol azteca, y sus correligionarios Gosto Almanza, Felipe Durán y Jesús Abundis. Luego de que el viernes decenas de simpatizantes de Chavira Martínez exigieron frente al palacio de gobierno la liberación del político, detenido el jueves por la policía ministerial en la ciudad de Altamira, este lunes continuaron las protestas.

Habitantes de Los Pedregales, en Coyoacán, Distrito Federal, acuden a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar una queja en contra de las presuntas irregularidades que ha cometido la CFE en el cobro del servicio de energía eléctrica. Con mantas y carteles, alrededor de 150 personas manifiestan su rechazo a los cobros excesivos, se apostaron en la lateral de la avenida Circuito Interior, lo que afecta el tránsito vehicular de la zona. Los vecinos se niegan a pagar por un consumo de luz que, aseguran, es injusto e injustificado. Ante ello, presentan centenares de expedientes donde las tarifas se dispararon incluso 300% sin ningún sustento y hasta el momento la dependencia federal no ha explicado la causa de dicha alza. Esta es la segunda manifestación que realizan los vecinos ante la Profeco para solicitar su intervención y evitar más cortes de energía en la colonia, lo cual ya propició la creación del movimiento vecinal.

Martes 10

La comisión legislativa que investiga el homicidio de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y un trabajador de una gasolinera se reúne con un grupo de alumnos normalistas quienes demandan una respuesta pronta a su solicitud de juicio político contra el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero. Francisco Moreno Merino, del PRI, presidente del grupo de trabajo, informa a los estudiantes que su solicitud se encuentra en análisis en las instancias competentes de la Cámara de Diputados, y en breve se dará a conocer el resultado de su estudio, hecho que será dado a conocer en los próximos días.

El SME y autoridades federales acuerdan analizar una propuesta para integrar una empresa paraestatal, en la que tendrían participación accionaria los gobiernos capitalino y federal, la cual daría servicio a la CFE. De acuerdo con el dirigente del SME, Martín Esparza, ése es el acuerdo preliminar que alcanzan las partes durante la reunión realizada en el Palacio de Covián. Además, se comprometen a volver a la mesa de diálogo el viernes próximo y definir si continuarán por ese camino o explorarán otras alternativas en los días próximos. En tanto, cientos de integrantes del SME marchan de su sede sindical a la Secretaría de Gobernación y se concentran en la avenida Bucareli, donde reciben el informe de sus dirigentes.

Aproximadamente 3 mil maestros de educación primaria y secundaria paran labores y se manifiestan en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y otros municipios del estado debido a que las autoridades educativas no cumplieron con el pago de aguinaldos el pasado 6 de enero, como se habían comprometido, afirma David Guadalupe Valenzuela, coordinador estatal del Frente Amplio

Democrático de Trabajadores de la Educación. El dirigente expresa que al menos 21 mil docentes no han recibido esa prestación. En Hermosillo, los maestros cierran calles en el norte y poniente y se plantan frente a las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). “Las autoridades locales ya recibieron ese dinero del gobierno federal; sin embargo, no han cubierto los adeudos con los maestros”, explica. Por su parte, la SEC informa que por ley el gobierno estatal tiene hasta el 15 de enero para cubrir el pago de la segunda parte del aguinaldo y anuncia que este miércoles se cubrirá la segunda parte del pago de aguinaldo a los docentes a través de depósitos en cuentas bancarias de los maestros.

Miércoles 11

En la reunión semanal de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), los dirigentes de telefonistas, empleados de la UNAM, pilotos, sobrecargos, jubilados ferrocarrileros y del gremio bancario, entre muchos otros, anuncian que realizarán una movilización el próximo día 31 sindicatos independientes y corporativos, así como organizaciones sociales y campesinas, que tendrá entre sus principales demandas que no se declare la quiebra de la empresa de aviación Mexicana. Además será una marcha de protesta por las políticas económica y social del gobierno del presidente Felipe Calderón y las alzas a productos básicos, advierten. También señalan que en dicha movilización se pondrá énfasis en el reclamo contra las alzas de precios y los topes salariales, que colapsan la economía de los asalariados.

Alrededor de 100 habitantes de la comunidad de Campos, municipio de Manzanillo, Colima, encabezados por la diputada local priísta Armida Núñez García, mantienen bloqueado el paso del ferrocarril, en demanda de la construcción de una vía alterna hacia su poblado, pues alegan que el paso del tren obstruye durante horas las entradas y salidas a la localidad, y que la empresa Ferrocarriles de México (Ferromex) ha hecho caso omiso a sus denuncias. Núñez García, quien aspira a una diputación federal por el distrito 2, con sede en Colima, explica que existe un convenio firmado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la CFE y Ferromex para construir otra vialidad en la comunidad de Campos. Advierte que las personas que mantienen bloqueado el paso del ferrocarril, no se retirarán hasta que su demanda sea atendida. El cierre de la vía ha provocado que cerca de 30% de las mercancías que salen del puerto de Manzanillo no puedan ser transportadas.

Jueves 12

Ejidatarios, pequeños propietarios y ganaderos afiliados al Frente Democrático Campesino (FDC) toman 11 presidencias municipales de Chihuahua para exigir la entrega de apoyos emergentes a productores afectados por la sequía. Miembros del FDC ocupan las alcaldías de Bachíniva, Buenaventura, Namiquipa, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachic, Guerrero, Cusihiuriachi, Santa Isabel, Satevó y Cuauhtémoc. Los agricultores exigen a los presidentes municipales que se sumen a sus demandas, para que las autoridades estatales y federales liberen los recursos anunciados en apoyo a la gente del campo afectada por estiaje y heladas. Los inconformes aseguran que en la mayoría de los municipios donde se registraron movilizaciones no se han entregado recursos del Procampo correspondientes al ejercicio fiscal 2011, ni recargas de tarjetas para comprar diesel a precio preferencial.

Indígenas del municipio de Los Reyes, asentado en la sierra de Zongolica, Veracruz, retienen durante más de 12 horas a empleados y un vehículo de la CFE en protesta porque la empresa suspendió la introducción del servicio a los poblados de Ocotepec y Atlanca, usó materiales reciclados y de mala calidad y se niega a pagar jornales pendientes a los lugareños que laboran en

las obras, informa la autoridad municipal. Fabián Gutiérrez Tzoyohua, representante del ayuntamiento en Ocotepéc, informa que desde finales de diciembre se pidió la intervención del gobierno estatal y de la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que CFE y una empresa contratista pagaran los salarios pendientes, pero al no recibir respuesta “los pobladores decidieron arreglárselas por sí solos”.

El SME realiza un mitin en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en el Distrito Federal, para exigir al presidente de esta instancia, Eduardo Andrade Salavarría, el cese de las tácticas dilatorias a la demanda laboral que interpusieron los trabajadores hace más de dos años, la cual no ha sido dictaminada aún, así como de las múltiples anomalías que ha cometido esta instancia contra el gremio. Encabezados por el secretario general del gremio, Martín Esparza, y por el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, cientos de trabajadores llegan desde la mañana a la JFCA, se introducen en las instalaciones y permanecen ahí durante varias horas. Por la noche son recibidos por Andrade Salavarría, en una reunión en la que le demandan que “esta instancia sea imparcial y no dilate artificialmente el proceso de la demanda laboral que interpusieron”.

Unas 5 mil personas marchan en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para demandar que se inicie juicio político contra el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero, se castigue a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pinto, ocurridos hace un mes durante el desalojo de la Autopista del Sol, donde se rechazaba el cierre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Desde las 11 de la mañana, los contingentes se empiezan a concentrarse en el museo La Avispa, entre ellos estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los comuneros de San Salvador Atenco e integrantes del SME, que se suman a contingentes de campesinos del estado y delegaciones de las escuelas normales rurales reunidas en la FECSM.

Viernes 13

Unos 600 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Matías Ramos Santos”, en el estado de Zacatecas, marchan en la zona conurbada que conforman los municipios de Zacatecas y Guadalupe, para conmemorar la represión que sufrieron este mismo día en el año 2000 durante una manifestación que realizaron en el contexto de una gira que realizaba Ernesto Zedillo por la entidad, quien estaba a punto de dejar la Presidencia de la República. En esta ocasión además, los estudiantes de la normal rural Matías Ramos Santos denuncian la represión contra normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, donde murieron dos estudiantes.

Pobladores organizados del municipio de Siltepec, en la Sierra Madre de Chiapas, cierran el acceso al municipio para cerveceras, distribuidores de alcohol y drogas, así como a las mineras y talamontes canadienses que explotan su territorio; además clausuran 18 cantinas y cuestionan seriamente a la policía, al alcalde y al agente del Ministerio Público (MP) del estado, que “protegen a los delincuentes”. Deciden organizarse como cabecera municipal, en coordinación con los ejidos, rancherías, barrios y colonias, para ejercer el control del territorio que habitan sin la intervención de los partidos políticos y el gobierno. La organización de la sociedad civil Luz y Fuerza del Pueblo - Región Sierra, adherente de *la otra campaña*, con presencia en 38 municipios de la región, al reportar la acción sostiene: “Nuestro municipio, al igual que la mayoría en Chiapas, padece graves problemas de alcoholismo, exceso de cantinas, proliferación de drogas y prostitución, tala de árboles y comercialización del medio ambiente, saqueo clandestino de minerales por empresas de Canadá en el ejido Honduras y el barrio Las Nubes del ejido Toquián Grande, y el intento de intervenir en otros”. Los pobladores colocan cadenas y letreros en las entradas y salidas de la cabecera municipal y en los ejidos donde hay recursos naturales y minerales, para evitar el saqueo clandestino, “ya que la empresa minera Black Fire ha estado entrando por las noches y a escondidas

ya sacaron ocho camiones del mineral del barrio Campo Aéreo del ejido Honduras; advertimos que esto ya no lo vamos a permitir en ningún lugar de la Sierra” sostiene Luz y Fuerza del Pueblo - Región Sierra. Amparándose en el artículo 39 de la Constitución, añaden: “Por órdenes del pueblo, ejidos y comunidades organizadas hemos cancelado más de 18 cantinas en la cabecera municipal de Siltepec y al mismo tiempo tenemos nuestras guardias y vigilancia en el centro y los cinco barrios, en los ejidos y rancherías donde se han incorporado a nuestra organización, para que en las noches cuidemos el orden. Detendremos a los borrachos, delincuentes y polleros, ya que la policía sectorial no vigila ni brinda seguridad, más bien se dedica a extorsionar y reprimir a la población, mientras que el presidente municipal no cumple con sus obligaciones”.

A 30 días de que concluya la administración estatal en Michoacán, más de 20 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (Fesemss), marchan en la ciudad de Morelia, capital del estado, para exigir al gobierno federal más recursos y al gobierno de la entidad cumplir los acuerdos relacionados con el pago de prestaciones y la autorización de nuevas plazas. Desde temprano, cientos de manifestantes se apostan afuera de las oficinas de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Otros se concentran frente a la de casa de gobierno, residencia del mandatario perredista Leonel Godoy.

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el SME analizarán los aspectos jurídicos y técnicos hacia la integración de una empresa paraestatal, que funja como prestadora de servicios de la CFE. Con este novedoso esquema podrían regresar a laborar poco más de 16 mil 500 integrantes del SME que permanecen en resistencia, a 27 meses del decreto presidencial que extinguió LFC. Al término de una reunión con autoridades federales, encabezadas por funcionarios de la SEGOB, Martín Esparza, dirigente del SME, asegura que el objetivo es estudiar, con los enviados del gobierno capitalino, los términos jurídicos del proyecto, para presentarlo el lunes al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Un día después, el martes próximo, se haría lo propio con los funcionarios del gobierno federal.

Trabajadores de limpia acordaron con autoridades del GDF instalar una mesa de trabajo para analizar alternativas que permitan mejorar las condiciones laborales de este gremio, con lo que decidieron aplazar la movilización que tenían programada para la próxima semana. El dirigente de la sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), Horacio Santiago Ramírez, detalla que entre las peticiones de este sector se encuentra la contratación del personal que labora como voluntario y establecer un convenio de separación de los residuos sólidos de manera permanente.

Sábado 14

Las familias de indígenas desplazados de los ejidos Busiljá y Cintalapa, Ocosingo, Chiapas, que mantuvieron un plantón durante 30 días en la plaza central de esta ciudad, exigiendo la libertad de sus compañeros Elías Sánchez Gómez y Amílcar Méndez Núñez, presos en Playas de Catazajá, y la presentación con vida de la menor Gabriela Sánchez Morales, levantan su protesta sin obtener ninguna solución. Los indígenas del Frente de Ejidos “Genaro Vázquez Rojas”, adherentes de *la otra campaña*, señalan el “carácter paramilitar del gobierno de Juan Sabines Guerrero, que se ocupó desde las diferentes dependencias de encubrir las acciones del grupo que encabezan Herlindo López Pérez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Manuel Pérez Vázquez, quienes pretenden quedarse con nuestras tierras”; afirman que ellos “son los responsables de la masacre en el ejido Viejo Velasco, en 2006, y los que arrebataron las tierras de las bases zapatistas de la comunidad 6 de Octubre, del municipio autónomo Ricardo Flores Magón”. Denuncian que quienes brindaron protección y blindaje para los paramilitares fueron los ministerios públicos de Ocosingo y Palenque, el Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría General de Gobierno y las autoridades de Ocosingo.

Unos 40 estudiantes y activistas realizan la segunda Caminata contra la Guerra y la Militarización, para protestar por el hecho de que la seguridad pública esté dominada casi totalmente por elementos del Ejército, en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, lo cual ha generado gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. La movilización, realizada simultáneamente en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez, es organizada por la Coordinadora Nacional contra la Militarización (Conacom), y en ella participan militantes de diversos colectivos, entre ellos Pan y Rosas y Contracorriente.

Integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas colocan una mampara con 80 fotografías en Ciudad Juárez, Chihuahua, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la Zona Norte, con el propósito, según denuncian, “de que la población sepa que existen decenas de casos sin resolver y exigir justicia”. También realizan una marcha hasta el puente internacional Paso del Norte o Santa Fe, para protestar por la falta de resultados en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado; allí cierran dos casetas de cobro e impiden el tránsito vehicular.

Unas 2 mil personas, convocadas por la agrupación México Laico, se manifiestan en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por quinta ocasión, contra las reformas al artículo 24 constitucional que se encuentran a discusión en el Senado. El 15 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados federal aprobó las reformas, que establecen el derecho de practicar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Alejandro Ramírez García, vocero de la agrupación, asegura que si se aprueba la reforma, significará “un retroceso histórico y democrático. Un padre de familia en cualquier plantel educativo puede pedir que se incluya educación religiosa en los planes de estudio y eso significaría vivir en un Estado confesional, donde se aplicaría el concepto de mayoría y se violarían los derechos de los demás”, asegura.

Domingo 15

El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG), Juan Manuel Herrera Campos, informa que la dependencia ejercerá acción penal contra los ex policías ministeriales Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores –identificado como jefe de grupo de la corporación– como presuntos responsables del homicidio de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, durante el desalojo ocurrido el pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, cuando se desarrollaba una protesta. En conferencia de prensa, Herrera Campos asegura que los probables responsables están plenamente identificados, luego de analizar el material de las investigaciones que integran la averiguación previa. En tanto, en la ciudad de México la CNDH informa mediante un comunicado que citó a comparecer al comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas, el próximo miércoles 18 de enero a las 12 del día.

En el puerto de Acapulco, Guerrero, más de 2 mil personas marchan por la avenida Costera Miguel Alemán, desde el asta bandera hasta el zócalo porteño, en favor de la paz y para convocar a autoridades y normalistas a reanudar el diálogo, para que termine “el clima de zozobra e incertidumbre entre la población”. En la caminata participan organizaciones de taxistas, comerciantes, abogados y sociedad civil, y la encabeza el presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, Alfredo Pérez Zárate, quien asegura que “no se trataba de una marcha ni en favor del gobernador Aguirre Rivero ni de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”.

El SNTE entrega a la SEP su pliego general de demandas 2012, en el que solicita un incremento sustancial del financiamiento al sector educativo, así como la solución inmediata de un amplio catálogo de incumplimientos que la dependencia tiene pendiente con los trabajadores de la educación. Sin especificar el monto de sus demandas salariales o en prestaciones, el SNTE establece cuatro ejes fundamentales para la negociación: alcanzar la meta de asignar 8% del PIB para el sector educativo en el presupuesto federal de 2013; cumplimiento cabal de la ACE; fortalecimiento financiero a normales, universidades y centros de investigación públicos, y asignación de un salario digno para los trabajadores de la educación. La discusión del incremento salarial para cerca de 1.2 millones de trabajadores de la educación será una de las principales tareas que deberá asumir el próximo titular de la SEP.

Lunes 16

Al menos 15 ex policías del estado de Guerrero, involucrados en la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, se plantan frente a Casa Guerrero –residencia oficial del gobernador Ángel Aguirre Rivero– para denunciar que pese a haber sido absueltos del caso, en el anterior gobierno estatal, encabezado por Zeferino Torreblanca, fueron destituidos de sus puestos sin razón alguna, por lo que exigen ser indemnizados conforme a la ley. Aseguran que Aguirre Rivero se comprometió a pagar los más de 9 millones de pesos correspondientes al monto global de su liquidación, asegura Juan Manuel Morales, abogado de los ex agentes. Recuerda que sus clientes estuvieron recluidos en el penal de Acapulco durante 3 años 8 meses. La sala penal los declaró culpables, pero se fueron al recurso de amparo directo y el tribunal colegiado determinó que eran inocentes a partir de que se les hizo la prueba de radizonato de sodio, demostrando que nunca dispararon sus armas; desde entonces, los gobiernos en turno les habían cubierto sus salarios sin ningún problema.

Alrededor de 300 miembros de organizaciones campesinas, ganaderas y de etnias de la región Tarahumara, inician en Ciudad Juárez, Chihuahua, una marcha a la ciudad de México para exigir al gobierno federal apoyos extraordinarios por la sequía y la hambruna, que han afectado a más de 250 mil personas en Chihuahua, anuncia Martín Solís, de la organización El Barzón. El dirigente agrario considera que los daños causados por la sequía y la helada atípica de febrero de 2011 en el estado de Chihuahua ascendieron a 200 mil cabezas de ganado muertas, y a alrededor de 3 mil 600 millones de pesos. Añade que un cuarto de millón de habitantes de 4 mil 478 comunidades de población indígena y campesina chihuahuenses padecen hambruna debido a que no pueden sembrar maíz y frijol, entre otros productos. En la marcha, con la cual se espera llegar a la capital del país el próximo viernes, participarán 20 tractores, 40 camionetas y 40 remolques. Como parte de la movilización, agricultores afiliados al FDC toman la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en la capital de Chihuahua, para exigir que se hagan efectivos los apoyos para el campo, entre ellos los que ayudan en combatir los efectos de la sequía.

Ocho policías lesionados –tres por bala–, daños en vehículos oficiales y 14 detenidos fue el saldo de un enfrentamiento, cuando policías municipales de San Pablo del Monte y granaderos de Puebla y Tlaxcala repelieron a integrantes poblanos de Antorcha Campesina, los cuales intentaron recuperar el predio Santiago de los Leones, luego de que cerca de las 2 de la madrugada fueron desalojadas 150 familias que supuestamente invadieron esos terrenos la semana pasada. Entre los 14 detenidos se reporta a cuatro mujeres. Todos son trasladados a la Procuraduría de Justicia de Puebla para que se realicen las investigaciones.

Permisarios del transporte público de Lázaro Cárdenas toman las instalaciones de la alcaldía para exigir al gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, suspender la entrega de 200 concesiones, pues “la ciudad portuaria está saturada de combis y taxis”. Los manifestantes suspenden el servicio de transporte en casi todas las colonias desde hace cuatro días. Por su parte, la Comisión Coordinadora del Transporte asegura que no tienen previsto entregar más concesiones en Lázaro Cárdenas.

Al menos 300 vecinos de la colonia Buenavista marchan hacia el palacio municipal, en Naucalpan, Estado de México, para exigir seguridad en su localidad, donde hace ocho días tres hombres fueron degollados y calcinados, y el viernes tres alumnos de la primaria Juan de la Barrera fueron asaltados. Los manifestantes advierten con crear sus propias guardias de seguridad si la alcaldía no les da el servicio. “¡La gente va a hacer justicia por su propia mano, porque la autoridad no hace caso!”, afirman dirigentes vecinales al llegar al ayuntamiento y exigir audiencia con la alcaldesa, Azucena Olivares.

Policías de Navolato, Sinaloa, realizan un nuevo plantón frente a la sede del ayuntamiento –uno de los cinco más violentos de la entidad– para protestar por su incorporación a la Policía Estatal Preventiva, corporación que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y que se hará cargo de la vigilancia en dicha localidad. Los alrededor de 40 inconformes permanecen en plantón dos horas y exigen a los regidores revisar el convenio celebrado entre el gobierno de Navolato y las autoridades estatales para que éstas sean las responsables de brindar la seguridad a los ciudadanos, y no la policía municipal.

Más de 300 transportistas toman calzada de Tlalpan, en el Distrito Federal, para arribar al Zócalo, donde exigen subir la tarifa, acabar con la falsificación y el desdoblamiento de rutas, así como el retiro de mototaxis y cesar la aplicación de multas fantasmas hasta de 80 días de salario mínimo, cuando las unidades están en el corralón. José Antonio Sánchez Escalante, dirigente de Rutas Unidas, advierte que si las autoridades capitalinas no responden afirmativamente a sus demandas, en los próximos días realizarán un paro general del servicio, “pues no podemos esperar más, cuando tenemos encima una competencia desleal que merma nuestros ingresos y el gobierno se vende al mejor postor”.

Profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se manifiestan para exigir el cese del acoso de la administración universitaria a “todo aquel que levanta la voz o se pronuncia en contra de la rectoría”. Asimismo, expresaron su apoyo al profesor John Hazzar, quien fue sometido a proceso por una presunta agresión en contra de consejeros universitarios. Pasado el mediodía, un grupo de profesores se presenta en el plantel Centro Histórico. Con pancartas exigen acabar con el clima de persecución política y los despidos injustificados, pues desde hace un año, cuando comenzó su movimiento sindical, han sido destituidos, sin motivo aparente, seis trabajadores, entre ellos Julia Cortés y Alberto Benítez, este último miembro de la representación sindical.

Destacados escritores, artistas, historiadores e intelectuales anuncian la creación de la Comisión Promotora del Movimiento de Regeneración Nacional de Cultura (Morena-Cultura), que se encargará de crear propuestas para mejorar el sector cultural, las cuales serán entregadas el próximo 14 de febrero al precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Morelia, Michoacán. En conferencia de prensa –en la que participan Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska, Fabrizio Mejía Madrid, Benjamín González, Francisco Pérez Zalce, José Luis Cruz y Paloma Saiz– se informa que dicha comisión quedará integrada en próximo sábado 21 y que Morena-Cultura “tiene la intención de participar activamente desde la izquierda y en la campaña electoral encabezada por López Obrador para construir un proyecto cultural que urge desarrollar en favor de la nación”.

Martes 17

La Procuraduría General de la República (PGR) entrega a las autoridades de Guerrero algunos resultados de sus peritajes de balística, mecánica de hechos y criminalística, relacionados con la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el pasado 12 de diciembre, durante un desalojo violento por parte de policías en la Autopista del Sol. La PGR ha precisado que los disparos que causaron las muertes provinieron de armas de policías locales –lo cual coincide con los peritajes realizados por la CNDH; sin embargo, el Ministerio Público Federal (MPF) no ha llegado a una determinación de responsabilidad en términos particulares, ante la falta de ojivas que causaron la muerte de los normalistas rurales.

Unos dos mil alumnos de las ocho normales del estado de Michoacán marchan por calles de Morelia para exigir la asignación de profesores especializados en la formación de docentes, el cumplimiento cabal de la gratuidad de la educación pública y solución inmediata a los pliegos petitorios de cada una de estas escuelas. El contingente parte de Casa de Gobierno y continúa por avenidas principales como Juárez, Ventura Puente, Acueducto y Morelos. En la sede del palacio de gobierno realizan un mitin en el que señalan que “el Congreso local aprobó la ley que garantiza gratuidad en la educación, desde preescolar a educación superior, y que dicha ley no se ha aplicado, pues siguen cobrando inscripciones y cuotas”.

Médicos residentes de los hospitales de la Mujer, del Norte, del Sur y Siquiátrico doctor Rafael Serrano, en el estado de Puebla, paran labores durante tres horas, en protesta porque les descontaron 50% de las becas sin justificar la medida y sin avisarles antes. Ante ello, la Secretaría de Salud (SSA) estatal –a cargo de esos cuatro nosocomios, los más importantes de la entidad, que atienden a la población sin seguridad social– accede a hacer un pago extra a la quincena siguiente para completar el recurso. Los médicos denuncian que al no ser empleados de los hospitales al servicio de la SSA es injustificable la baja en sus becas, que fue de entre mil 300 y 2 mil pesos, debido a que existen cinco tipos. Los inconformes sostienen una reunión con Gerardo de la Fuente, director de Recursos Humanos de la SSA, quien les informa que el descuento fue para cubrir el pago del impuesto sobre la renta y que ya fue ingresado al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Unos 200 campesinos de nueve ejidos de los municipios de Guadalupe, Veta Grande y Pánuco, en el estado de Zacatecas, realizan un plantón frente a las instalaciones locales de la SAGARPA para denunciar que la dependencia no ha liberado todos los recursos del Fondo Nacional de Desastres Nacionales (FONDEN) por atender la contingencia por la sequía, incluso hay agricultores a quienes se adeudan recursos del Procampo 2011. También acusaron que están retenidos los recursos del subsidio al diesel para los tractores.

Cafetaleros toman el palacio municipal de Ixhuatlán del Café, Veracruz, para protestar por los abusos cometidos por la empresa Agroindustrias Unidas de México (AMSA), la cual, aseguran, acapara la compra de café cereza –el fruto recién cortado–, cuyo precio ha bajado hasta en 2 pesos menos de su valor real, que debe oscilar alrededor de 11.50 pesos por kilo. Lo cual va en perjuicio de 4 mil familias de los municipios de Ixhuatlán del Café, Chocamán, Tomatlán y Córdoba, municipios en los cuales se bloquearon los puntos de compra abiertos por AMSA, en protesta porque la empresa condiciona la compra del grano.

En conferencia de prensa, representantes de organizaciones sindicales de varias dependencias del Gobierno y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal denuncian la política antilaboral de las autoridades capitalinas, que se caracteriza, según dicen, por despidos injustificados, acoso laboral,

creciente contratación de empresas *outsourcing* –de terciarización–, prestaciones sociales precarias y violación a la libertad sindical. Frente a esa situación, los afectados anuncian que el viernes 27 de enero realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir el cese de esas prácticas, que “no corresponden a un gobierno de izquierda, como el que encabeza en la ciudad de México Marcelo Ebrard”.

Las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca, interpondrán una controversia ante la SCJN contra la acción del Congreso y el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, por la creación del municipio Belisario Domínguez en más de 80 mil hectáreas de su territorio comunal. En un comunicado, informan que reclamarán la invalidez de decreto emitido por la 64 Legislatura chiapaneca, por el cual se crearon los municipios Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez.

Miércoles 18

Maestros de Oaxaca, Michoacán y Jalisco se suman a la movilización nacional convocada por la CNTE en contra de la ACE, promovida por el gobierno federal y el SNTE. Con marchas, plantones, cierres viales, bloqueos a accesos de tiendas departamentales y suspensión de actividades, los profesores de dichas entidades exigen la cancelación de la evaluación universal para el magisterio y de los nuevos lineamientos de carrera magisterial. Por acuerdo de su asamblea estatal, profesores de la sección 22 del SNTE, en Oaxaca, suspenden actividades. En el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, conurbado a la capital del estado, mentores de la región de Valles Centrales se concentran en el monumento a los Hombres Ilustres; de ahí marchan a la sede del Congreso local, ubicada en la localidad aledaña de San Raymundo Jalpan, y bloquean los accesos al recinto legislativo. Mientras tanto, en 35 poblaciones de otras regiones de la entidad los maestros bloquean los accesos a tiendas departamentales, realizan plantones en oficinas públicas y cierran carreteras y casetas de cobro. En el istmo de Tehuantepec alrededor de 11 mil trabajadores de la educación se movilizan en repudio de la aplicación de la ACE y para exigir mayor presupuesto para el sector. En Michoacán, miembros de la CNTE ocupan durante 12 horas las instalaciones de la SEP del estado, ubicadas en Morelia, en rechazo a la evaluación universal, con el argumento de que viola sus derechos y para exigir el pago de salarios y prestaciones pendientes. En esa misma ciudad, unos 500 agremiados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana marchan de la glorieta Villalongín al palacio de gobierno en apoyo de su dirigente Eduardo Tena, quien desde hace nueve meses ha sido desconocido por las autoridades de dicha universidad.

Estudiantes de diversas universidades públicas demandan al gobierno federal suprimir el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior –con el que se otorgarán créditos a jóvenes para cursar este nivel de estudio en colegios particulares. Apuntan que con la puesta en marcha de este proyecto se demuestra sí existen recursos para ampliar los presupuestos de instituciones públicas, pero falta voluntad política para apoyarlas. Jóvenes de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de la UACM, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), del IPN, muchos agrupados en la coordinación estudiantil del Morena, se reúnen en la explanada de la rectoría de la máxima casa de estudios, donde realizan un pronunciamiento en el que critican el programa anunciado por el Ejecutivo federal la semana pasada. Indican que con los 2 mil 500 millones que se destinarán para el primer año de estos créditos se cubriría 56% del presupuesto actual de la UAM, 23% del IPN, y equivale a 4.3 veces los recursos que recibió la UACM en 2012. Los jóvenes convocan a crear una alianza metropolitana que rechace el “proyecto calderonista” y exhortan a la comunidad estudiantil y a la sociedad en su conjunto a que acudan este domingo a las 11 de la mañana a un acto en el Zócalo de la ciudad de México para manifestar su descontento por la decisión del Ejecutivo federal.

Autoridades de los municipios indígenas zoques San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca, presentan una controversia constitucional ante la SCJN para invalidar dos decretos. Uno fue emitido por el gobierno de Chiapas y otro por el Congreso de esa entidad, con los cuales se ordenó la creación de cuatro nuevos municipios, lo que implica la invasión de 164 mil hectáreas de territorio oaxaqueño. De los cuatro municipios que autorizaron los poderes Legislativo y Ejecutivo de Chiapas destaca el que fue denominado Belisario Domínguez, cuya superficie es de más de 80 mil hectáreas, ubicado en el territorio comunal y municipal de San Miguel y Santa María Chimalapa.

Dos pobladores de San José del Progreso, Oaxaca, que se oponen a la explotación de la mina La Trinidad, de la compañía Cuzcatlán –filial de la canadiense Fortuna Silver–, son heridos de bala por el presidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz, su hermano Carlos y un regidor, denuncia la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). De acuerdo con un comunicado de la organización, varios habitantes se reunieron en el centro del poblado para solicitar información en torno al intento de la empresa Cuzcatlán de construir una tubería para transportar agua de un pozo profundo que abastecerá las instalaciones de la minera. En ese momento el alcalde Sánchez Muñoz, su hermano Carlos –contratista de la obra– y el regidor Gabriel Pérez Ruiz dispararon contra la población con armas de alto poder y uso exclusivo del Ejército –R-15–, señala el comunicado.

Jueves 19

Provenientes de Zacatecas, campesinos de los municipios de Santo Domingo y Villa de Ramos del movimiento “Indignados del Campo” de Chihuahua, arriban a la capital del estado de San Luis Potosí para demandar que se atienda la emergencia por la sequía, se apoye al agro de manera inmediata y se elaboren políticas a mediano y largo plazos para apoyar los frágiles sistemas alimentarios en el país. Los 500 integrantes de esta caravana, que llegan alrededor de las 2 de la tarde en caballos, tres tráileres y más de 20 tractores, denuncian que el gobierno federal haya olvidado el apoyo a los programas del campo en los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y lamentan la falta de fuentes de empleo. Los indignados pernoctarán en la capital potosina para partir el viernes a las 10 de la mañana rumbo a Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Luego a Querétaro y por último al Distrito Federal.

Cuando falta un mes para que se cumplan seis años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores del carbón, los deudos de las víctimas realizan una misa frente a las oficinas de Grupo México, con la finalidad de recordar a familiares y compañeros fallecidos, y demandar justicia. Durante la ceremonia religiosa anuncian que volverán a movilizarse con el propósito de insistir en que después de 72 meses de la explosión ocurrida en la mina ubicada en Coahuila, mantienen la demanda de que se rescaten los cuerpos. Integrantes de la Familia Pasta de Conchos, del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) indican que volverán a manifestarse en demanda de que se dictamine la iniciativa de ley por la que se crea la comisión reguladora de la industria del carbón, presentada en la Cámara de Senadores el 14 de diciembre pasado.

Sindicatos universitarios, de bachillerato y formación básica anuncian que se movilizarán el 27 de enero en la ciudad de México en defensa de la educación pública y por la estabilidad en el empleo, en una jornada de lucha nacional que incluye unirse a las manifestaciones de otros sectores sociales en favor de la seguridad alimentaria y el derecho a trabajo digno, convocada para el día 31. En conferencia de prensa, Arturo Vega, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam), e integrantes del Frente Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), hace un llamado a los empleados del sector educativo “a cerrar

filas ante el embate del gobierno federal contra sus derechos laborales y sindicales, que incluso ha negado la toma de nota a representaciones gremiales legalmente constituidas”.

Integrantes de la Unión de Trabajadores Afectados y Defraudados por el Fovissste realizan un mitin, ante las oficinas centrales del ISSSTE, en demanda de que se desista de las demandas penales que presentó en su contra, se respeten los términos de pago que señalan las escrituras públicas que firmaron y se realice una auditoría al organismo. Los trabajadores se movilizan para exigir solución al conflicto que enfrentan, ya “que recibieron un crédito para vivienda en demasía y les dijeron que les iban a cobrar en 30 años a razón de 30% de su salario, y ahora les quieren aplicar descuentos de 50%, pagos semestrales de 10 mil a 20 mil pesos y cambiar los términos de los contratos”.

El SNTE, encabezado por Elba Esther Gordillo, reprueba la protesta de sus compañeros disidentes al señalar “que no es con la suspensión de clases ni con el bloqueo de vialidades como se obtendrán acuerdos, ya que el paro que realizaron el pasado miércoles en escuelas de la capital del país lesiona la calidad educativa, el desarrollo de los alumnos, la imagen positiva del gremio y trastoca la vida de una comunidad”. Así mismo, acusa a la CNTE de “tener intereses particulares, ignorar los canales de diálogo y optar por estrategias que afectan derechos de terceros”. En un comunicado, afirma que “los canales de diálogo de ese sindicato están abiertos para resolver cualquier diferencia y atender las legítimas demandas sindicales y educativas de sus agremiados”.

Viernes 20

Comunistas, socialistas y marxistas que apoyan la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, advierten que el triunfo del tabasqueño el próximo 1º de julio es una posibilidad real, pero requiere de la ampliación de la alianza con nuevas fuerzas políticas y sociales, sin que implique correrse hacia el centro político. En conferencia de prensa, Leonel Posadas, Arturo Martínez Nateras, José Luis Alonso y Carlos Daniel García dan a conocer que realizarán un encuentro en el que aprobarán un manifiesto, en el que definirán su forma de participación en la campaña del candidato a la Presidencia de la República del PRD, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, así como otros esfuerzos de reorganización y unidad. En ese proyecto de documento los firmantes, muchos de ellos integrantes del extinto Partido Comunista Mexicano (PCM), advierten que el apoyo a López Obrador es “sin seguidismo, con posiciones propias, a la izquierda de lo que el candidato sostiene”.

El investigador Arturo Miranda Ramírez, de la UAG, anuncia que al menos 25 catedráticos de esa y otras instituciones educativas están dispuestos a impartir clases en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “con la finalidad de rescatar el semestre, y sobre todo, para que no desaparezca ese plantel, como al parecer es la intención del actual gobierno”. Por su parte, Pablo Juárez Cruz, dirigente de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón, asegura que la base estudiantil de Ayotzinapa acepta la propuesta de los docentes, aunque precisó que ahora corresponde a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) aceptar dicho planteamiento.

Los pobladores de la comunidad indígena triqui de San Juan Copala, desplazados desde hace 17 meses por las agresiones de grupos paramilitares –según denuncian–, anuncian que regresarán a sus casas el próximo 23 de enero, partiendo en caravana desde la ciudad de México. Reyna Martínez Flores, representante de los refugiados, informa en conferencia de prensa que las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de 135 activistas hacen posible el retorno en condiciones de seguridad, si bien todavía faltan por ejecutarse algunas órdenes de aprehensión contra miembros de organizaciones que han agredido a los copaleños. La caravana de retorno, integrada por unas 350 personas, partirá el domingo 22 de enero a las 9 de la mañana desde el Zócalo del Distrito Federal hacia la capital de Oaxaca, donde llegará en la noche,

para arribar finalmente a San Juan Copala el lunes 23, escoltada por las policías Federal y estatal, tal como se comprometió el secretario general de Gobierno de Oaxaca, Jesús Martínez Álvarez.

La dirigencia del SME acude a las instalaciones de la SEGOB, para sostener una nueva reunión con representantes del gobierno federal, en busca de una solución al conflicto que enfrentan más de 15 mil ex trabajadores de LFC en lucha durante más de dos años. Aunque no hay avances concretos, los líderes califican de positivo el encuentro, “porque se plantearon propuestas de ambas partes para la reinserción de los electricistas al mercado laboral en el mismo sector”, explica el vocero del SME, Humberto Montes de Oca. Resalta que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, fue enfático al señalar que está en la mejor disposición de lograr una solución. Incluso, asegura, de parte de las autoridades se presentó nueva propuesta para crear una sociedad anónima. Los detalles del proyecto se presentarán a los trabajadores en la reunión que se efectuará el martes 24 de este mes.

Durante la madrugada, habitantes de Temoaya, Estado de México, prenden fuego a la comandancia municipal, a la fachada de la alcaldía y a cinco vehículos, entre ellos una patrulla, en protesta por que la policía local les impidió linchar a un presunto delincuente. Dichos hechos ocurren por la tarde de ayer, cuando Alejandro Martínez, de 23 años, robó la bicicleta a una niña, que resultó ser hija de un delegado municipal, quien junto con un grupo de personas capturó y sometió al atracador. El joven fue llevado al centro del municipio y en la plaza, amarrado. Según comentan los inconformes, el retenido se dedicaba al secuestro, lo que provocó la ira de una turba que lo golpeó varias veces y le aventó piedras.

Cuarenta integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero, con sede en Cananea, Sonora, instalan un plantón frente al palacio de gobierno, en la capital del estado, para exigir la liberación de su compañero Martín Salazar Arvayo, detenido hace más de un año y medio, quien aún no recibe sentencia por un delito del que, aseguran, es inocente. El minero, recluido en un penal de Agua Prieta, fue acusado en 2010 de lesionar a un empleado de una compañía contratada por Grupo México para trabajar en el yacimiento; sin embargo, los testigos de la agresión del trabajador no identificaron a Salazar Arvayo como el atacante, señalan los inconformes. Con pancartas los trabajadores de la sección 65 también protestan por la forma en que las autoridades federales junto con la compañía minera violaron el derecho a huelga de los trabajadores del socavón en Cananea. Los manifestantes, encabezados por Sergio Tolano Lizárraga, secretario de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero, advierten que permanecerán en Hermosillo varios días para exigir a las autoridades el respeto a los derechos de los empleados que iniciaron una huelga el 30 de julio de 2007 y fueron desalojados del yacimiento el 5 de junio de 2011.

Dirigentes de organizaciones campesinas denuncian al gobierno de Felipe Calderón de mentir sobre la efectividad de las acciones para mitigar los efectos de la sequía, y advierten que de no convocar a todos los actores a pactar acciones que garanticen una producción suficiente para el próximo ciclo agrícola, habrá estallidos sociales en el país. A nombre del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), que agrupa a 14 confederaciones y organizaciones del campo, Federico Ovalle, sostiene que más allá del “juego perverso de cifras de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la SAGARPA y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que aseguran que sí hay recursos para atender la emergencia climática, la realidad nos alcanza y podríamos tener una “primavera árabe”, caracterizada por la inconformidad social”.

Vecinos del pueblo de Xoco, en la delegación Benito Juárez, Distrito Federal, bloquean durante más de dos horas la calle Puente de Xoco en protesta por la construcción de un complejo inmobiliario, denominado Ciudad Progresiva Mitikah, que incluye, entre otros edificios, una torre de 60 niveles, que además de significar una violación al uso de suelo en la zona, ha causado daños a sus viviendas y a la iglesia de la comunidad. Los quejosos explican que los trabajos de excavación de más de 30

metros de profundidad para la realización de un estacionamiento subterráneo de seis niveles provocaron que el pasado jueves se abrieran grietas de hasta cinco centímetros en paredes, piso y techo del templo de San Sebastián Xoco, que data del siglo XVII y está considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como monumento histórico. Estos daños, manifiestan, se suman a los que han sufrido las casas aledañas a lo que será el complejo, algunas construidas con adobe, que también muestran fracturas en paredes, además de las afectaciones que este complejo traerá en el suministro de servicios básicos y problemas de movilidad.

Trabajadores de limpia del Distrito Federal se manifiestan durante cuatro horas frente a la sede de la delegación Cuauhtémoc para rechazar la pretensión de las autoridades de la demarcación de concesionar el servicio a empresas privadas con el argumento de elevar su eficiencia, y exigir mejores condiciones de trabajo. Durante la protesta, los empleados, que bloquean con poco más de cien camiones de recolección de basura las calles aledañas al inmueble delegacional, queman un sillón y árboles de Navidad en la explanada principal.

Durante más de dos horas, vecinos de la colonia Santa Fe, Distrito Federal, protestan en diferentes accesos a la zona para manifestar su rechazo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano que, aseguran, provocaría un importante aumento en la densidad poblacional. El presidente de la Asociación Centro por el Derecho Urbano de Santa Fe, Gerardo Ocampo Díaz, explica que en la zona habitan 35 mil personas y la población flotante, entre trabajadores y clientes que acuden diariamente a los corporativos y comercios, es de alrededor de 150 mil, lo que genera severos problemas de circulación vial.

Sábado 21

Una decena de comunidades tzeltales, tzotziles y choles, adherentes de *la otra campaña*, declaran que “en Chiapas las estrategias de despojo representadas por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) y por el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar” (FANAR) en contra de la propiedad comunal y ejidal han sido la meta fundamental de Juan Sabines y de Felipe Calderón en este sexenio”. Los indígenas sostienen que con los megaproyectos para bajo el supuesto del desarrollo sustentable, las ciudades rurales, el ecoturismo, el Programa Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Regiones Prioritarias (PRODESIS), la Estrategia de Desarrollo de los Estados del Sur (EDES), consensuados en la Cámara de Diputados para implementar el corredor biológico, turístico y ecoarqueológico, se pretende despoblar y repoblar los territorios indígenas, hasta lograr un nuevo Cancún en Chiapas, consolidando el Corredor Biológico Mesoamericano para poner toda la riqueza natural de nuestras tierras y territorios en manos transnacionales.

Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de El Barzón, informa que el lunes al mediodía se iniciarán las mesas de negociación entre campesinos y autoridades en la SEGOB, dependencia donde se instalará el campamento contra el hambre y la carestía con toda la maquinaria agrícola y los contingentes de todo el país que participaron en la Caravana del Hambre, que partió desde Chihuahua y cuya entrada a la ciudad de México se prevé para este domingo a las 2 de la tarde. Los campesinos demandan superar el conflicto entre el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados en torno a la asignación de recursos para atender los efectos de la sequía y trabajar en un verdadero programa de emergencia. Exigen que se duplique el monto asignado para fondo de emergencia, que actualmente asciende a 13 mil millones de pesos, y que pueda utilizarse en los primeros meses del año para atender la contingencia. Proponen la creación de un observatorio internacional para vigilar la aplicación de esos recursos, el cual estaría conformado por instituciones como la FAO, la Cruz Roja y Oxfam.

El diputado local, en el Distrito Federal, del Partido Acción Nacional (PAN) Federico Manzo demanda a la delegación Benito Juárez sancionar a la empresa encargada del desarrollo inmobiliario Ciudad Progresiva que se construye en el pueblo de Xoco, pues “además de generar diversos daños a la estructura de casas de los vecinos, se ha afectado a la iglesia de San Sebastián Mártir, considerada como monumento histórico por el INAH”.

Domingo 22

Con caballos, vacas, tractores e instrumentos de labranza arriban al Distrito Federal organizaciones campesinas del norte del país, en la Caravana del hambre, o también llamada Caravana de campesinos indignados, para demandar al presidente Felipe Calderón y a los legisladores que se enfrente, con acciones concertadas y contundentes la emergencia agroalimentaria y ambiental que padecen, y se tomen medidas urgentes, además de emprender un cambio profundo en la política del campo mexicano. Desde Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y otros estados llegan las organizaciones integrantes de El Barzón, la Central Campesina Cardenista (CCC), Unión Campesina Democrática (UCD), entre muchas otras, así como un grupo de rarámuris. Pasado el mediodía se concentran en el Monumento a la Revolución, de donde emprenden una marcha hacia el Zócalo. Anuncian que este lunes acudirán a la SEGOB y que dependiendo de la respuesta que obtengan marcharán a Los Pinos. En un manifiesto público, demandan al gobierno federal más fondos para enfrentar la peor sequía, que los ha dejado sin sustento, y señalan que es impostergable atacar las causas que han conducido al aumento de precios de alimentos y energéticos en el país, a la degradación de recursos naturales y al calentamiento ambiental, “que son críticos para el desarrollo sustentable y afectan más a las regiones marginadas”.

Fabián Sánchez, director ejecutivo de la organización civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), y Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), manifiestan que el Informe Mundial 2012 de Human Rights Watch (HRW) (presentado en el Cairo, Egipto) fortalece el llamado de los organismos internacionales y organizaciones nacionales a que se modifique la política de combate al crimen. Pese a los insistentes llamados que han formulado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), la propia HRW, la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la CIDH, así como organizaciones nacionales de defensa de las garantías, afirman, “Calderón persiste en su posición de no modificar su política de combate al crimen organizado. No hay poder humano ni instrumentos nacionales ni internacionales que logren que el titular del Ejecutivo modifique su estrategia”.

Jóvenes de Nuevo León, integrantes del Morena, comienzan una campaña informativa en calles de Monterrey, capital del estado, para dar a conocer las propuestas del nuevo proyecto de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de las izquierdas. Los jóvenes realizan actividades en los cruces de Garza Sada y 2 de Abril, así como en el de Pino Suárez y Ocampo, entre otros puntos del centro de Monterrey, donde entregan información a automovilistas sobre los aumentos a la gasolina; además, presentan a transeúntes y conductores las alternativas que López Obrador plantea para frenar los incrementos a los energéticos derivados del petróleo, entre ellas el desarrollo del transporte público, reducir el uso de automóviles y fomentar la recuperación de espacios públicos.

El pueblo purépecha de Cherán, en Michoacán, elige a los 12 integrantes del concejo mayor que se desempeñarán como autoridades municipales, electos mediante el sistema de usos y costumbres. Las asambleas realizadas en los cuatro barrios son supervisadas por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). En un acto histórico –como definió la presidenta del IEM, María de los Ángeles Llanderal–, 2 mil 856 pobladores –14.5% del total de la población– se registran para participar en

los comicios. De forma extraordinaria eligen a sus representantes, levantando la mano para votar por quienes asumirán el cargo el próximo 5 de febrero, para concluir en diciembre de 2015. A las 10 de la mañana se inició el registro de los participantes en cada sede de los cuatro barrios de esta población purépecha de aproximadamente 20 mil habitantes. El método consistió en leer la convocatoria que se colocó en carteles de todo el pueblo; después los ciudadanos propusieron y explicaron por qué los eligieron para formar parte del concejo. La titular del IEM anuncia que este miércoles sesionarán para revisar el proceso de esta elección y, en su caso, validarla.

Debido a un conflicto agrario pobladores de Santo Domingo Yosonáma, San Juan Nímí, Oaxaca, atacan por la mañana a comuneros de Pueblo Viejo, en San Juan Mixtepec, lo que deja un muerto y dos heridos. Según la policía estatal, habitantes de Santo Domingo entraron en terrenos del pueblo vecino y mientras disparaban sus armas incendiaban pastizales y árboles. Bartolo Juárez, vecino de Pueblo Viejo, es la persona que fallece; otras dos personas resultan heridas.

Estudiantes de diversas universidades públicas realizarán una campaña informativa para dar a conocer a la población los perjuicios contra la sociedad y la juventud del programa de créditos para estudiar en colegios privados de educación superior instaurado por Felipe Calderón. Durante una actividad cultural en el Zócalo de la ciudad de México, los alumnos de la UNAM, la UAM, UACM, UPN y del IPN –muchos de ellos agrupados en el MORENA– señalan que la información se llevará a jóvenes de diversas instituciones particulares. Aprovechan para demandar nuevamente la suspensión de ese programa y que los 2 mil 500 millones de pesos que se usarán para el primer año de operación y se destinen a resolver dos temas fundamentales que hoy enfrenta el país: la crisis del campo y contrarrestar la hambruna en la sierra Tarahumara de Chihuahua.

Tres personas son detenidas por granaderos luego de un enfrentamiento, que derivó en intento de linchamiento, entre presuntos compradores de terrenos y comuneros del poblado de San Miguel Xicalco, en la delegación Tlalpan, Distrito Federal. Los detenidos son Viviana Torres Trejo, de 20 años, y sus hermanos Érik, de 19, y Christian, de 25, quienes son puestos a disposición de la agencia 50 del Ministerio Público, en el edificio principal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Lunes 23

AI emite una alerta de acción urgente para las familias de tres hombres que denunciaron haber sido torturados mientras estaban bajo custodia del Ejército en Baja California, en 2009, a raíz de lo cual sufren intimidación y amenazas de personal militar. Los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez fueron detenidos en 2009 por soldados en Playas de Rosarito, Baja California, tras lo cual culparon a los militares de tenerlos incomunicados en la base castrense de Tijuana durante dos semanas, donde fueron sometidos a palizas, simulación de ejecución, privación del sueño y otras torturas. María Isabel Reyna Martínez González, madre de Ramiro y Rodrigo, denuncia que el 13 de enero pasado militares trataron de derribar su puerta a patadas. Un día antes, ocho militares rodearon la casa de Mayra López Vázquez, hermana de Ramiro López Vázquez –otro detenido en las Playas de Rosarito, junto con los hermanos Ramírez Martínez–, quien denunció que los soldados dijeron que querían tomar fotos de la casa porque presentaron denuncia contra el Ejército.

La dirigencia estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa denuncia ante Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997, la represión de que fueron objeto el pasado 12 de diciembre. Jody Williams les responde: “Una cosa que les puedo decir es que mañana tendremos citas en el Distrito Federal con oficiales del gobierno (funcionarios), y yo voy a hablar de esto”. Los estudiantes abordan a la Nobel, al término del encuentro de mujeres guerrerenses y la delegación internacional de Iniciativa de Mujeres Nobel, y dialogan por espacio de 15 minutos. En voz de Pablo Juárez Cruz,

le explican el objetivo de la movilización del 12 de diciembre y le aseguran que en las 16 normales rurales del país estudian los hijos de los campesinos y los trabajadores pobres, de bajos recursos. “Es el único lugar donde podemos estudiar, y por eso exigimos apoyos al gobierno”, comentan.

La organización civil Abejas de Acteal exigen una explicación al gobierno de Juan Sabines Guerrero por el destino de la Fiscalía Especial para Acteal. Esta instancia, sostiene la organización indígena, “era un órgano del Estado que nunca rindió un informe a la sociedad sobre sus resultados y desapareció tan silenciosamente como se creó”. Reiteran su desacuerdo con la manera en que se sigue en Estados Unidos un proceso civil contra el ex presidente Ernesto Zedillo, mas no con el hecho de que debe juzgarse a todos los autores intelectuales de la matanza, incluyendo por supuesto a Zedillo, “cuya inmunidad, solicitada por él y respaldada por el gobierno de Felipe Calderón es inaceptable. Nadie puede estar por encima de la ley, menos todavía Zedillo, porque está manchado de sangre” sentencian.

Agentes antimotines de la policía estatal de Oaxaca desalojan con violencia a pobladores de Magdalena Apasco, región de Valles Centrales, que realizaban un bloqueo sobre la carretera Cristóbal Colón, frente al acceso del parque industrial. Los inconformes interrumpen por la mañana el tránsito con varios automóviles, para presionar a que la administración estatal reconozca a Enrique Martínez Chávez como presidente municipal, en sustitución de Antonio Pérez Montes, quien pidió licencia al cabildo y luego la retiró para reasumir el cargo. Los policías dispersan con gases lacrimógenos a los pobladores, pero éstos responden lanzando piedras y palos, lo que deja tres policías lesionados, uno de ellos, Agustín Abad Velasco, resulta descalabrado; cinco pobladores quedan golpeados e intoxicados por el gas.

Martes 24

El SME informa que empezará sendas campañas contra el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, y de la aspirante al Gobierno del Distrito Federal, Beatriz Paredes. Aseguran que “el primero aceptó que su partido validó la desaparición de LFC, que generó el despido de 44 mil electricistas, lo que lo revela como otro enemigo de los trabajadores, y la segunda, por haber operado para que no hubiera controversia constitucional contra el decreto expropiatorio”. En conferencia de prensa, el secretario general del SME, Martín Esparza, señala que las campañas contra los priístas consisten en informar a la opinión pública por medio de volantes, mantas, pancartas, foros y otros medios, que “Peña Nieto es otro hijo del neoliberalismo, que seguirá la política de privatización salinista y que incluso se ha pronunciado por la aprobación de la reforma laboral”.

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que cursan el cuarto grado reanudan este martes sus prácticas –suspendidas desde el 7 de noviembre– en las escuelas primarias donde se desempeñaban antes del desalojo policiaco ocurrido el 12 de diciembre. No obstante, los integrantes de los otros tres grados permanecen en paro de labores. Mientras tanto, Arturo Miranda, investigador de la UAG, informa que el rector Asencio Villegas Arrizón aceptó que más de 30 maestros de esa casa de estudios impartan clases a los normalistas para que no se pierda el semestre. Subraya que Villegas Arrizón está dispuesto a mediar en el conflicto entre los estudiantes, el gobierno estatal y el federal. Al respecto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero declara: “Saludo la propuesta de que la UAG, mediante el rector, intervenga para que se pueda restablecer la comunicación con los jóvenes”. En el puerto de Acapulco, representantes del comité de prensa de la Normal de Ayotzinapa demandan a las autoridades realizar las gestiones correspondientes para que no pierdan el ciclo escolar. La SEP pone como límite esta semana para la reanudación de labores, pero confían en que haya flexibilidad.

Por segundo día consecutivo, la presidencia municipal de Texcoco, en el Estado de México, permanece ocupada por pobladores de la comunidad de Santiago Cuautlalpan, quienes rechazan la invasión y el fraccionamiento de un predio de 38 hectáreas de esa localidad por integrantes de la organización priísta Antorcha Popular. Unos 200 pobladores de Cuautlalpan instalan un campamento fuera de la alcaldía, donde permanecían al cierre de esta edición. Manuel Rodríguez, delegado de Santiago Cuautlalpan, informa que el alcalde priísta Amado Acosta se ha negado a recibirlos pese a que en varias ocasiones le han pedido intervenir. Advierte que permanecerán ahí hasta que les den una solución.

Miércoles 25

Ante la embajada de Canadá en México, integrantes de la CPUVO, del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida (LAVIDA), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) y Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entre otros, exponen que 26% del territorio nacional ya está en manos de mineras, y de los 757 proyectos, 73% son canadienses. Durante la protesta se abordan de los casos del cerro de San Pedro y del llamado Cerro Pelón, en Real de Catorce, San Luis Potosí; la mina Caballo Blanco, en Veracruz, y de diversos casos en Michoacán, Chihuahua, Baja California, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guerrero y Chiapas. “Estas explotaciones mineras nos están quitando el agua y ponen en riesgo la vida comunitaria. Están saqueando el país”, afirman.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan) informa que Maximino García Catarino, integrante de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), fue detenido por policías ministeriales de Guerrero y puesto a disposición de un juez, acusado de homicidio. La organización defensora de derechos humanos precisa que el sábado pasado García Catarino fue detenido en la comunidad de Juquila, municipio de Ayutla de los Libres, cuando se encontraba con su familia. El activista es presentado ante Inocente Orduño Magallón, juez penal de primera instancia del distrito judicial de Allende, donde se le informó que fue detenido como parte de la causa penal 04/2012 por el homicidio de Juan Teodoro García. El próximo viernes el juez determinará la situación jurídica de García Catarino. Si es procesado Tlachinollan asumirá su defensa. Abogados de la organización señalan que García Catarino fue golpeado por sus captores y no fue puesto de inmediato a disposición del juez de Ayutla, lo que retrasó su declaración preparatoria. La acusación, aseguran, “contiene graves irregularidades y entre los testigos de cargo hay contradicciones evidentes; además, hubo manipulación deliberada del cuerpo del occiso”.

La policía estatal detiene a tres indígenas triquis que portaban ropas de camuflaje y armas de uso militar con miras telescópicas en la comunidad Valle del Río San Pedro, en San Juan Copala. Los detenidos son Manuel Ramírez Sosa, Manuel Francisco Ramírez y Jaime Ramírez Martínez. Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), denuncia que los agentes irrumpieron en la comunidad y robaron a pobladores.

Más de 500 campesinos del municipio de Axochiapan, Morelos, se plantan frente al palacio de gobierno del estado para exigir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que construya un puente vehicular sobre el río Amatzinac. Según los labriegos, la obra, que comunicaría Morelos con Puebla, estaba presupuestada en 2011. La movilización concluye a las 4 de la tarde, cuando el gobierno estatal realiza la promesa a los campesinos construir el puente.

Jueves 26

La PGJG consigna a dos agentes ministeriales como presuntos responsables de la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; en tanto, la PGR interroga en la ciudad de México a ocho funcionarios guerrerenses, quienes inicialmente fueron detenidos en cumplimiento de una orden de localización y presentación ante el MPF y horas después fueron dejados en libertad. En Guerrero, el encargado de despacho de la procuraduría local, Juan Manuel Herrera Campos, informa que los agentes Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores, de la Policía Ministerial, son consignados a un juez penal del distrito judicial de Los Bravo, como probables responsables de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad en los hechos que provocaron la muerte de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, durante un desalojo. Tras la consignación de los agentes, decenas de policías ministeriales y sus familias marchan en Chilpancingo, a Casa Guerrero, al Congreso del estado y al palacio de gobierno para protestar contra el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, a quien acusan de “dejarlos solos y tomar una actitud en la que el hilo se rompa por lo más delgado”, por lo que solicitan al mandatario local que se haga una investigación y se castigue a los verdaderos responsables; “no más compañeros arraigados ni chivos expiatorios, queremos que les ponga un abogado a los arraigados; el gobernador sabe muy bien quién inició el desalojo de los estudiantes de la Normal” denuncian.

Indígenas de San Juan Copala pertenecientes al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) abandonan el campamento que durante 16 meses mantuvieron en el portal del palacio de gobierno de Oaxaca y regresan a su comunidad, de donde habían sido desalojados por presuntos paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta. Los desplazados, quienes cuentan con medidas cautelares dictadas por la CIDH, abordan dos autobuses y tres camionetas para dirigirse a Yosoyuxi y después a San Juan Copala, acompañados por activistas de *la otra campaña*.

Cientos de empleados administrativos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en Saltillo, Coahuila, cumplen dos días de paro en demanda de que la rectoría, que encabeza el investigador Eladio Cornejo Oviedo, cumpla diversos acuerdos. Los manifestantes, afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la UAAAN, señalan que no se ha recategorizado a varios empleados; tampoco se han mejorado las instalaciones del comedor, que utilizan empleados y alumnos, y no se han entregado al sindicato plazas vacantes. El dirigente gremial Gustavo Lara Sánchez advierte con iniciar una huelga si no reciben respuesta a sus demandas este fin de semana. Por su parte, Cornejo Oviedo considera que el paro no está justificado, “pues la única demanda justa es la relacionada con la falta de mantenimiento del comedor”.

Una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México visita, en el penal del municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, al indígena mixteco Maximino García Catarino, acusado del asesinato de Juan Teodoro García. El objetivo de la visita es documentar la situación en que se encuentra el dirigente y las presuntas violaciones a sus derechos humanos luego de su detención en la comunidad Juquila, municipio de Ayutla de los Libres, el 21 de enero. En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informa, en el juzgado mixto de primera instancia, la defensa de García Catarino presentó las declaraciones de tres testigos que sostuvieron que en la hora y fecha del homicidio atribuido al mixteco éste gestionaba en Ayutla obras públicas para su comunidad.

Representantes del sindicato de trabajadores de la UACM anuncian que marcharán este viernes en demanda de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emita una

recomendación a la rectora de esa casa de estudios, Esther Orozco, ante el recrudecimiento del clima de persecución política y violación a los derechos humanos, así como por el despido de nueve profesores y empleados administrativos. En conferencia de prensa exigen a la JFCA el otorgamiento de la toma de nota de la planilla Autonomía Sindical, representada por María Auxilio Heredia, como secretaria general para el periodo 2011-2013, quien ganó en la elección celebrada el 27 de octubre y no se le ha reconocido por la aparición de otro grupo, encabezado por David Gaytán, quien es gente cercana a la rectora. Asimismo, demandan la entrega de 2.5 millones de pesos de cuotas sindicales que la autoridad ha retenido de manera arbitraria con el propósito de desarticular el sindicato, pues “no contamos con recursos para pagar a un abogado y los que nos apoyan lo hacen de manera gratuita, por el clima de acoso y de terrorismo que vivimos todos los días”, señalan.

Viernes 27

Unas 50 personas, entre activistas y parientes de desaparecidos, protestan la mañana de frente al Palacio de Gobierno, en Monterrey, Nuevo León, para exigir al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz que se haga justicia. La agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadha) calcula que 35% de más de mil desaparecidos del estado serían responsabilidad directa de fuerzas policiacas estatales y municipales, así como de elementos de la Marina y el Ejército. Consuelo Morales Elizondo, directora de Cadha, afirma que es indispensable que se tipifique el delito de desaparición forzada, que incluiría: privación ilegal de la libertad, aquiescencia del Estado y negativa a dar información sobre el paradero de personas.

Unos 200 elementos de la policía ministerial del estado, personal administrativo de la corporación y sus familiares protestan frente a las instalaciones de la PGJG y del palacio de gobierno, en Chilpancingo, Guerrero, para exigir audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, y la liberación de sus compañeros Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, acusados del asesinato de los dos alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Unos 200 agentes de la Policía estatal de Oaxaca impiden el regreso a San Juan Copala de los indígenas triquis que ayer abandonaron el campamento que durante 16 meses mantuvieron en los portales del palacio de gobierno. Las autoridades argumentan que no existen condiciones de seguridad en la zona, donde operan presuntos grupos paramilitares. Los integrantes del MULTI abandonaron el zócalo de la ciudad de Oaxaca pasado el mediodía del jueves, pero aproximadamente a las 20:20 los policías obstruyeron la carretera Alfonso Pérez Gazga en las inmediaciones del puente Santa Catarina, siete kilómetros después de que habían pasado Tlaxiaco. Los indígenas, que cuentan con medidas cautelares de la CIDH, y activistas de *La otra campaña* que los acompañan, regresan a Tlaxiaco.

El juez del distrito judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, Inocente Orduño, dicta auto de formal prisión a Maximino García, defensor indígena na savi –mixteco– de derechos humanos, acusado de homicidio contra Juan Teodoro García. Para el Centro Tlachinollan, la determinación del juez es violatoria del derecho a la presunción de inocencia, y tras la resolución será sometido a un proceso penal. Los únicos elementos que tiene el Poder Judicial son dos testigos de cargo, asegura su abogado Viduldo Rosales.

Trabajadores del sector universitario, del SME y de organizaciones gremiales del Gobierno del Distrito Federal se movilizan en la capital del país en demanda de un incremento a sus ingresos que rompa con el tope salarial, por la defensa de la plaza de base y la autonomía sindical. Ante lo que consideran un “sistemático ataque a sus condiciones laborales”, llaman a todos los sindicatos democráticos del país a impulsar una nueva central obrera independiente. Cerca de 5 mil

manifestantes parten del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución, donde exigen una solución a las negociaciones salariales y contractuales de 35 gremios universitarios en toda la República, así como que se instale una mesa de negociación con autoridades del gobierno capitalino para atender las demandas de mil 500 ex empleados del GDF, quienes piden su reinstalación.

Con antorchas, pancartas y consignas para exigir la salida de la rectora de la UACM, Esther Orozco Orozco, más de 200 trabajadores administrativos y académicos, así como estudiantes de esa casa de estudios, se manifiestan frente a la sede de la CDHDF. El motivo es exigir al organismo que dé curso a las quejas que desde hace casi un año presentaron contra la rectora por el acoso, agresiones, discriminaciones y despidos injustificados en agravio de integrantes de la comunidad universitaria que han cuestionado la gestión de la rectora. Una vez que en su destino, los manifestantes organizan un mitin en el que demandan que se reinstale en sus empleos a cinco profesores que han sido despedidos de manera injustificada y que suspenda el proceso iniciado contra el maestro Claudio Albertini, a quien, aseguran, se pretende separar de la institución por manifestarse contra Esther Orozco.

Vecinos del pueblo de Xoco informan que fueron rotos algunos de los sellos de suspensión de actividades de la obra Ciudad Progresiva, que incluye una torre de 60 niveles, que hace una semana colocó personal del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea-DF) y la delegación Benito Juárez, luego de que los trabajos provocaran daños en la iglesia de San Sebastián, considerada como monumento histórico. Aunque hasta el momento no se ha detectado que se haya reiniciado la obra, algunos colonos aseguran que han visto vehículos y trabajadores de la empresa Ideurban entrando al predio en las noches por el acceso de Real de Mayorazgo, aparentemente para sacar herramienta del predio.

Sábado 28

Los indígenas triquis desplazados de San Juan Copala, aceptan la propuesta del gobierno estatal de esperar la decisión de la asamblea general de la comunidad que se realizará este domingo para convenir su regreso, luego de una reunión celebrada durante más de siete horas en la ciudad de Tlaxiaco. El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, afirma que los representantes de los indígenas triquis, Reina Martínez Flores y Marcos Albino Ortiz, mostraron gran disposición para contribuir al proceso de paz y para que el retorno se realice con seguridad y tranquilidad. Por su parte, los indígenas triquis desplazados –que se encontraban en Tlaxiaco, después de que la Policía Estatal impidió su paso a San Juan Copala, para evitar algún hecho de violencia–, se desplazan al pueblo cercano de Yosoyuxi, en espera del resultado de la asamblea comunitaria.

Vecinos del pueblo de Xoco, en el Distrito Federal, advierten a las autoridades de Protección Civil que no permitirán que se inicien los trabajos de mitigación por las afectaciones provocadas durante las excavaciones realizadas en el predio de avenida Real de Mayorazgo 130 como parte del complejo Ciudad Progresiva, hasta que no se les dé a conocer el dictamen del INAH en el que se establezca que no hay restos arqueológicos en el lugar, como presumen los colonos.

El SME rechaza que integrantes del gremio hayan increpado a Ernesto Cordero Arroyo, precandidato del PAN a la Presidencia de la República, durante un acto realizado el viernes pasado. En un comunicado, el SME expresa que se trata de un burdo montaje mediático que pretende distorsionar la imagen sobre la lucha de esta organización que es encabezada por Martín Esparza.

Domingo 29

El colectivo Ágora Ciudadana, creado para dar espacio a las inquietudes de la población sobre la situación de violencia en Monterrey, Nuevo León, luego del atentado perpetrado el 25 de agosto pasado contra el casino Royale, donde murieron 52 personas, realiza una marcha, en el contexto de una serie de estrategias que promueven la participación ciudadana como forma de resistencia a la violencia. Herminio Gómez, uno de los oradores en un mitin efectuado al final de la movilización, en la explanada de Los Héroes, demanda acabar con la violencia que mantiene a los mexicanos en situación de miedo, y considera “que la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón atenta contra la Constitución”.

Eduardo Meza Gómez, de la dirigencia estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, anuncia que las clases no se reiniciarán este lunes, como se tenía previsto, debido a diferencias con el rector de la UAG, Asencio Villegas Arrizón, y responsabiliza a la titular de la SEG, Silvia Romero Suárez, si se pierde el semestre, “por incapaz e incompetente, además de que fue la que ordenó que suspendieran los recursos para el comedor, dejando sin comer a 520 alumnos desde el pasado 7 de diciembre”.

Lunes 30

Organizaciones campesinas demandan la aplicación inmediata de programas emergentes de fomento a la producción de granos y oleaginosas y atención a la ganadería. Afirman que es increíble que los productores tengan que “venir a la ciudad de México para que el gobierno se dé cuenta de que hay una crisis alimentaria en el país”, aseveran durante el plantón frente a la SAGARPA.

Alrededor de 6 mil alumnos resultan afectados con el paro de labores que efectúan este lunes unos 500 profesores de 12 secundarias técnicas pertenecientes a la zona escolar 11 de la SEG, ubicada en el municipio de Acapulco. Los inconformes exigen la recategorización de su salario, regularización de plazas y asignación de horas pendientes desde hace ocho años. Los maestros, afiliados a la sección 14 del SNTE, se concentran en las instalaciones de la delegación de los servicios educativos de la región Acapulco - Coyuca de Benítez, donde esperan entrevistarse con algún representante de la SEG.

Unos 50 mil alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) se quedan sin clases debido al paro de labores que realiza el Sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Sicobatab), en demanda de prestaciones laborales; sin embargo, algunos profesores afirman que el origen de la protesta es un conflicto gremial.

Más de 200 indígenas nahuas de la Montaña baja, en el estado de Guerrero, además de campesinos provenientes de diversos municipios de la entidad, agrupados en el Frente de Defensa Popular (FDP), toman las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) y exigen al gobernador Ángel Aguirre Rivero cumplir con minutas de acuerdos firmadas el año pasado. La dirigente del FDP Alma Delia Guevara Tejedor exige al gobernador que cumpla con los compromisos pactados, que incluyen proyectos de vivienda, productivos, clínicas médicas y pavimentación de caminos, y que envíen maestros a las escuelas donde hacen falta.

Los vecinos del pueblo de Xoco, en Benito Juárez, en el Distrito Federal, aceptan que se haga el relleno de la excavación que la empresa Ideurban realizó en la colindancia de los terrenos del proyecto Ciudad Progresiva y la iglesia de San Sebastián, catalogado como monumento histórico por el INAH. Con la determinación de la comunidad se busca parar el daño al monumento, que data del siglo XVII, mientras se elaboran los dictámenes para determinar la afectación.

Un centenar de trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) se manifiestan en las instalaciones de Promotora Turística del gobierno estatal, en la zona Diamante de Acapulco, para exigir mejores condiciones laborales y garantías de seguridad, luego del asesinato del agente del Ministerio Público Anselmo Santiago Arias, ocurrido el domingo.

Martes 31

Durante seis horas, más de mil personas –entre policías ministeriales, peritos, agentes del Ministerio Público y sus familiares, entre otros– bloquean los carriles de la Autopista del Sol México-Acapulco, en el mismo lugar donde el 12 de diciembre fueron asesinados dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los contingentes exigen al gobernador Ángel Aguirre Rivero la libertad de los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, formalmente presos desde el lunes en la cárcel de Chilpancingo acusados de disparar contra los alumnos Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Al no ser recibidos por ninguna autoridad, los contingentes se trasladan a la Autopista del Sol, adonde arriban a las 3:30 de la tarde y la bloquean, lo que provoca largas filas de vehículos en ambos carriles, y también en la carretera federal, Iguala - Chilpancingo y Acapulco - Chilpancingo. A las 9:30 de la noche se suspende la protesta luego que las autoridades aceptaron formalizar una instancia de diálogo integrada por 15 manifestantes, quienes se reunirán con Aguirre Alcaide.

Decenas de miles de trabajadores y campesinos pactan en el Zócalo de la Ciudad de México, “sacar al PAN de Los Pinos, no dar un solo voto a Acción Nacional ni al *tricolor*, ni a ningún otro partido que haya operado para desemplear y joder al pueblo”. Demandan establecer mesas de diálogo para resolver el grave conflicto provocado por 12 años de gobiernos panistas, el que México tiene hambre. En la sexta movilización que anualmente realizan los sindicatos democráticos y organizaciones campesinas se realiza un pronunciamiento consensuado contra la política del presidente Felipe Calderón, que “se convirtió en enemigo de los trabajadores, y una determinación para que en los próximos comicios no se dé un cheque en blanco a los partidos que los han dañado, y se les castigue en las urnas”.

Glosario de siglas

ACE	Alianza por la Calidad de la Educación
AI	Amnistía Internacional
AMSA	Agroindustrias Unidas de México
Cadhac	Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
CCC	Central Campesina Cardenista
CDI	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CEDH	Consejo Estatal de Derechos Humanos
CEDHAPI	Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas
CEND	Comité Ejecutivo Nacional Democrático
CEREAL	Centro de Reflexión y Acción Laboral
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cidisex	Circuito de la Diversidad Sexual
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Cobatab	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Cocopa	Comisión de Concordia y Pacificación
Conacom	Coordinadora Nacional contra la Militarización
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
Conorp	Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros
CPUVO	Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
DIF	Desarrollo Integral de la Familia
EDES	Estrategia de Desarrollo de los Estados del Sur
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FANAR	Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FDC	Frente Democrático Campesino
FDP	Frente de Defensa Popular
FECSM	Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
Ferromex	Ferrocarriles de México
Fesemss	Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior
FGE	Fiscalía General del Estado
FIR	Frente de Izquierda Revolucionario
FNSU	Frente Nacional de Sindicatos Universitarios
FONDEN	Fondo Nacional de Desastres Nacionales
Fovissste	Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Frayba	Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
GDF	Gobierno del Distrito Federal
HRW	Human Rights Watch
Idheas	Litigio Estratégico en Derechos Humanos
IEM	Instituto Electoral de Michoacán
IFE	Instituto Federal Electoral
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH	Instituto Nacional de Antropología e Historia
INM	Instituto Nacional de Migración
Invea-DF	Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal
IPN	Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
JFCA	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
LAVIDA	Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida
LFC	Luz y Fuerza del Centro
LGBTTTI	Comunidad lésbico-gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual
Limeddh	Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Morena	Movimiento de Regeneración Nacional
Morena-Cultura	Movimiento de Regeneración Nacional - Cultura
MPF	Ministerio Público Federal
MPJD	Movimiento Paz con Justicia y Dignidad
MULTI	Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente
OFPM	Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos
OIM	Organización Internacional de las Migraciones
ONU	Organización de las Naciones Unidas
Opddic	Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
PAN	Partido Acción Nacional
PCM	Partido Comunista Mexicano
PEP	Policía Estatal Preventiva

PGJDF	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
PGJG	Procuraduría General de Justicia de Guerrero
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PROCEDE	Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
PRODESIS	Programa Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Regiones Prioritarias
Profeco	Procuraduría Federal del Consumidor
PT	Partido del Trabajo
REMA	Red Mexicana de Afectados por la Minería
RMALC	Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEC	Secretaría de Educación y Cultura
SEDER	Secretaría de Desarrollo Rural
SEDESOL	Secretaría de Desarrollo Social
SEG	Secretaría de Educación de Guerrero
SEGOB	Secretaría de Gobernación
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Semefo	Servicio Médico Forense
SEP	Secretaría de Educación Pública
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sicobatab	Sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Situam	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNRP	Sindicato Nacional de Redactores de Prensa
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SSA	Secretaría de Salud
Staspe	Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo
SUTGDF	Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal
TFCA	Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
Tlachinollan	Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
UAAAN	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
Ubisort	Unión de Bienestar Social de la Región Triqui
UCD	Unión Campesina Democrática
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UPN	Universidad Pedagógica Nacional

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de País del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Coordinadores: Massimo Modonesi y Lucio Oliver.

Relevamiento y sistematización: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Febrero 2012

Editada en julio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears
Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 109⁴

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México***



Integrantes Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana.

Fuentes Diarios La Jornada y El Universal

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto Social

Febrero 2012

Miércoles 1

Integrantes de los pueblos indígenas denuncian ser marginados del proceso electoral que se llevará a cabo en julio próximo, por lo que exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a los aspirantes a la presidencia de la República, que garanticen su participación “plena y efectiva” en la vida política, social y cultural del país y que avalen la postulación de candidatos indígenas. Entre sus demandas también se encuentra que se modifique el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que las credenciales de elector “tengan nuestra identidad como pueblos indígenas”.

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en cumplimiento de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la noche de este miércoles son liberados siete tzotziles sentenciados por la matanza de 45 indígenas en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, informa Sergio Natarén Gutiérrez, abogado de los acusados y presidente de la Comisión de Derechos Humanos para el Pueblo Evangélico Puertas Abiertas, Asociación Civil.

La policía federal y estatal de Coahuila, así como el Ejército Mexicano, catearon durante los últimos días los reclusorios de Saltillo, Piedras Negras, Sabinas y Acuña. Incautaron dinero en efectivo, electrodomésticos, herramientas de trabajo y armas fabricadas, en poder de los internos. Las revisiones se hicieron sin observadores de derechos humanos y no todo lo decomisado era ilegal, denuncia el obispo de Saltillo, Raúl Vera.

La huelga programada para ayer a las 23hrs en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se conjura debido a que 177 delegados sindicales se pronunciaron por el no a la suspensión de labores, 44 lo hicieron favor y ocho se abstienen. Con esa decisión poco más de 7 mil 800 trabajadores administrativos y docentes recibirán un incremento directo al salario de 3.8 y 2.6 % en prestaciones. Así 45 mil alumnos de licenciatura y posgrado podrán continuar con sus actividades académicas.

En Guadalajara, Jalisco, la laguna de Zapotlán el Grande –que el año pasado fue saneada para ser utilizada en competencias de canotaje de los 16 Juegos Panamericanos– vuelve a convertirse en vertedero de aguas negras. Cada segundo recibe 130lts de líquidos contaminados con coliformes fecales, grasas, aceites y otras sustancias, reportó la Comisión Estatal del Agua (CEA). De acuerdo con el reporte de la más reciente visita que realizaron técnicos de la CEA a la planta número 2 de la cabecera municipal de Zapotlán el Grande, desde el 13 enero de 2012 se descargan aguas sin tratamiento.

En Texcoco, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACH) inicia una huelga, luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades universitarias sobre su demanda de incremento salarial de 20%, pues sólo les ofrecieron 3.8%, un terreno para viviendas de profesores y retabulaciones, entre otros puntos. Los 960 profesores afiliados al STAUACH paran labores a las 15hrs y colocan las banderas rojinegras en los tres principales accesos del *campus* de Texcoco. El paro se extiende a los 11 centros regionales de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Jalisco.

En Morelia, más de cien comuneros de la Meseta Purépecha toman las oficinas de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en demanda del financiamiento para proyectos productivos. Los campesinos purépechas bloquean el acceso a las instalaciones de la SRA y solicitan recursos para financiar granjas familiares, talleres artesanales y viveros, entre otros negocios que, aseguran, son una alternativa para generar empleos. Por otra parte, este miércoles concluye la celebración del Año Nuevo Purépecha en las cuatro regiones de la entidad donde esta etnia tiene presencia. Simbólicamente se apagó 2011 y se encendió el fuego nuevo.

En Querétaro 30 profesores que en octubre llegan transferidos de otros planteles no han cobrado salario desde entonces. La Secretaría de Educación Pública federal, que autorizó su cambio un mes antes, no turnó el llamado “techo financiero” a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado, que sería el nuevo patrón, informa Jaime Escobedo Rodríguez, coordinador de esta dependencia. Los afectados están afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y provienen del Distrito Federal y de los estados de México, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.

Decenas de integrantes de los sindicatos Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) y Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTiems) exigieron al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ramón Montaña Cuadra, el otorgamiento de su toma de nota.

En una manifestación efectuada a las afueras de las oficinas de la junta, ubicadas en Doctor Río de la Loza número 68, implica el cierre de la avenida por más de tres horas. Las organizaciones gremiales denuncian “el contubernio de las autoridades capitalinas con el organismo para debilitar a los sindicatos educativos, como sucedió en la época fascista, cuando el Estado mantuvo el control de los sindicatos, lo que no vamos a permitir”.

Jueves 2

Unos 4 mil elementos del ejército arriban a Michoacán –provenientes del Distrito Federal y Guanajuato– para reforzar los operativos contra el crimen organizado en esa entidad, informan fuentes castrenses. Los soldados comienzan a llegar a Morelia la noche del miércoles en más de medio centenar de vehículos terrestres, y la mañana de día parten a distintos puntos del estado. Los militares reforzarán la vigilancia en poblaciones de la Tierra Caliente –como Apatzingán, Tiquicheo y Huetamo–, la sierra occidental, costa y el municipio de Zamora. Trasciende que el objetivo de las fuerzas federales es detener a miembros de la organización criminal Los caballeros templarios, en específico a Servando Gómez Martínez.

En Chalco, estado de México, “Reconciliación” es la palabra del día. Andrés Manuel López Obrador asevera que no tiene enemistad alguna con Emilio Azcárraga, propietario de Televisa, ni con Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca, ni con Carlos Slim. Reconciliación también al interior de los partidos que lo eligieron nuevamente como abanderado presidencial; es decir, trabajo conjunto con personajes y corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con los que en años anteriores tuvo diferencias. La unidad es su prioridad para ganar el primero de julio y, sobre todo, para rescatar a “un país que se está destruyendo”.

Miguel Ángel Soto Parra, fundador del cártel de Los Zetas, es uno de los más de 50 testigos protegidos que comparten autoridades de México y Estados Unidos, y que de acuerdo con funcionarios que

participan en el gabinete de seguridad nacional, en febrero de 2011 habría acompañado a los agentes de Migración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que fueron atacados en la carretera México-Querétaro y en donde falleció el estadounidense Jaime Zapata.

Integrantes de la Casa del Estudiante denuncian actos de “hostigamiento y amenazas”, luego de la expulsión de un grupo de 28 jóvenes, quienes pretendían asumir las funciones de la mesa directiva de la asociación civil que representa a más de 70 alumnos de escasos recursos que habitan el inmueble. En conferencia de prensa, Vanaquen Navarro, representante legal de la Honorable Casa Nacional del Estudiante (HCNE), informa que tras aprobarse la expulsión de Jared Pérez Cid, “quien milita en el PRD e intentó usurpar funciones”, ha habido “amenazas verbales y por medios electrónicos”, mientras el pasado 17 de enero, Pablo Téllez Munguía, miembro de la Casa del Estudiante, fue apuñalado por tres personas aún no identificadas.

Con base en numerosos testimonios, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) identifica a los agresores de familias simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el ejido Banavil ubicado en Tenejapa, Chiapas, sucesos que dejaron un muerto, un desaparecido, varios heridos, cuatro familias tzeltales desplazadas y un indígena –base de apoyo zapatista– encarcelado sin haber estado presente en el lugar de los hechos, hace dos meses.

El Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax) exige al gobierno estatal suspender la construcción del distribuidor vial del cruce Cinco Señores, uno de los más importantes del sur de esta ciudad. En conferencia de prensa, el pintor Francisco Toledo, fundador del organismo, dice que la obra –que incluirá pasos a desnivel y subterráneos– no cumple disposiciones legales ni técnicas, además de que se realiza sin un convenio con el gobierno municipal. Mencionó que los pasos a desnivel, según estudios de urbanistas, dejaron de ser eficaces en la década de 1970; por tanto, se requiere otro tipo de proyectos. Toledo aclara que Pro-Oax no se opone al distribuidor vial porque Oaxaca requiere obras modernas para hacer más eficiente el paso vehicular. “Queremos que las obras se hagan con los estudios correspondientes y cumpliendo todas las disposiciones de la ley”, puntualiza. Subraya que Pro-Oax contratará al especialista Jesús Villanueva para que elabore un proyecto alternativo con base en una perspectiva urbanista y no de ingeniería civil. Comenta que, junto con otros pintores oaxaqueños, él donará una obra para pagar el salario del especialista.

Profesores de Oaxaca, Michoacán y Chiapas inician este jueves un paro de labores de 48hrs y realizan movilizaciones –en las primeras dos entidades tomaron edificios gubernamentales, y en Chiapas bloquean la carretera de cuota San Cristóbal - Tuxtla Gutiérrez–, en respuesta a la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en defensa de la educación y del empleo; así como para exigir la destitución de Elba Esther Gordillo Morales del SNTE. Asimismo, solicitan anular la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), con el argumento de que atenta contra la educación pública. En Oaxaca, maestros adscritos a la sección 22 del SNTE bloquean accesos a la Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas y del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz, ubicados en los municipios de Tlaxiaco de Cabrera y San Bartolo Coyotepec, conurbados a la capital oaxaqueña, así como tiendas de autoservicio y departamentales, al igual que plazas comerciales de la localidad, y tomaron la caseta de cobro Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan - Oaxaca, donde dan paso libre a los conductores. En la Ciudad de México, cientos de profesores que integran la CNTE bloquean los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro en demanda de que el congreso derogue las reformas al artículo 24 de la Constitución en materia religiosa. Al mediodía, el dispositivo de seguridad que rodea la Cámara de Diputados es sorprendido por los

maestros provenientes de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas.

Viernes 3

En San Cristóbal de Las Casas, el abogado de los siete indígenas liberados el miércoles, luego de permanecer presos más de 14 años acusados de la matanza de Acteal, Sergio Natarén Gutiérrez, afirma que al aprehender a más de 80 tzotziles por esos hechos, la Procuraduría General de la República (PGR) cometió “un agravio de lamentables consecuencias y de difícil reparación”. En rueda de prensa en Tuxtla Gutiérrez dijo que debido a “los agravios causados por la PGR los 51 indígenas que han sido liberados” por órdenes de la SCJN analizan la posibilidad de presentar una demanda contra la dependencia y todos los que intervinieron en las diligencias.

Miles de profesores de la CNTE se movilizaron por segundo día consecutivo en la ciudad de México para exigir la instalación inmediata de una mesa nacional de negociación para cancelar la ACE, suspender la evaluación universal a los docentes y las reformas al programa de carrera magisterial, además que se garanticen las plazas de base. De acuerdo con la dirección política nacional de la CNTE, sólo en el Distrito Federal suspendieron actividades académicas 70% de las escuelas de enseñanza básica, por lo que más de un millón de alumnos no tienen clases en unos 2 mil centros escolares. Los dirigentes magisteriales de Michoacán, Jorge Cázares; Oaxaca, Azael Santiago Chepi, y Distrito Federal, Francisco Bravo, quienes encabezaron la movilización, afirmaron que al menos 45 mil planteles educativos en 24 entidades del país paralizaron labores. Por segundo día consecutivo también, maestros de Oaxaca, Guerrero y Guanajuato se manifestaron con marchas, tomas de oficinas gubernamentales, bloqueos en casetas y plantones en accesos a tiendas de autoservicio, en respuesta a la convocatoria de la CNTE para manifestarse en defensa de la enseñanza pública y el empleo. Los mentores también demandan la anulación de la ACE, con el argumento de que atenta contra la educación pública, y la destitución de Elba Esther Gordillo Morales del SNTE.

Decenas de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos repudian el atentado contra Norma Andrade, fundadora de la agrupación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y reprochan a las autoridades que hayan sido omisas en proteger a la activista, sobre todo porque las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos habían solicitado medidas cautelares para protegerla. El ataque con arma punzocortante ha sido el segundo atentado que Andrade sufre en los últimos dos meses. Se encontraba en la Ciudad de México tras ser baleada el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez.

El crecimiento de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio del presidente Felipe Calderón será de 30%, equivalente a unos 13 mil 800 millones de dólares, al pasar de 46 mil 100 millones de dólares contabilizados en el primer año de gestión de la actual administración a 59 mil 900 millones de dólares estimados al cierre de 2012. Solamente en este año Pemex pretende contratar deuda en los mercados internacionales y nacionales por 10 mil 100 millones de dólares para completar sus programas de expansión productiva y re financiación de su deuda.

En San Salvador Atenco, en México más de cien mil personas se encuentran desplazadas de manera forzada de sus comunidades de origen, aseguran representantes de por lo menos 20 organizaciones campesinas, sociales y estudiantiles, en el segundo Encuentro Nacional de Desplazados, en este municipio mexiquense. Las agrupaciones, que forman un frente para apoyar a las poblaciones que viven este problema, exigen la desaparición de grupos paramilitares en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y

Puebla, así como garantías a los gobiernos federal y estatales para que los desplazados retornen a sus comunidades. En el encuentro, la Unión Campesina Independiente de Puebla, Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional (CNPA-MN), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, representantes del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, así como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestros de la Universidad Autónoma Chapingo definirán las acciones a seguir con marchas, foros y encuentros.

En Oaxaca, la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN, dicta un proyecto de acuerdo para no admitir a trámite el reclamo de los pueblos indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa; sin embargo, el ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo determina regresarlo a revisión.

En Tecuala, Nayarit, las primarias Leona Vicario y Constitución de 1917 cumplen este viernes ocho días de suspensión de labores, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) corta el servicio derivado de un adeudo que tienen desde noviembre pasado. Padres de estudiantes molestos porque el ayuntamiento no cubrió los pagos, deciden tomar las instalaciones de los planteles y con pancartas criticaron que se descuiden las escuelas al grado de quedarse sin luz. Asimismo solicitan apoyo al gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda en la gestión ante el edil de Tecuala, Rubén Benítez Rodríguez, del Partido Verde, para que aporte los 33 mil pesos que se requieren para cubrir el adeudo y reanudar las clases.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se encuentra en la etapa de conclusiones de su investigación en torno de las más de 10 quejas presentadas por profesores, alumnos y trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) por agresiones físicas, intimidaciones, ataques a la honra y violaciones de carácter laboral por parte de la rectora Esther Orozco Orozco y otros funcionarios de esa casa de estudios, informa el presidente del organismo, Luis González Placencia. El *ombudsman* capitalino califica de “complejo” el conflicto que se vive en esa universidad y señaló que en breve se reunirá con la rectora, luego de que el jueves pasado lo hizo con los inconformes para informarles sobre los avances en las quejas, la mayoría de ellas presentadas hace casi un año.

En Tixtla, Guerrero, la emisora *Voces nuestras*, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, comienza transmisiones a las 8hrs de este día, “con la finalidad de romper el cerco informativo y difundir nuestra causa, pero también para que los campesinos y otros sectores que no tienen acceso a la radio comercial puedan difundir sus problemas”, explica Pablo Juárez Cruz, dirigente estudiantil de ese plantel. Entrevistado después del inicio de la transmisión, Juárez Cruz recuerda que en otras ocasiones se había intentado sacar al aire una radiodifusora comunitaria, “ hoy esta generación hace realidad este sueño en la frecuencia 94.1fm y por internet en: Ayotzinapa.listen2myradio.com; incluso ya recibimos saludos de radios hermanas” localizadas en los estados de México, Oaxaca y Nuevo León, además de Santiago de Chile y California, Estados Unidos.

Sábado 4

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) incumple el acuerdo de diciembre pasado para dar protección a la activista Norma Esther Andrade, quien desde que llegó a la Ciudad de México, luego de sufrir un atentado en Ciudad Juárez, Chihuahua, careció de las medidas necesarias para salvaguardar su

integridad física, contraviniendo lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma la abogada de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Karla Michel Salas. Luego de ser dada de alta del hospital por el atentado que sufrió frente a su domicilio, Norma Andrade y su familia analizan la posibilidad de abandonar el Distrito Federal e incluso salir del país, ante la “ausencia de Estado y de autoridad” para garantizar su seguridad.

Como cada primer sábado de mes, el Comité ¡Eureka! e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) México realizan una manifestación frente a la SCJN para exigir la presentación con vida de los desaparecidos políticos de los últimos 40 años y castigo a los responsables de dichas desapariciones. Como parte de la manifestación y a propósito del reciente fallecimiento de Miguel Nazar Haro, creador de la Brigada Blanca –organismo al que se atribuyen los asesinatos o desapariciones de numerosas personas durante las décadas de los 70 y 80–, los activistas presentan su “testamento político”, el cual incluye “una historia ensangrentada, marcada por el asesinato, la tortura y la desaparición forzada de personas”. Con la consigna de “¡Vivos los llevaron; vivos los queremos!” y la lectura de los nombres de las 29 personas cuya desaparición ocurrió en el mes de febrero según registro de las organizaciones, los manifestantes les rindieron homenaje.

En San Salvador Atenco, participantes del segundo Encuentro Nacional de Desplazados acuerdan exigir al gobierno federal crear una ley de amnistía para todos los presos políticos del país. Durante el segundo y último día de discusión, los ponentes también exigen a los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué y Juan Sabines, respectivamente, frenar la persecución contra los líderes y las organizaciones que luchan por evitar el desplazamiento forzado de pobladores de San Juan Copala. Reunidos en la casa ejidal de San Salvador Atenco, este sábado concluye la reunión, moderada por estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Autónoma Chapingo (UACH), acto en el cual participaron organizaciones de Puebla, México, Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal.

Cristóbal Martínez y Griselda Victoria del Movimiento Campesino Regional Independiente de Chiapas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional, denuncian que hay 26 “presos de conciencia” en el sureste mexicano. Exigen la liberación de sus líderes Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, a quienes encarceló el gobierno de Juan Sabines por sumarse a la causa de las más de 700 familias desplazadas del ejido Los Guayabos, en Comalapa y en San Cristóbal de las Casas.

La Unión Campesina Democrática informa que realizará una marcha nacional para demandar al gobierno federal apoyos económicos a productores que perdieron sus cosechas y ganados por las heladas y sequías que han azotado al país. Antonio Tirado Patiño, dirigente nacional de la organización, dice que la movilización se realizará en Querétaro, pues el presidente Felipe Calderón acudirá a esa entidad al 95 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, y aprovecharán para plantear que urgen más apoyos al campo, además de que se legalicen más de un millón de vehículos usados de procedencia extranjera que circulan por el país y la pronta liberación de los pagos a los ex braceros.

Domingo 5

En Cherán, Michoacán, casi un año después del levantamiento purépecha contra talamontes vinculados con el crimen organizado, que arrasaron más de 80% de bosques de esta comunidad, y luego de un “proceso de lucha y organización”, toma posesión el concejo mayor comunal, fruto de una lucha y una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante representantes de

diversas instancias del gobierno de Michoacán, el congreso estatal y autoridades de comunidades vecinas, que en meses recientes han estado reorganizando la defensa de su territorio, el comunero Pedro Chávez recordó la revuelta del 15 de abril pasado, cuando cansados de la tala clandestina indiscriminada, la extorsión y las amenazas de la delincuencia organizada, decidieron rebelarse y, encabezados por un grupo de mujeres y jóvenes, “se levantaron, detuvieron a cinco talamontes e hicieron sonar las campanas de la iglesia para llamar a toda la comunidad. Ese día se inició un movimiento que hoy cierra una página, pero no su lucha”.

“Tengo mucho miedo. No me explico qué está pasando”, asegura la activista Norma Esther Andrade tras el atentado que sufrió el viernes pasado en la puerta de su casa, en la colonia CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, que la dejó herida. En entrevista con *La Jornada*, la fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa –que busca justicia para las víctimas de feminicidio en Chihuahua– manifiesta sentir rabia, coraje e impotencia, porque “tengo que estar escondiendo en mi propio país”. En diciembre pasado, Andrade y su hija Malú García fueron agredidas por un desconocido con un arma de fuego en Ciudad Juárez, por lo que buscaron refugio en el Distrito Federal. Demanda a los gobiernos federal y de Chihuahua atender las peticiones –realizadas después del atentado de diciembre– de las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos de brindarle medidas cautelares para su protección.

En Chilpancingo, Guerrero, el investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Arturo Miranda Ramírez, asegura que hasta el momento suman ya cien catedráticos de diversas instituciones educativas de la entidad, dispuestos a ir a la Normal Rural de Ayotzinapa para impartir clases, con la finalidad de que los alumnos no pierdan el semestre escolar. En entrevista, manifiesta que este lunes sostendrán una reunión con los maestros externos para definir y distribuir los contenidos temáticos, contando con la asesoría del ex director de la Normal de Ayotzinapa Napoleón Anaya del Carmen, a quien los maestros de base destituyeron para imponer a Eugenio Hernández Martínez.

El núcleo ejidal La Sierrita de Galeana, ubicado en el municipio de Tlahualilo Durango, es apenas una fracción de las más de 56 millones de hectáreas que empresas mineras trasnacionales explotan en territorio nacional, pero como el resto de los 757 proyectos extractivos de capital extranjero, reproduce los mismos conflictos sociales, además de la destrucción del entorno, que anticipa el inicio de una nueva lucha de los ejidatarios por la defensa de su tierra y territorio, la cual puede llegar al bloqueo de la mina. Aquí, refiere en entrevista el comisario ejidal Daniel Pacheco, “nos han engañado y, aun cuando hemos mostrado voluntad de negociar, nos marginan de los beneficios y violan todo el tiempo los acuerdos protocolizados ante notario hace tres años. Ellos se presentaron en el ejido sólo para demostrar que están dispuestos a tener una abierta confrontación, a no escuchar y dejar en claro que las violaciones en las que han incurrido las defenderán con su ya sabido abuso de poder”.

En la Plaza México, la más grande del mundo, los trabajadores se alistaban para que el 66 aniversario del coso de Insurgentes fuera perfecto; a unos kilómetros de Eje 6 Sur, en el Ángel de la Independencia, cerca de mil activistas bañados en “sangre” urgen abolir las corridas de toros en el país. Leonora Esquivel, presidenta de AnimaNaturalis Internacional, dice que desde hace tres años, en el aniversario de La México realizan un acto en contra de las corridas y en esta edición además buscan presionar para que la prohibición sea aprobada en la Asamblea Legislativa.

Lunes 6

En Chilpancingo, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, confirma que los maestros de base de la Normal Rural de Ayotzinapa se presentarán este martes para iniciar el nuevo semestre, y también presentaron un programa para la recuperación de las clases, con la finalidad de que los estudiantes no pierdan el semestre anterior. En conferencia de prensa que ofrece la mañana de este lunes, para anunciar el recorrido que el precandidato de la coalición Movimiento Progresista a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, hará por Guerrero entre martes y miércoles de esta semana, el funcionario de la SEG asegura que la mañana del martes se va a abrir la Normal Rural de Ayotzinapa.

Organizaciones campesinas y sociales exigen soluciones efectivas al problema de la sequía. Estamos ante una situación de emergencia que requiere impulsar proyectos productivos para rescatar las técnicas de cultivo sustentables y de retención de agua. No son suficientes las toneladas de despensas y cobijas enviadas a la sierra Tarahumara. Oxfam México, Unión Campesina Democrática (UCD) y Confederación Nacional Campesina (CNC) advierten que la falta de alimentos puede empeorar ante el pronóstico de escasez de lluvias en casi todo el país. Jesús Emiliano García, de la UCD, expone que 300 mil personas de la llanura y semi desierto de Chihuahua, al igual que los tarahumaras, requieren alimento.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y la Red por la Paz con Justicia y Dignidad exigen a autoridades estatales y federales poner un alto a la ola de violencia en la entidad, cumplir su responsabilidad de garantizar la seguridad y esclarecer los asesinatos. Entre sábado y domingo pasados ocho personas fueron ultimadas en la entidad, entre ellas una menor de 12 años, una mesera en un bar de Cuernavaca, una empleada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y un estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla. El vocero de la CIDHM, José Martínez, critica que a meses de concluir su gestión, el gobernador panista de Morelos, Marco Adame Castillo, no haya implementado medidas adecuadas para prevenir y erradicar las ejecuciones.

En Oaxaca, los indígenas triquis desplazados de San Juan Copala, pertenecientes al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), reinstalarán este martes su campamento en el palacio de gobierno ante la falta de condiciones para regresar a su comunidad, informa su vocera, Reyna Martínez Flores.

En Morelia, más de 15 comunidades purépechas, entre ellas Charapan, Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, Comachuén, Nurío y Nahuatzen, buscarán elegir autoridades mediante el sistema de usos y costumbres, anuncian representantes de esos poblados tras acudir a la toma de posesión del concejo mayor de Cherán, donde se efectúan elecciones con esta modalidad. Como no existe el marco jurídico para elegir autoridades por este sistema, es urgente legislar al respecto, indica Irineo Rojas Hernández, director del Centro de Investigación de la Cultura Purépecha de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En Chimalhuacán, vecinos de la unidad residencial Las Fuentes acusan a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Ixtapaluca de haber construido viviendas de interés social de mala calidad, sin servicios adecuados de electricidad y drenaje, y de no haberles entregado escrituras. Dos años después de que se inició la venta de casas en la unidad Las Fuentes, ubicada en avenida Arca de Noé, barrio San Miguel Acuitlapilco, más de 40% se encuentran desocupadas. Una vecina de la cerrada 4-E asegura que su vivienda se cuarteó. Pedí devolución o cambio, pero me dijeron que ya no era aplicable la garantía.

Desierto de Wirikuta, en una convergencia histórica, peregrinaciones de todas las comunidades wixaritari –huicholas– del país se citan esta noche en el cerro sagrado El Quemado, en la vecina sierra de Coronado, para cantar, orar y resistir a la destrucción de Wirikuta ante la inminente invasión de grandes empresas mineras que pretenden realizar extracciones masivas de oro y plata. Toda la región está en ascuas de por sí debido a esta fortísima tarascada del progreso y el negocio. Unos 800 wixaritari, y al menos 40 coras de la Mesa del Nayar, Nayarit, están llegando al desierto en los días recientes. Participan todos los centros ceremoniales de las comunidades, incluido el Consejo Regional Wixárika Por la Defensa de Wirikuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades del pueblo wixárika, los cuales determinaron esta congregación inusitada ante la alarmante situación de peligro ambiental, sagrado y cultural de este extraordinario desierto, caso único en el mundo como centro ceremonial vivo de una cultura indígena fuerte y relevante, más allá del ninguneo racista de la sociedad dominante y el Estado mexicano.

En Ciudad Juárez, familiares de 15 mujeres desaparecidas se manifiestan este lunes frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FEG), donde reclaman por los nulos avances en las respectivas carpetas de investigación, y tapizan la dependencia con copias de las pesquisas en torno a sus hijas. Arturo Sandoval Figón, vocero de la FEG, sostiene que únicamente se ha enviado un caso a la PGR, por haberse confirmado que la desaparición de una joven obedece a trata de blancas. Indica que esa carpeta correspondió a Adriana Sarmiento Enríquez, cuyos restos fueron localizados, junto con otros siete cuerpos, el 5 de noviembre de 2009 en el poblado San Isidro.

Martes 7

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el activista mexicano Saúl Reyes Salazar obtiene asilo político en El Paso, Texas, por el Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidense, informó el abogado Carlos Spector, especializado en temas migratorios. Reyes Salazar es el segundo ciudadano de esta ciudad que obtiene este beneficio, ya que en 2011 le fue concedido a Cipriana Jurado, amenazada de muerte al igual que los integrantes de la familia Reyes Salazar por manifestarse contra la militarización del valle de Juárez, y por el respeto a los derechos humanos y a la ecología de la región.

Con la entrega de la lista de personas fallecidas y desaparecidas en Chihuahua de 2007 a la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la primera que contribuye a integrar el registro nacional en la materia, informa el *ombudsman* Raúl Plascencia, quien asiste a la presentación del informe de labores del organismo local. Recuerda que la creación de una base de datos sobre desaparecidos forma parte de las acciones acordadas en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En Morelia, Michoacán unos 300 elementos de la Policía Federal, la Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional intentan desalojar a comuneros del municipio de Aquila que bloquean desde octubre el acceso a la mina de hierro Ternium porque la empresa no les ha pagado regalías desde 2010. Las fuerzas federales arriban a las cinco de la mañana y lanzan a cientos de indígenas nahuas granadas de gas lacrimógeno, lo que no intimida a los comuneros. El enfrentamiento deja al menos 10 lesionados.

En Cuernavaca, Morelos agentes de la secretaría de auxilio y protección ciudadana y policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado detienen, golpean, encañonan y amenazan de muerte a un vecino del poblado de Ocoatepec –que se rige por usos y costumbres y se ubica en el municipio de Cuernavaca– porque supuestamente lo confunden con un delincuente y se

negó a bajar de un automóvil que conducía. Además de agredir a Víctor Manuel Morales, de 34 años de edad, los uniformados también habrían violado la autonomía de la comunidad indígena, porque arremeten contra elementos de seguridad y contra el ayudante municipal Gilberto Dávila Rada cuando se presentan en el lugar del incidente.

En Ciudad Juárez, Chihuahua el líder local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jesús José Díaz Monárrez, informa que al menos seis maquiladoras de la ciudad están en paro técnico por la falta de contratos. Señala que en cinco empresas se adelantan vacaciones y días de descanso a los trabajadores; además se dejó de laborar los lunes, para ahorrar dinero. El presidente de la Asociación de Maquiladoras en Juárez, José Luis Armendáriz Bailón, precisa que las empresas en paro son de las industrias automovilística, electrónica y de electrodomésticos.

Representantes de los indígenas expulsados del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, piden a la embajada de Finlandia en México que interceda ante los gobiernos federal y estatal para que dejen de proteger a los asesinos paramilitares que han abatido a más de 30 personas en esa localidad, se proceda a su detención inmediata y se cumpla el ofrecimiento de facilitar el retorno de los desplazados. Ante el consejero René Söderman, de la representación diplomática, Josefina Albino y Víctor Castillo, representantes de los afectados, piden a todas las personas con espíritu de conciencia en México unirse a esta exigencia, tras afirmar que el gobierno de Oaxaca no sólo sabe dónde están los asesinos, sino interactúa con ellos.

En la Sierra de Catorce, San Luis Potosí, el pueblo wixárika se encuentra unido en pie de lucha espiritual anuncia la *Declaración de Wirikuta*, leída esta tarde en el jardín natural del cerro El Quemado, lugar donde, según su cosmogonía se originó el universo. Nunca se habían reunido y puesto de acuerdo las 20 comunidades de este pueblo indígena de poderosa espiritualidad que representa decenas de poblaciones en cuatro estados de la república, que, entre otras cosas, tienen en común ser peregrinos milenarios del desierto que se abre al pie de la sierra y se extiende al poniente hasta las montañas de Zacatecas. De manera respetuosa y pacífica la declaración se pronuncia en defensa de la vida, reafirmando con seguridad ejemplar que nuestro conocimiento espiritual es un legado para el mundo. Teniendo como fondo el Bajío del desierto, los pueblos wixaritari sostienen “Los sitios sagrados son escuelas de conocimiento, por lo cual continuaremos defendiendo Wirikuta de las mineras”.

Miércoles 8

En Chilpancingo, Guerrero, la dirigencia estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa advierte a la SEG que si los profesores de base del plantel no se presentan a impartir clases este miércoles a las ocho de la mañana, solicitarán formalmente maestros externos de la UAG y de otras instituciones de enseñanza que los suplan para recuperar el semestre, el cual está a punto de perderse. El acuerdo es adoptado esta tarde en asamblea por la base estudiantil, luego de que por la mañana no se reiniciaron las clases, tal como anunció el día anterior la SEG, pese a que desde las ocho de la mañana los estudiantes esperaron a que los docentes ingresaran a los salones de clases.

Este miércoles se reanudan las mesas de negociación entre organizaciones agroalimentarias que integran la caravana del hambre y funcionarios federales en las instalaciones de la SEGOB. Alfonso Ramírez Cuéllar, de El Barzón, adelanta que el encuentro será con representantes de la Comisión Federal de Competencia y de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA) y Economía, para abordar temas relacionados con los mercados alimentarios y el aumento de los precios, así como la protección al poder adquisitivo de los consumidores.

La PGR se niega a brindar protección e investigar el atentado que sufrió la activista Norma Andrade frente a su domicilio, en la delegación Coyoacán del Distrito Federal, con el argumento de que no está a cargo de la indagación de esos hechos. La fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa explica que, junto con sus abogados, sostuvo una reunión de varias horas con representantes de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, así como de los gobiernos de Chihuahua y del Distrito Federal, en la que el único compromiso que pudieron obtener de las autoridades federales es que analizarán el caso y en 15 días determinarán si disponen de una custodia e investigan el ataque.

El poeta y luchador social Javier Sicilia afirma que el atentado perpetrado el pasado 3 de febrero contra Norma Andrade, cofundadora de la organización Nuestra Hijas de Regreso a Casa, “es la cara más visible del estado de indefensión en que se encuentra la sociedad”, pero también hace patente que una parte sustantiva de la criminalidad “está en las omisiones del Estado”.

El incremento del número de personas que viven en situación de pobreza estuvo relacionado con el crecimiento de la población que carece de acceso a la alimentación, la cual aumentó 4.2 millones entre 2008 y 2010 –para llegar a alrededor de 28 millones de mexicanos–, así como a la reducción del ingreso real de los hogares, sobre todo en las áreas urbanas, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En el *Informe de evaluación de la política social 2011* indica que el poder adquisitivo del ingreso laboral cayó entre finales de 2008 y finales de 2010, y aunque se estabilizó durante el año pasado, no ha retomado su nivel previo a la crisis. “Durante la crisis el desempleo se incrementó. Tampoco ha logrado retomar los niveles de 2007”.

En Campeche, unos 50 activistas y pacientes contagiados con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) protestan ante las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el desabasto de medicamentos antirretrovirales desde hace dos años. Sostienen que en Campeche hay un subregistro de casos de VIH, pues oficialmente se reconocen mil 792 infectados, pero la cifra real es superior a 34 mil. Añaden que los municipios campechanos con más infectados son Carmen, Campeche, Champotón y Escárcega.

En Cuernavaca, Morelos, dos meses y diez días después de que habitantes de la comunidad Tetelpa *toman* el cerro de la Tortuga, en el municipio de Zacatepec, para impedir la construcción de un fraccionamiento de Casas Geo, voceros de los inconformes acuden a esta capital para exigir al gobierno de Morelos que se desista de desalojarlos y demandan que se cancele la construcción de unas 700 viviendas. Argumentan que el fraccionamiento destruiría la flora y fauna de la región.

Habitantes del Conjunto Residencial Tlalpan II anuncian que retomarán la resistencia ciudadana luego de haber ganado todas las instancias jurídicas y en tribunales contra la construcción de una gasolinera en Insurgentes Sur número 4097. Exigen al gobierno del Distrito Federal cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el pasado 7 de junio y ordene la clausura definitiva y demolición de la estación de combustible.

La Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados del IMSS se manifiesta frente a las oficinas centrales de esa institución, en demanda del pago de 38 días de salario por año de servicio,

monto retenido al momento de su retiro. Según diversos agremiados, el instituto pagó sólo 25 % de lo que les correspondía por concepto de antigüedad, ya que en lugar de pagar 50 días por año trabajado, sólo recibieron 12.

Jueves 9

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, advierte que en las actuales circunstancias que vive el país “es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada”, ya que “la interferencia de la delincuencia organizada en la seguridad y desarrollo de todos nos está generando intrincados momentos”. El militar reconoce que el crimen organizado “es un grave fenómeno delictivo de dimensión cultural, sociológica y transnacional”. Orador único en la ceremonia por el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que se realiza en el Castillo de Chapultepec, el divisionario señala que en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado, despojando a la población de sus bienes y tranquilidad y generando un clima de violencia inusitado. Ante esas circunstancias, dice, “es evidente que en aquellas latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado”.

La activista Norma Esther Andrade ha recibido la solidaridad de organizaciones internacionales luego de expresar su deseo de abandonar México luego de haber sido víctima de dos atentados contra su vida, el más reciente el viernes pasado en la delegación Coyoacán. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, envía a la luchadora social una carta en la que le manifiesta el apoyo de esa agrupación en caso de que decida trasladarse a España. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, hace un llamado a las autoridades federales y de Chihuahua para que asuman su responsabilidad y otorguen protección a la fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa –organización que busca justicia para las víctimas de feminicidios en esa entidad– e investiguen el reciente ataque del que fue víctima.

El pueblo autónomo de Cherán, Michoacán, representa un ejemplo en México y el mundo porque ha demostrado que la dignidad, la justicia y la paz se construye desde la comunidad, expresan integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). El pasado 5 de febrero, los activistas acudieron a la toma de posesión del Consejo Mayor Comunal de Cherán, integrado por 12 *k'eris* –grandes–, que dirigirá a la comunidad a través de usos y costumbres indígenas. Esta autoridad fue avalada constitucionalmente gracias a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En conferencia, Ignacio Suárez, Jéssica Alcázar y Sugén Catalán, del MPJD, indican que la lucha de esta comunidad michoacana –que expulsó a los talamontes y a los partidos políticos y organizó guardias para defender sus territorios y evitar la presencia del crimen organizado desde abril pasado– “será un ejemplo para muchas comunidades no sólo de la entidad, sino del país, donde existen empresas foráneas que están sobreexplotando la tierra. Son un ejemplo de que trabajando juntos se puede enfrentar a los criminales y cambiar las cosas”.

En Chilpancingo, Guerrero, sólo 15 de 55 maestros se presentan este jueves a laborar en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y el resto no concurre, con el argumento de que realizarían una asamblea sindical, informa el dirigente estudiantil Pablo Juárez Cruz. Asegura que “los pocos profesores que estuvieron en clases sólo estuvieron 20 minutos en el aula y de inmediato se fueron, y de tarea nos dejaron –a los de tercer grado– leer la página 11 del libro de geografía y hacer un resumen”. En conferencia de prensa, acompañado por otros miembros de la dirigencia estudiantil, Pablo Juárez indica

que la planta laboral de Ayotzinapa es de 55 profesores, más 110 administrativos, de cocina y limpieza, entre otros, de tal manera que “lo de hoy fue una farsa, un inicio de clases parcial; nosotros estuvimos desde temprano esperando a los maestros.

Activistas del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca clausuran este jueves de manera simbólica las obras del distribuidor vial del crucero de Cinco Señores, uno de los más importantes del sur de la ciudad, para protestar por “los graves daños al medio ambiente”. Los inconformes colocan una cartulina con la leyenda “clausurado” sobre la malla ciclónica que rodea los trabajos, y sin bloquear el tráfico vehicular se manifiestan con pancartas. Los trabajadores de la obra, realizada por la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable estatal, suspendieron sus tareas.

En Acapulco, Guerrero, al menos 45 maestros pertenecientes a la zona escolar 40, que incluye siete planteles de primaria y preescolar, interrumpen un acto en el cual el gobernador Ángel Aguirre Rivero entregaba apoyos en la unidad habitacional El Coloso, para exigir que las autoridades cumplan su compromiso de brindar protección policiaca efectiva en planteles de la zona conurbada. Al grito de “¡seguridad, seguridad, seguridad!”, los docentes muestran una manta en la que anunciaban un paro indefinido de y otra que decía: “Profesores exigen seguridad para ejercer su labor”.

Unos 350 maestros interinos y de apoyo afiliados a la sección 49 del SNTE, sentados en sillas de plástico frente al edificio sede del organismo, en el centro de Tepic, pasan el día viendo películas y otros leen revistas. Algunos más, cubiertos con una lona con las siglas del SNTE, fríen carnitas a la salida de su edificio sindical. El motivo del paro parcial es que la administración estatal anterior, encabezada por Ney González Sánchez, no cubrió los salarios de los 350 docentes durante casi dos años. El actual gobierno no ha tenido recursos para liquidar el adeudo, cuyo monto se desconoce. El dirigente de la sección 49, Miguel Ángel Islas, indica en entrevista que los inconformes “son interinos que concentramos aquí, pero tenemos a la gran mayoría trabajando”.

Habitantes del barrio de La Conchita, en Coyoacán, efectúan por la mañana una protesta para rechazar la construcción de una librería del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que se lleva a cabo en la calle de Fernández Leal. Hace dos años los habitantes de La Conchita denuncian ante autoridades locales y federales que el proyecto no está permitido, además de que ha causado daños a un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Los colonos sospechan que se han utilizado certificados falsos por derechos adquiridos para la autorización de uso de suelo, expone Jorge Martínez, vecino de la colonia.

Viernes 10

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, recalca que no basta con que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, admita que militares han violado garantías constitucionales. Eso todos lo sabemos; lo que debiera el funcionario reconocer y remediar es la impunidad de miembros del Ejército que han secuestrado y desaparecido a civiles, agrega. Dirigente también del Comité Eureka, Ibarra advierte que existe una deuda de las fuerzas armadas con la sociedad, ya que desde siempre se han prestado para reprimir a disidentes al régimen, a estudiantes y a líderes sociales.

Sábado 11

Integrantes del Patronato pro defensa y conservación del patrimonio cultural y natural del estado de Oaxaca, encabezados por el pintor Francisco Toledo, y de la organización Mundo Ceiba, se movilizan en bicicleta por la ciudad para protestar por la construcción del distribuidor vial en el cruce de Cinco Señores, uno de los principales del sur de la ciudad. Vestidos de playeras blancas con leyendas en protesta por el distribuidor vial, los manifestantes salen de la explanada del antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, en el centro histórico, y después de recorrer varias calles terminaron donde se realiza la obra.

La indígena tzotzil Margarita López Gómez, liberada luego de permanecer presa siete años acusada injustamente de homicidio en razón de parentesco por la muerte de su concubino, rechaza la ayuda que le ofreció el gobierno estatal. La mujer de 37 años es liberada tras la revisión de su expediente penal realizada por la llamada mesa de reconciliación integrada por diferentes instancias del gobierno chiapaneco. Originaria de la comunidad de Cuchuntón, municipio de Mitontic, ubicado a unos 40km de esta ciudad, Margarita fue detenida en marzo de 2005 luego de que su hija mayor golpeó con un trozo de madera en la cabeza y mató a su padre Juan Velasco López al enterarse de que pretendía violar a su hermana de cinco años. Ambas fueron detenidas pero la joven fue liberada tres años después y Margarita condenada a 15 años y a pagar una multa de 34 mil 799 pesos.

Domingo 12

Este año se cumple un plazo esperado más de una década por las corporaciones transnacionales de la biotecnología para que se abra la puerta de la comercialización de maíz transgénico en México. Sin mucho bombo, el 31 de diciembre pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) retira el último candado que impedía la siembra de ese grano genéticamente modificado y autorizó los campos experimentales. Primero serán 63 hectáreas en Sinaloa, autorizadas a la empresa Monsanto. Pronto seguirán otras en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Cuando las licencias entren en vigor para las solicitudes en Tamaulipas, en fechas próximas, las extensiones superarán mil hectáreas. Es el paso previo a la siembra extensiva en poco más de 2 millones , principalmente en zonas de riego del norte de México. Es, como dicen promotores y críticos de los transgénicos, el último trámite que había que cubrir, y ya está hecho.

En Tixtla, Guerrero, la dirigencia estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa anuncia que este lunes se realizará la primera reunión de trabajo entre la Comisión Civil de Interlocución y el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. “En esta ocasión será Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz AC (SERAPAZ), quien encabece la comitiva, y expondrá nuestras demandas al Ejecutivo estatal”, dice Pablo Juárez Cruz, representante de normalistas. Por otra parte, entrevistado en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, Juárez Cruz señala que a propuesta de los estudiantes la representación de la comisión abordará tres puntos: “el regreso total de los maestros y trabajadores administrativos a la normal; la convocatoria para nuevo ingreso, que debe publicarse en marzo, y el nombramiento de un nuevo director, debido a que se insiste en dejar en el cargo a Eugenio Hernández, a pesar de que su salida fue una de las demandas de la protesta del pasado 12 de diciembre, donde murieron dos normalistas”.

En Jalapa, Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizará el 22 de febrero el primer foro público de consulta sobre el proyecto minero Caballo Blanco, en los

municipios de Alto Lucero y Actopan, donde la trasnacional canadiense Goldgroup pretende extraer oro, plata y cobre de una mina a cielo abierto. Manuel Molina Martínez, delegado estatal de la Semarnat, asegura que no hay sesgo en la consulta y que no se ha autorizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa Minera Cardel, filial de Goldgroup.

Lunes 13

Las organizaciones que integran la “Caravana del hambre” exigen al gobierno federal garantizar la entrega suficiente de maíz y frijol a las comunidades rurales y actuar conjuntamente con las autoridades de los estados y municipios para evitar que la ayuda de las despensas se concentre en algunas regiones. Antonio Tirado, dirigente de la UCD, dice que ante las importaciones de ambos alimentos básicos no se justifica el alza de los precios de la tortilla ni del frijol. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene que castigar a los especuladores.

Organizaciones eclesiales y el Centro de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, integrado por representantes de países de América Latina, se suman a la lucha de habitantes de la colonia San Pedro Mártir, en la delegación Tlalpan, contra la construcción de una gasolinera que, aseguran, viola las normas de uso de suelo y pone en riesgo a esa comunidad. A su paso por la ciudad, provenientes del estado de Morelos, expresan su respaldo a la resistencia civil pacífica que los pobladores mantienen en la autopista México - Cuernavaca, en protesta por la autorización de esa estación de combustible.

Martes 14

El titular de la SEGOB, Alejandro Poiré Romero, tuvo que reconocer que el crimen organizado ha infiltrado a los tres niveles de gobierno, cuando al inaugurar el foro internacional Drogas: balance a un siglo de su prohibición, desde el público dos personas lo interrumpen para exigirle que no diera la misma información “que todos conocemos”, y acusaran al gobierno mexicano de prohiar una estrecha relación con grupos delincuenciales. El funcionario federal defendía la política presidencial en contra de las organizaciones criminales, cuando desde el lado derecho del auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología una voz preguntó: “¿Quién adiestró a Los Zetas? ¿Quién ha permitido que crezca el narcotráfico? ¿Dónde están los criminales? ¡Están en el gobierno! ¡Toda la violencia y las muertes se han podido hacer gracias a la relación que los narcotraficantes tienen con el gobierno! ¡A lo mejor los mismos que lo cuidan a usted son asesinos!”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibe el año pasado 59 quejas por agresiones cometidas contra defensores de garantías individuales, la mayoría relacionadas con violaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad, de reunión, circulación, debido proceso, propiedad y libertad de expresión. En un comunicado, el organismo que dirige Raúl Plascencia Villanueva señala que los ataques de este tipo no sólo obstaculizan el trabajo cotidiano de los activistas, sino afectan su salud física y psicológica y la de sus familias. Con base en lo anterior, la CNDH solicita que se apliquen medidas cautelares en 16 casos, entre ellos el de Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, quien el pasado 3 de febrero sufrió otro ataque a pesar de la supuesta protección que le brindan elementos de la PGR en la capital del país. En todos los casos, dice el organismo, se ha dado seguimiento a las denuncias y se han recabado datos con las autoridades, mediante entrevistas con los agraviados y la revisión de las averiguaciones previas con el propósito de que se integren de forma adecuada. La CNDH enfatiza que el deber de los servidores públicos es

brindar atención expedita y profesional a quienes han sido víctimas de un delito y esclarecerlo para erradicar la impunidad.

La SEGOB reconoce la labor de integrantes de la comisión de mediación para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR). De igual forma, en un comunicado de prensa, el titular de esta dependencia, Alejandro Poiré, reconoce como “legítimo” el reclamo de los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (desaparecidos desde 2007), reivindicados por el EPR como parte de este grupo guerrillero. “En ocasión del homenaje que la comisión de mediación llevará a cabo el 15 de febrero de 2012, la Secretaría de Gobernación se suma al reconocimiento público a Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, quienes al momento de su partida participaban de manera entusiasta en el proceso de interlocución entre el gobierno federal y la Comed para dar cauce a la demanda de esclarecer el caso”, señala.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, familiares de jóvenes desaparecidas se instalan este martes en el kiosco de la plaza de armas, en el centro de esta ciudad, para vender alimentos y reunir fondos con los cuales pretenden continuar las investigaciones que han realizado. José Luis Castillo, padre de una de las víctimas, manifiesta que la joven, que recientemente cumplió 17 años de edad, podría hallarse en la ciudad de México explotada sexualmente. Esta suposición se basa en una llamada telefónica que recibió. El dinero que recabe lo usará para viajar a la capital del país a fin de corroborar la información con que cuenta.

En Chilpancingo, la delegación sindical de la Normal Rural de Ayotzinapa, afiliada a la sección 14 del SNTE, acusa a la administración estatal que encabeza el gobernador Ángel Aguirre Rivero de obligar a Eugenio Hernández García a presentar su renuncia como director del plantel, cuyos estudiantes se hallan en paro desde noviembre. En conferencia de prensa en esta capital, el profesor Felipe Castañeda Tovar, de la delegación sindical, asegura que alrededor de las 23 hrs del lunes un funcionario cercano a Ángel Aguirre, a quien no identificó, llegó al domicilio del aún director Eugenio Hernández “y se lo llevó a Casa Guerrero, residencia oficial del gobierno estatal”.

Aprovechando el 14 de febrero decenas de estudiantes universitarios participan en un beso colectivo para manifestarse por “verdaderos” programas de becas y contra los créditos a la educación para instituciones privadas que decretó recientemente el presidente Felipe Calderón. Jóvenes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Pedagógica Nacional, Autónoma de la Ciudad de México y del Instituto Politécnico Nacional, agrupados en las Redes Universitarias, consideran que los proyectos de becas Síguele y Universitarias –para bachillerato y licenciatura–, anunciados a principios de mes, son “medidas electoreras”, ya que sólo se aplicarán en 2012, pues no hay certeza de continuidad. Durante el acto denominado *Un beso por la universidad pública*, mediante el cual se pretende concientizar a la comunidad universitaria para defender la educación para todos, los estudiantes –algunos de los cuales forman parte del Movimiento Regeneración Nacional Jóvenes– demandan mayor apoyo para los niveles medio superior y superior, así como una política de Estado que coloque en el centro de sus prioridades el fortalecimiento de la educación pública.

Dos nuevos proyectos mineros de oro, Mina San Antonio, cerca de La Paz, Baja California Sur, y Caballo Blanco, en Veracruz, a 3km de la central nuclear Laguna Verde, provocan la movilización de habitantes y de científicos que ven riesgos para la población y aun para la seguridad del país. La aprobación del proyecto minero Caballo Blanco de la empresa canadiense Gold Group no sólo

representa un riesgo para la seguridad nacional, sino que deteriorará patrimonio cultural e histórico y el medio ambiente, afectando a 6 mil habitantes de 70 comunidades, de acuerdo con una carta enviada al presidente Felipe Calderón por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental.

En San Cristóbal de Las Casas, alrededor de cien integrantes de La Red Chiapas para la Diversidad, formada por 17 organizaciones homosexuales y lésbico-gay, se manifiestan este martes frente al Congreso local para exigir a las autoridades estatales que garanticen el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. Los manifestantes presentan un pliego con 10 peticiones para la Legislatura de Chiapas, el Consejo Estatal de Derechos Humanos y el gobierno del estado, a quienes exigen campañas permanentes para la prevención y erradicación de la discriminación, en cualquiera de sus expresiones. Alejandro Rivera Marroquín, representante del Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia, dice en entrevista que ésta fue la primera ocasión que La Red Chiapas para la Diversidad busca dialogar con las autoridades estatales para la solución de sus demandas, entre ellas que se incorpore el concepto de discriminación y sus manifestaciones en el Código Penal chiapaneco. En un juego lleno de ironía, el artista Francisco Toledo lanza la convocatoria al primer Concurso para pintores-ingenieros Premio Puente Cinco Señores, como parte del movimiento ciudadano que se opone a la construcción del distribuidor vial Cinco Señores, que impulsa el gobernador Gabino Cué en la capital del estado. Las características del proyecto a entregar son: “vía rápida, 800 metros de construcción ‘al tanteo’. No privilegiar peatones. No privilegiar ciclistas. Exclúyanse zonas verdes”.

Miércoles 15

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) pide al gobierno de México que dé explicaciones sobre el secuestro de 22 mil migrantes, uno de los puntos abordados durante dos días de audiencia pública en Ginebra. México debe rendir cuentas sobre el secuestro de 22 mil migrantes, reiteró a la Afp el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, uno de los 16 expertos de este comité, quien formula el requerimiento durante los debates a la nutrida delegación mexicana asistente, sin conseguir ninguna respuesta.

Jueves 16

En San Miguel de Allende, Guanajuato, unas 50 personas, entre huicholes y activistas, piden a la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, su intervención para evitar que la empresa canadiense First Majestic explote plata y destruya la zona de Wirikuta, territorio considerado sagrado por los indígenas. “Canadienses, respeten nuestra tierra”, “Mineras canadienses ilegales y sucias”, se leía en algunas de las pancartas que mostraban los manifestantes, quienes se apostaron afuera del hotel posada Santa Fe, donde la diplomática se reúne con un grupo de sus connacionales, radicados en San Miguel de Allende.

Alrededor de mil integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) acuden a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la ciudad de México para presentar su pliego petitorio, luego de emplazar a huelga para marzo. Junto con ellos viajan al Distrito Federal integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UACH (STAUACH), quienes se mantienen en huelga desde el primero de febrero y demandan que se liberen recursos para que se solucionen sus demandas.

Integrantes de la Familia Pasta de Conchos se reúnen con senadores de las comisiones que dictaminan la iniciativa para regular la industria del carbón y demandan que se aceleren los trabajos, porque las muertes de los mineros continúan. Denuncian en la reunión efectuada en el senado, que de la explosión en Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, donde fallecen 65 trabajadores que quedaron sepultados en la mina, a la fecha, han ocurrido otros 67 decesos más en pocitos, tajos y minas subterráneas.

Integrantes del Frente Cívico Mexicalense y de la Coordinadora de Trabajadores y Sindicalizados Valentín Campa marchan del Zócalo capitalino a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, ubicada en la Alameda Central, para exigir al gobierno federal que reduzca los costos de los energéticos y las “altas tarifas” que cobra la CFE. Entre consignas de “ni un voto a PRI y PAN”, acompañados por batucadas y con pancartas, los manifestantes entregan durante su recorrido cartelones con la leyenda: “Calderón, abajo la luz, gas y gasolinas” a las decenas de personas que caminaban por Madero, quienes los observaban con sorpresa.

Viernes 17

Diversas organizaciones de derechos humanos logran que la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) enviara a la PGR las investigaciones por la desaparición forzada de Nitza, Rocío y José Ángel Alvarado, quienes el 29 de diciembre de 2009 fueron detenidos y luego desaparecidos por un grupo de militares en el municipio chihuahuense de Buenaventura. El caso ha sido ventilado ante organismos internacionales, e incluso lleva a la CNDH a emitir la recomendación 43/2011, donde señala al Ejército y la Policía Federal como autores de la desaparición.

Alrededor de 80 activistas y estudiantes universitarios realizan una marcha de la Escuela Superior de Economía, del Instituto Politécnico Nacional, al Zócalo capitalino, en repudio a la militarización de la vida pública del país. La caminata, organizada por la Coordinadora Nacional contra la Militarización (CONACOM), marca además el cierre de una serie de actividades realizadas durante toda la semana en el Distrito Federal, Chihuahua y Ciudad Juárez, en rechazo a la presencia cada vez mayor de las fuerzas armadas y la policía. Entre consignas y mantas contra la violencia del Estado, los manifestantes salen del Casco de Santo Tomás alrededor de 5:30 de la tarde.

Habitantes del nuevo municipio Belisario Domínguez muestran su indignación ante las declaraciones de autoridades oaxaqueñas que insisten en frenar el desarrollo de los pueblos indígenas. En voz del comisariado ejidal de Gustavo Díaz Ordaz, en este municipio, Emilio Hernández Pérez, exigen respeto. “Es una lástima que gente que también tiene sus pueblos indígenas, que sabe lo mucho que nuestros pueblos necesitan crecer, que tengamos servicios de salud, de educación, esté queriendo poner trabas a nuestro desarrollo como lo pretende Jesús Martínez Álvarez, el secretario de Gobierno de Oaxaca”, manifiesta. Agrega que las obras que el mandatario chiapaneco Juan Sabines emprendió en días pasados lo único que hacen es dignificar a los habitantes de este nuevo municipio.

En vísperas de que se cumplan seis años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila —el 19 de febrero de 2006—, defensores de derechos humanos exigen poner fin a la impunidad que ha prevalecido en torno a este accidente, en el que fallecieron 65 mineros. En conferencia de prensa, representantes de la Organización Familia Pasta de Conchos, del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y de los centro de Reflexión y Acción Laboral y de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez,

presentan el sexto informe sobre la tragedia, denominado *Siglo XXI: el martirio en las minas de carbón*. Familiares de los 63 obreros que permanecen sepultados en la mina Pasta de Conchos, luego de la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006, montan un altar con flores y fotografías en la entrada a la carbonera para conmemorar el sexto aniversario de la tragedia. Los deudos se concentrarán el sábado por la noche frente al yacimiento situado en el ejido Santa María, municipio de San Juan de Sabinas, y realizarán una vigilia hasta las 2hrs del domingo 19 de febrero, hora y fecha en que hace seis años ocurrió el accidente.

Sábado 18

Desde hace dos años los indígenas nahuas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz permanecen en la cárcel acusados falsamente del robo de un vehículo, como represalia por la lucha que iniciaron para dotar de agua a la comunidad de Atla, en la sierra norte de Puebla, luego de que por más de tres décadas un cacique local había acaparado la distribución del líquido, por el cual pedía dinero o trabajo voluntario a quien lo necesitara. Así lo denuncia en entrevista Araceli Olivos Portugal, miembro del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), quien afirma que este caso es representativo de la forma en que son criminalizados los activistas de los pueblos indios.

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa envían un documento a la CNDH donde reiteran su exigencia de que las investigaciones de este organismo sobre el asesinato de dos de sus compañeros, ocurrido el pasado 12 de diciembre a manos de la policía, tengan un carácter especial, y no concluyan con una recomendación más. Con el apoyo de diversos especialistas, académicos y organizaciones de defensa de las garantías individuales, los normalistas envían una carta a la entidad dirigida por Raúl Plascencia Villanueva, donde plantean una serie de exigencias para que las indagatorias tengan efectividad real.

Unos 500 profesores e investigadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) se suman a la huelga que el 15 de febrero iniciaron 954 empleados administrativos de la institución, al no haber acuerdos económicos con la rectoría que encabeza Eladio Cornejo Oviedo. La mayoría de los 5 mil alumnos de los *campus* Saltillo y Torreón son originarios de entidades del sureste de México, hasta donde se les trasladó en autobuses contratados por la casa de estudios.

Si la minera Ternium no paga 200 millones de pesos por regalías de 2010 y 2011, los comuneros de San Miguel Aquila mantendrán el bloqueo al yacimiento de hierro que instalaron en octubre pasado, advirtieron hoy dirigentes de los 441 inconformes. Los comuneros exigen firmar un contrato mediante el cual la transnacional se comprometa a erogar 3.3 dólares por tonelada de mineral extraída, más gastos de flete a Tecomán, Colima. En respuesta a la solicitud de Ternium de liberar el patio de maniobras para continuar el diálogo, los comuneros aseguraron que impedirán que la mina reanude labores si no hay un pacto por escrito.

El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, critica el pacto de impunidad que se tejió y mantuvo durante las dos administraciones federales panistas en torno al caso Pasta de Conchos, y aseguró que sólo la presión de la sociedad civil forzará a que finalmente se haga justicia. En entrevista con *La Jornada*, con motivo del sexto memorial de la tragedia ocurrida el 19 de febrero y en la que murieron 65 mineros –de los cuales 63 cuerpos permanecen sepultados en el socavón–, el obispo insiste en que la

razón de la negativa al rescate de los cuerpos radica en que al sacarlos se comprobará que los dejaron morir

Domingo 19

Los deudos de Pasta de Conchos recuerdan que sobre la carretera entre Sabinas y Múzquiz está el camino que conduce a la mina Pasta de Conchos. No es difícil encontrarlo; en el entronque hay una fila de cruces de madera pintadas de blanco con los nombres de los 65 obreros que murieron allí hace seis años. Es el camposanto en que se convirtió la carbonera concesionada a Industrial Minera México y Grupo México, ante la renuencia de empresarios y del gobierno federal a reanudar los trabajos de búsqueda y rescate de los 63 cadáveres que siguen atrapados desde el 19 de febrero de 2006. El reporte oficial señala que esa noche las concentraciones de gas metano con que la mina funcionaba de manera cotidiana se activaron con una chispa que ocasionó un cortocircuito y hubo una explosión que derrumbó el techo y las paredes del socavón. Los mineros estaban a unos 700 metros de distancia de la bocamina y una semana después del estallido el entonces secretario de Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, canceló la posibilidad de rescatarlos con vida.

Hijos de guerrilleros que fueron desaparecidos presuntamente a manos de militares durante la llamada *guerra sucia* en México, así como en años recientes —entre ellos familiares de los guerrerenses Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos desde 2007—, se manifiestan frente a las puertas del Campo Militar número uno para protestar contra el Ejército Mexicano, en su día, al que denominaron una institución represiva. Con pancartas en las que exigen justicia y castigo para los responsables de las desapariciones de sus familiares, los manifestantes consideraron que los militares siguen incurriendo en encarcelamientos clandestinos, torturas e incluso en *ejecuciones* extrajudiciales.

Entre enero de 2012 y el 16 de febrero pasado fue reportada la desaparición de 26 mujeres, entre ellas 15 menores, ante la Unidad Especial que Investiga la Desaparición de Mujeres, de la Fiscalía General del Estado (FGE). Según la FGE, por primera vez desde 1993, la ciudad de Chihuahua superó a Juárez en ese tipo de casos. La FGE indicó que entre 1993 y 2012 se reportó desconocer el paradero de 218 mujeres, la mayoría menores de edad.

Lunes 20

Con 493 votos en favor y 187 en contra, resultado del plebiscito efectuado este lunes, los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACH) determinan levantar la huelga que sostenían desde el pasado primero de febrero. Édgar Arturo Sánchez, secretario de organización del STAUACH, informa que fueron instaladas 29 urnas en las afueras del auditorio Emiliano Zapata en las instalaciones de Chapingo; además de otras en los más de 20 centros regionales foráneos del país.

Unos 400 integrantes del FPDT de San Salvador Atenco, en el Estado de México bloquearon la carretera federal Texcoco - Lechería para impedir que miembros de la organización priísta Antorcha Campesina (AC) dirigieran la introducción de maquinaria pesada para realizar una obra, que no cuenta con el aval del comisariado ejidal y de las autoridades municipales. Alrededor de las 12:30 horas, los integrantes del FPDT, encabezados por Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinoza, se sitúan sobre la carretera federal, a la altura de la entrada de Atenco, y bloquean ambos sentidos. Los

campesinos se inconforman porque integrantes de AC se adjudicaron dicha obra y la promovieron como suya, a pesar de que depende de la Junta Local de Caminos.

Martes 21

Unos 50 maestros egresados de seis normales públicas de la entidad bloquean este lunes calles aledañas a la Secretaría de Educación en Guerrero para exigir que se otorguen 80 plazas a mentores que aprobaron el examen nacional implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). En respuesta, el gobernador Ángel Aguirre Rivero manifiesta en entrevista que no hay recursos para nuevas plazas y tan sólo en el sector educativo tenemos un déficit de más de 7 mil millones de pesos.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informa que el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura, con sede en Ginebra, Suiza, emite una acción urgente en favor de varios estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, e insta a las autoridades estatales y federales a realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre el desalojo policiaco ocurrido el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo. En particular sobre el asesinato extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y la agresión sufrida por Gerardo Torres Pérez, quien fue torturado para obligarlo a implicarse falsamente en los disparos contra los estudiantes, precisa.

El sindicato de burócratas estatales mantiene un paro indefinido de labores por segundo día consecutivo, pero ahora sus demandas incluyen la destitución del secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, y del comisionado de la Policía Estatal, César Alfaro Cruz, por ordenar el desalojo de la protesta de sus compañeros la mañana del lunes en los accesos a las oficinas del cuartel de la corporación. De esta forma, los 9 mil 500 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) continúan su protesta e impiden la entrada a trabajadores y público en general a Ciudad Administrativa, al Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial y al palacio de gobierno y otras dependencias gubernamentales en toda la entidad.

Integrantes de la Caravana del Hambre, que agrupa a organizaciones campesinas, demandarán a las autoridades federales un informe preliminar sobre la aplicación de 34 mil millones de pesos que el Ejecutivo destinó en enero a las entidades en situación de emergencia por las heladas y sequías, que han afectado principalmente a los estados del norte del país. Durante el primer trimestre se entregarán todos los recursos destinados a la parte productiva. Por eso solicitan un informe de la aplicación del gasto para ver los avances.

Miércoles 22

Elementos de la Policía Federal Ministerial detienen a Lucila Bettina Cruz Velázquez, activista de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, cuando salía de las oficinas de la CFE de Juchitán de Zaragoza, informa Rodrigo Flores Peñaloza, dirigente magisterial en esa ciudad. La también integrante del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas fue acusada por el Ministerio Público Federal por los delitos de privación ilegal de la libertad y contra la riqueza nacional, cometidos presuntamente en abril pasado, durante una protesta fuera de esas oficinas para demandar la libertad de uno de sus compañeros. Precisa que Cruz Velázquez

fue aprehendida al salir de una reunión con funcionarios de la empresa.

El profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, preso político de la Voz del Amate y adherente de *la otra campaña* del EZLN, quien lleva encarcelado cerca de 12 años –y que meses atrás fue trasladado de Chiapas al Cefereso número 8, llamado Norponiente, en Guasave, Sinaloa–, acusa al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, de incumplir su compromiso de gestionar su libertad ante las autoridades federales. A casi dos años de que el gobernador de Chiapas declaró públicamente mi inocencia y se comprometió a liberarme, dicho compromiso quedó en palabras y nada de hechos, sostiene el preso de conciencia y defensor de derechos humanos de la población carcelaria.

La organización de la sociedad civil Las Abejas afirma que el gobierno mexicano está liberando a los paramilitares que cometieron la masacre de 45 indígenas en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, no por la ausencia de pruebas suficientes, sino porque teme que confiesen, hablen y digan la verdad sobre la matanza, pues fue el Estado el que se las ordenó. En conferencia de prensa ofrecida por sus dirigentes en esta comunidad, poco antes de la misa con que fueron recordadas las 45 víctimas, luego de 14 años con dos meses de la matanza, agrega que es preciso juzgar a los autores intelectuales porque sólo así podremos evitar que se repita otro Acteal.

Integrantes de la Coalición de Trabajadores Jubilados y Liquidados del Sindicato Mexicano de Electricistas sostienen que el gobierno federal no ha cumplido con los programas de empleo que ofreció a quienes accedieron a la liquidación tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), ocurrida a principios de octubre de 2009. En conferencia de prensa, el coordinador de la agrupación, Alfredo Ríos Solís, y Gustavo Lugo, integrante de la coalición, precisan que de los casi 13 mil trabajadores contratados en la Comisión Federal de Electricidad sólo 3 mil pertenecían a LyFC. Asimismo informan que han pedido tener encuentros con los aspirantes al Gobierno del Distrito Federal, a fin de exponerles la crítica situación en que se encuentra la red eléctrica en la zona centro del país.

Tres funcionarios y 26 custodios del penal de Apodaca Son arraigados por su presunta participación u omisión en la matanza de 44 reos del cártel del Golfo y la fuga de 30 integrantes del grupo delictivo de Los Zetas la madrugada del domingo, informa Adrián de la Garza Santos, titular de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Los arraigados son Gerónimo Miguel Andrés Martínez, hasta hace dos días director del penal de Apodaca; el subdirector Juan Hernández Hernández y el jefe de seguridad Óscar Deveze Zambrano. Ernesto García Guerrero, comandante de administración penitenciaria, no fue arraigado, pero sigue bajo investigación, precisa.

Integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Universidad Autónoma Chapingo exigen a las autoridades federales resolver los conflictos de huelga que se avecinan en la institución, pues dicen que si bien este lunes se solucionó –por medio de un plebiscito– el paro que mantuvieron por 20 días los trabajadores académicos de la universidad, ahora el Sindicato de Trabajadores Administrativos emplazó a huelga para la primera semana de marzo, si no llega a un acuerdo con la rectoría respecto al aumento salarial y por violaciones al contrato.

Tras los hechos ocurridos el lunes pasado, donde personal de seguridad de la Arena Ciudad de México agrede a golpes a integrantes del movimiento Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco que se oponen a la construcción de dicho centro de espectáculos; la noche vecinos realizan una asamblea y tras varias hrs acuerdan emprender acciones en contra de la inauguración, prevista para el sábado 25. José Antonio Lara y Eliseo Roa, integrantes de la Alianza Única del Valle, una de las

organizaciones que integran dicho movimiento, explican que las acciones para este fin de semana comprenden una marcha contra la privatización y el despojo, que partirá del Deportivo Reynosa a las 15:30hrs del sábado y llegará hasta donde tenga que llegar.

Jueves 23

Medio centenar de activistas se manifiestan con gritos y pancartas en contra del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Omar Williams López Ovalle, durante la comparecencia del *ombudsman* ante el pleno del congreso local para rendir un informe sobre las actividades que realizó el año pasado. La sesión debió ser suspendida, en virtud de que los quejosos no acataron el llamado del presidente de la mesa directiva de la legislatura, el priísta Kendor Macías Martínez. El dirigente de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Juárez Frías, informa que la comparecencia se repondría en otra ocasión, y niega que la mesa directiva había fallado en su función.

El gobernador de Coahuila, el priísta Rubén Moreira Valdez, asegura que su administración no regateará recursos para buscar y encontrar a las alrededor de mil 680 personas desaparecidas de manera forzada en los años recientes, a raíz de que se agudizó la violencia por el combate a bandas del crimen organizado. Al promulgar la ley que entrará en vigor este viernes, la cual sanciona como delito sin derecho a fianza la desaparición forzada, y da forma a una subprocuraduría especializada en la investigación de los secuestros y levantones, Moreira considera urgente localizar a los ausentes.

Viernes 24

El Estado ha decidido no proteger a sus ciudadanos, nos pueden secuestrar ahorita, nos pueden desaparecer y el Estado no va a hacer nada, dice Javier Sicilia durante un encuentro con alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El escritor y representante del MPJD dice: “No podemos seguir permitiendo esto, necesitamos leyes de no repetición del crimen, hay 250 mil desplazados y así están las familias, tenemos muertos y amenazados en el movimiento.

Unos 600 pobladores de la comunidad de Santiago Cuautlalpan bloquean durante casi 12 hrs la carretera federal México-Texcoco para exigir al gobierno estatal frenar la construcción de un fraccionamiento ilegal que realizan la organización priísta AC en un predio de 38 hectáreas, sin tener los permisos correspondientes. Al mismo tiempo, a casi medio kilómetro de distancia, unos 500 integrantes de AC se congregan en el terreno en disputa, donde realizan un mitin y advierten que van a defender el predio hasta sus últimas consecuencias.

Sábado 25

Integrantes del Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas velan los restos de Jessica Leticia Peña García frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Ciudad Juárez. Los inconformes exigen la presencia del gobernador de la entidad, César Duarte Jáquez; del fiscal estatal, Carlos Manuel Salas, y de la titular de la PGR, Marisela Morales, para que expliquen la ausencia de resultados en las indagatorias sobre los homicidas de mujeres.

Unos mil indígenas y campesinos agrupados en el Frente de Lucha Popular 29 de Febrero marchan en la cabecera municipal de Huixtán, Chiapas, para protestar por las altas tarifas que cobra la CFE. Exigen

además que no se construyan más presas y piden que no se privatice la energía eléctrica. El dirigente del frente, Pedro Álvarez Vázquez, dice que en algunos domicilios llegan recibos por 8 mil o 10 mil pesos, cuando sólo hay tres o cuatro focos; es una injusticia.

El Frente de FPDT anuncia que interpondrá un amparo contra la Comisión Nacional del Agua por la compra de tierras comunales en los ejidos de Nexquipayac. Explica que la Conagua adquirió 320 hectáreas en un millón 410 mil pesos, pero el comisariado ejidal incumplió con el artículo 80 de la Ley Agraria Nacional, según la cual los ejidatarios tienen la obligación de notificar a las esposas o concubinas y a los hijos, la decisión de vender la propiedad, que es reserva para el uso de la comunidad.

Durante más de cinco horas, bajo una pertinaz lluvia y granizo, elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública local mantienen cercados a los vecinos que integran el Movimiento de Pueblos, Barrios y Colonias de Azcapotzalco que protestan contra la apertura de la Arena Ciudad de México.

Con pancartas y mantas, profesores de la CNTE forman una cadena humana para rechazar la evaluación universal, la ACE y en defensa de la educación pública. Sin obstruir el paso de vehículos ni transeúntes, cientos de maestros se ubican en el camellón central de avenida San Cosme, desde las inmediaciones de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros hasta el Metro San Cosme, para informar los motivos por los que se oponen a la ACE, suscrita en mayo de 2008 por el presidente Felipe Calderón y la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.

Integrantes del movimiento Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco cierran tres accesos al pueblo de Santa Bárbara que conducen a la Arena Ciudad de México, en respuesta al cerco policiaco que por segundo día consecutivo mantienen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para resguardar el centro de espectáculos propiedad del Grupo Salinas. En la retención que por varias horas sufre un grupo de vecinos por efectivos del Cuerpo de Granaderos, el sábado pasado durante la inauguración, hay privación ilegal de la libertad, afirma el tercer visitador de la Comisión de CDHDF, José Antonio Guevara. Señala que documentaron que durante más de cinco hrs se violentaron los derechos de manifestación, circulación y reunión de al menos cinco vecinos

Domingo 26

Este domingo se cumplen dos días de protesta en los que María García Reynosa, madre de Jérica Leticia Peña García, vela los restos de su hija frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir la presencia del gobernador César Duarte Jáquez y pedirle resultados en las investigaciones sobre mujeres desaparecidas. Tras recibir los restos de su hija el pasado viernes por la noche, García Reynosa platica con el fiscal general de Juárez, Jorge González Nicolás y con Bernardo Silveria Sayto, subsecretario de Gobierno estatal, quienes le ofrecieron atención psicológica y asistencia médica durante su plantón en las afueras de la dependencia. En el plantón participan familiares de otras jóvenes desaparecidas en la entidad, al que también se han integrado miembros de organizaciones como el Frente Plural Ciudadano y La Red de Mujeres.

Integrantes del movimiento Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco cierran tres accesos al pueblo de Santa Bárbara que conducen a la Arena Ciudad de México, en respuesta al cerco policiaco que por segundo día consecutivo mantienen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública

del Distrito Federal para resguardar el centro de espectáculos propiedad del Grupo Salinas. En la retención que por varias horas sufre un grupo de vecinos por efectivos del Cuerpo de Granaderos, el sábado pasado durante la inauguración, hubo privación ilegal de la libertad, afirma el tercer visitador de la CDHDF, José Antonio Guevara. Señala que documentaron que durante más de cinco horas se violentaron los derechos de manifestación, circulación y reunión de al menos cinco vecinos.

Lunes 27

Agua Murciélagos, San José Tenango, Oaxaca se encuentran 980 mil 894 ciudadanos no hablan español en territorio mexicano proceden de los pobladores originarios, pero sobreviven apartados en su propia tierra. El viaje más largo que han realizado muchos de ellos es adonde terminan las veredas de sus montañas, de sus aldeas, y empieza el asfalto. Ahí se yergue un muro invisible que les dice: No hay paso.

En México, 15.7 millones de personas se consideran indígenas, de los cuales 6.6 millones son hablantes de una lengua autóctona. El 66.8 % de sus viviendas no tienen drenaje entubado a la red pública. En 58.8 % de sus hogares se cocina con leña o carbón. En 50.7 % de sus casas no hay refrigerador. De sus refugios, 11.8 % carecen de sanitarios. 8% de sus viviendas no tiene luz eléctrica. De los 6.6 millones de hablantes de lengua indígena 15.8% de 3 años y más no hablan español. De ellos, 61.7% son mujeres y 38.3 hombres. De la población monolingüe, 42 % son niños, 38.9 tienen entre 15 y 59 años y 19.1 % son adultos mayores. 9.7% de los niños de seis a 14 años no asisten a la escuela. 24.3 % de 15 años y más son analfabetos. 25.1 % tienen primaria incompleta.

La PGR concluye las investigaciones del caso Ayotzinapa. Entre las conclusiones destaca que peritos de esa dependencia encontraron indicios para afirmar que agentes de la policía ministerial de Guerrero fueron quienes dispararon contra los dos alumnos normalistas que fallecieron el 12 de diciembre del año pasado, durante el desalojo del bloqueo que los estudiantes realizaban en la Autopista del Sol. Funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) dicen que el resultado de las pesquisas demuestra que, tras el homicidio de los dos estudiantes, empleados de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero alteraron la escena del crimen y desaparecieron pruebas.

La CNC inicia una jornada nacional en defensa de la tierra, para exigir la regularización de 25 mil has en posesión 4 mil 500 campesinos, dice Max Agustín Correa. El conflicto agrario es un asunto de gobernabilidad y de seguridad nacional que han ignorado los gobiernos del PAN, agregó. En conferencia de prensa, apunta que la Secretaría de la Reforma Agraria pretende resolver los conflictos por la vía jurídica e ignora los agravios contra las comunidades; además, sólo reconoce que hay 450 conflictos en el país, los cuales pretende resolver con 500 millones de pesos asignados para este año.

La Fiscalía General del Estado de Durango revela que durante enero fueron exhumados 49 cadáveres de una fosa clandestina en esta capital, lo que eleva a 331 la cifra de cuerpos desenterrados desde el 11 de abril de 2011 en 15 excavaciones de los municipios de Durango, Lerdo, Cuencamé, Santiago Papasquiaro y San Juan del Río. Sonia Yadira de la Garza Frago, titular de la dependencia, da a conocer este lunes que los restos fueron extraídos de la fosa localizada el 19 de diciembre pasado en el ejido Cristóbal Colón, municipio de Durango.

La CDHDF condena que más de un centenar de personas fueran privadas de sus derechos al libre tránsito y de manifestación de ideas por varias hrs durante la apertura de la Arena Ciudad de México, el pasado sábado, por lo que inicia una queja. En el pueblo de Santa Bárbara, dos grupos de manifestantes, de 50 personas cada uno, fueron encapsulados por elementos del Agrupamiento de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en las inmediaciones del centro de espectáculos, sin que fueran puestas a disposición de alguna autoridad administrativa y sin permitírseles la libertad de tránsito, informó el organismo.

Habitantes del pueblo de Xoco clausuran simbólicamente las obras de construcción de la Ciudad Progresiva y bloquean por más de una hora el acceso al estacionamiento de Grupo Bancomer, así como el paso de vehículos en la calle de Real de Mayorazgo, en la delegación Benito Juárez. Estas acciones son para protestar por la violación de las normas de desarrollo urbano que rigen en la citada delegación, luego de que la delegación a cargo del panista Mario Palacios retira los sellos de clausura que fueron colocados por el riesgo que tienen las viviendas del poblado, debido a la magnitud de las obras.

El pueblo wixárica obtiene la suspensión provisional del Poder Judicial de la Federación sobre el proyecto minero de la empresa canadiense First Majestic, previsto para realizarse en Wirikuta, zona sagrada. Esta resolución se da a partir de un amparo interpuesto el año pasado por la comunidad indígena y servirá para revisar a fondo todos los elementos jurídicos que tienen que ver con este plan. Iván Guzmán, responsable del área de prensa del Frente en Defensa de Wirikuta, explica que sobre el proyecto La Luz, de First Majestic, y de la filial mexicana Real Bonanza, el Consejo Wixárica interpuso un amparo y obtuvo esta resolución, con la cual un juzgado reconoció que se trata de un problema complejo. Precisa que se trata de una suspensión a toda actividad de explotación, no de la cancelación de las concesiones que posee First Majestic. Apunta que entre los elementos jurídicos que se revisarán están que la población no tuvo derecho a una consulta libre, bien informada y previa, tal como establece la legislación vigente, como es el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México es signatario.

Martes 28

Cuatro estudiantes de secundaria se encuentran desaparecidas, informa la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, basado en reportes de sus familiares. Según las indagatorias, el jueves pasado faltaron a clases dos estudiantes de la secundaria federal tres, del centro de Ciudad Juárez. Se fueron a jugar maquinitas por separado; una se entretuvo y no supo que pasó con su amiga, de 13 años, y decidió regresar sola a su casa. Francisca Galván, abogada del Comité de Madres y Familiares de Desaparecidas, informa que por tratarse de menores y del lugar en que fueron reportadas como desaparecidas son considerados casos de alto riesgo.

El primero de marzo se cumplen dos años del asesinato del abogado Ernesto Rábago Martínez, asesor jurídico del ejido rarámuri de Baqueachi, municipio de Carichí, en la sierra Tarahumara. El crimen, cometido en la ciudad de Chihuahua, está relacionado con el litigio que los indígenas sostienen contra un grupo de ganaderos mestizos por invasión y apropiación de más de 44 mil hectáreas de tierra. A la fecha no se ha ejercido acción penal contra los autores material e intelectual del asesinato. Como reportó *La Jornada* en su momento (3/3/10), Rábago fue atacado en el despacho que compartía con su esposa, la también abogada Estela Ángeles Mondragón, quien ha dirigido la batalla legal de los rarámuri contra los ganaderos. Desde un principio ella atajó las afirmaciones dolosas de que se trataba de una ejecución del crimen organizado: Es una venganza y está relacionada con la defensa de las

tierras de los indígenas de Baqueachi. La abogada ya había sido amenazada y dos semanas antes su hija Denny Loya Ángeles fue herida de bala en un brazo cuando se encontraba en la cochera de su casa.

A 10 años de la tragedia ocurrida en el Hospital General K de Comitán, Chiapas, madres y familiares de los 35 bebés fallecidos continúan exigiendo que se haga justicia y se aplique la ley a Pablo Salazar Mendiguchía, al ser responsable de esos hechos. Y es que las madres de los 35 infantes que murieron en el nosocomio en diciembre de 2002 y a principios de enero de 2003 recuerdan a sus hijos como víctimas de la negligencia médica.

Miércoles 29

En el contexto actual de violencia desatada, desarticulación de movimientos sociales y de prevalencia de una cultura del miedo, el proyecto de autonomía zapatista da luz sobre cómo mantener el tejido social, crear mecanismos de seguridad para la población y alternativas a momentos de crisis, considera Mariana Mora Bayo, coordinadora –junto con Bruno Baronnet y Richard Stahler-Sholk– del libro *Luchas muy otras. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas*.

Este año se han perpetrado 14 asesinatos de mujeres en el estado de México. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), 13 ya fueron esclarecidos. En los últimos 10 meses de 2011 se denunciaron 52 casos y 46 ya fueron resueltos, y en 2010 se documentaron 210.

El aumento de los asesinatos de mujeres en la entidad generó el año pasado una movilización de diversos grupos sociales. A principios de este año *La Jornada* solicitó, por conducto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal, datos sobre 11 feminicidios perpetrados en 2011 en seis municipios del oriente del estado: cuatro en Ixtapaluca; dos en Valle de Chalco, dos en Chalco, uno en Tlalmanalco, otro en Amecameca y uno más en La Paz.

Las actividades en la UAAAN seguirán suspendidas, no obstante que empleados administrativos levantan este martes la huelga que inician el 15 de febrero, pues los docentes continuarán el paro que empezaron el 17 de febrero. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAAAN reclama un aumento salarial superior a 20% y no ha llegado a un acuerdo con el rector Eladio Cornejo Oviedo.

Habitantes de la colonia Condesa se manifiestan en contra del derribo de cientos de árboles en el Parque México como supuesta medida de saneamiento, y que afecta a cientos de ejemplares que no tenían ningún problema. Se informa que el parque sería sometido a una poda, avalada por la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial (PAOT) y las autoridades de la delegación Cuauhtémoc, pero lo que hicieron fue un derribo masivo de ejemplares que de alguna forma se veían secos, pero estaban así porque es el final de invierno, afirman los vecinos.

Glosario de siglas

AC	Antorcha Campesina
ACE	Alianza por la Calidad Educativa
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CEA	Comisión Estatal del Agua
CEDH	Comisión Estatal de Derechos Humanos

CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIDHM	Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNPA-MN	Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CONACOM	Coordinadora Nacional contra la Militarización
CONEVAL	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CTM	Confederación de Trabajadores de México
EPR	Ejército Popular Revolucionario
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FEG	Fiscalía General del Estado
FPDT	Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Frayba	Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
HCNH	Honorable Casa Nacional del Estudiante
HIJOS	Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
LyFC	Luz y Fuerza del Centro
MOCRI	Movimiento Campesino Regional Independiente
MPJD	Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
MULT-I	Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONU	Organizaciones de Naciones Unidas
PAOT	Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial
Pemex	Petróleos Mexicanos
PGJEM	Procuraduría General de Justicia del Estado de México
PGR	Procuraduría General de la República
PJM	Procuraduría de Justicia Militar
PRD	Partido de la Revolución Democrática
Pro-Oax	Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca
PRODH	Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
Sedena	Secretaría de la Defensa Nacional
SEG	Secretaría de Educación en Guerrero
SEGOB	Secretaría de Gobernación
Semarnat	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP	Secretaría de Educación Pública
SERAPAZ	Servicios y Asesoría para la Paz
SIEDO	Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SRA	Secretaría de la Reforma Agraria
STAUACH	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo
STPEIDCEO	Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca
SUTIEMS	Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior

SUTUACM	Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAAAN	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
UACH	Universidad Autónoma Chapingo
UACM	Universidad Autónoma de la Ciudad de México
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UCD	Unión Campesina Democrática
UCIP	Unión Campesina Independiente de Puebla
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
VIH	Virus de inmunodeficiencia humana

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de País del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Coordinadores: Massimo Modonesi y Lucio Oliver.

Relevamiento y sistematización: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana.

Fuentes: Diarios La Jornada y El Universal

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Marzo de 2012

Editada en diciembre de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1113

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México***



Integrantes Massimo Modonesi
Lucio Oliver
Mariana López de la Vega
Fernando Munguía Galeana

Fuentes diarios La Jornada y El Universal.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Marzo de 2012

Jueves 1

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, crítica al gobierno mexicano en un mensaje videograbado transmitido en el contexto de la Convención Nacional de Industriales 2012, “por haber sido incapaces de coordinarse para hacer valer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos”. Señala que el esquema político actual, lejos de solucionar estos retos, se ha vuelto un obstáculo para superarlos. También destaca que “si bien México goza de estabilidad macroeconómica, en dos décadas el país no ha podido crecer más de 2.8% anual en promedio, ni crear empleos ni oportunidades eficientes en cantidad y calidad”.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) exhorta al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a no contaminar con el proceso electoral en curso el diálogo que sostienen ambas instancias. Antes de reunirse con varias asociaciones de alcaldes, en las que se agrupa a presidentes municipales emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el subsecretario de Gobierno, Obdulio Ávila, asegura que las conversaciones con la dirigencia del SME continúan, y rechaza que el gobierno federal asuma un doble discurso con este gremio. Advierte también que las manifestaciones de los electricistas deben realizarse de manera pacífica y en el contexto de la ley, pero nada precisa acerca de la propuesta de gobernación o de la razón por la cual se ha demorado la solución de este conflicto. En tanto, un grupo de integrantes del SME acude a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para presentar un documento firmado por 12 mil 610 personas. En el texto se solicita la urgente intervención de este organismo para que analice diversas acciones y omisiones procesales que los trabajadores electricistas consideran violatorias de sus garantías básicas, y que le atribuyen al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y al segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Los sindicalistas son atendidos por personal de la CNDH, el cual recaba sus declaraciones y les anuncia que se analizará su escrito y se le dará el trámite que corresponda en los términos de la ley.

Unos 300 ejidatarios y pobladores de Cuautlalpan, en Texcoco, Estado de México, bloquean el Circuito Exterior Mexiquense durante cuatro horas en protesta porque integrantes de Antorcha Campesina (AC) introdujeron maquinaria a sus ejidos para hacer un camino que atravesará tierras de cultivo hacia el predio Hidalgo y Carrizo. Funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal anuncian que presentarán una denuncia por la construcción del camino, pues carece de permisos e invadiría tierras de labranza.

Usuarios de la junta de aguas y drenaje de la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, rechazan las modificaciones administrativas emprendidas por el organismo, que en febrero expidió dos recibos a 2 mil 700 familias de colonias populares. El alcalde Alfonso Sánchez Garza puso un ultimátum a la empresa CISA, encargada de la facturación, para corregir las fallas, pero Juan José Vivanco, gerente comercial de la junta, señala que permitirá a los usuarios pagar un recibo de inmediato y el otro en lo que resta del año.

Profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de 16 entidades marcharán nuevamente en la capital del país este 15 de marzo. Su demanda es la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), suscrita por Elba Esther Gordillo y el presidente de la República, Felipe Calderón, en mayo de 2008, y la suspensión definitiva de la evaluación universal que se aplicará a más de 700 mil docentes de primaria en el país en junio próximo. El secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco Bravo, afirma que esta acción forma parte de una jornada nacional de movilizaciones de 72 horas en la que participarán todos los contingentes de la CNTE del 14 al 16 de marzo próximo. Informa que la dirección política nacional de la coordinadora acordó reiniciar las protestas ante la negativa de las autoridades federales de dar una respuesta a sus demandas, pues, según señalan, sólo los quieren traer de una mesa a otra, sin hacer propuestas ni generar avances sustantivos.

El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), Juan Manuel Herrera Campos, informa que existen ocho nuevas averiguaciones previas relacionadas con el homicidio de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –ocurrido el 12 de diciembre durante un desalojo de la Autopista del Sol–, aunque no precisa contra quién o quiénes se iniciaron ni a qué tipo de delitos se refiere. Herrera Campos ratifica que están en trámite ocho averiguaciones por diversos delitos más, que en el momento procesal oportuno serán consignadas y se darán a conocer a los responsables junto a los delitos por los cuales se los está indiciando. No obstante, señala que son distintas a las que sigue la Procuraduría General de la República (PGR) y a las que lleva la CNDH.

Jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquean la calle Manuel Villalongín, en el Distrito Federal, donde está el Centro Pagador de Pensionados y Jubilados del IMSS al que acuden cada primero de mes a recibir su pago. La medida se toma debido a que el camión de transporte de valores no llegó a las ocho de la mañana, como esperaban. Luego de cinco horas de espera, los inconformes deciden cerrar las avenidas aledañas porque “esperamos nuestro salario mensual y no está. Somos adultos mayores, algunos en silla de ruedas o enfermos, y no es justo que nos tengan esperando tanto tiempo”, expone Hernando Martínez, secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados del Seguro Social.

Un grupo de niños, en representación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se manifiesta frente a la residencia oficial de Los Pinos, en el Distrito Federal, para solicitar al gobierno de México detener el megaproyecto turístico Cabo Cortés, que pretende desarrollarse cerca de Cabo Pulmo y que amenaza el arrecife coralino mejor conservado y de mayor riqueza biológica del Pacífico mexicano. Durante la manifestación se entrega a personal de la presidencia una misiva suscrita por más de 12 mil ciudadanos de un centenar de países que respaldan la defensa del arrecife coralino de Cabo Pulmo, ubicado a dos horas de Los Cabos, en Baja California.

Representantes de agrupaciones de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal demandan la intervención de la asamblea legislativa para que las autoridades cumplan con los más de 7 mil laudos laborales que han ganado ante los tribunales sin que hasta la fecha hayan recibido un centavo. Detallan que la administración central, “lejos de cumplir con los ordenamientos judiciales, mantiene una política laboral de represión y ha intensificado los despidos injustificados en por lo menos una docena de dependencias, principalmente del DIF-DF, y de secretarías como Desarrollo Social, Educación y del Trabajo y Fomento al Empleo”. En una misiva, los líderes de las agrupaciones integradas en la Federación de Trabajadores del Distrito Federal subrayan que las autoridades del gobierno capitalino llevan a cabo estas arbitrariedades a sabiendas de que implicarán una nueva andanada de demandas laborales, sin haber cumplido con las que perdieron en tribunales.

Viernes 2

Funcionarios y ex funcionarios de la PGJEG comparecen ante el juzgado primero de distrito, con sede en Chilpancingo, por el caso Ayotzinapa, pero se reservan su derecho de rendir declaración acerca del desalojo policiaco de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Son citados a comparecer el ex director de Averiguaciones Previas de la PGJEG, José Vélez Zapata, la fiscal regional María Seberiana Flores y la auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común María de Jesús de la Cruz. Luego de pagar una fianza de 10 mil pesos cada uno, los tres dejan el juzgado, pues los delitos de que los acusa la PGR no son considerados graves. Se espera que la próxima semana el juzgado determine su situación jurídica luego de que el pasado 22 de febrero se les libró orden de aprehensión, lo mismo que al ex titular de la PGJEG, Alberto López Rosas, y a otros funcionarios.

La CNDH revisará las investigaciones por los ataques contra periodistas de distintos medios en Baja California, entre ellos el perpetrado contra Antonio Heras, corresponsal del diario *La Jornada* en Mexicali. También las pesquisas por las amenazas contra Adela Navarro Bello, coeditora del semanario *Z*, informa el organismo en un comunicado. Esas agresiones, señala, vulneran el derecho de toda la población a permanecer informada y también el de libre expresión, factor esencial para la vigencia del Estado de Derecho y el régimen democrático. Por ello, apunta, la comisión permanecerá atenta a las indagatorias. La CNDH hace un llamado al gobierno a emprender las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los comunicadores.

El SME informa que obtuvo copia de cuatro documentos del gobierno federal que comprobarían que la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) habría tenido como trasfondo golpear a la organización e iniciar el proceso de privatización del sector eléctrico. Además –asegura– serán fundamentales para ganar los procesos judiciales que mantiene el sindicato en su demanda de reinstalación mediante un patrón sustituto de los más de 16 mil trabajadores que no aceptaron la liquidación. En una junta informativa realizada en el plantón que mantienen los electricistas a las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Martín Esparza Flores, secretario general del SME, critica también la postura de la SEGOB, dependencia que la víspera –por conducto de Obdulio Avila, subsecretario de Gobierno– llamó a no contaminar el diálogo que tiene con el gremio al introducir temas electorales.

Habitantes de las comunidades indígenas de Paramuén y El Carmen, municipio de Salvador Escalante, en Michoacán, bloquean la carretera Morelia-Pátzcuaro durante la mañana, para exigir al gobierno del estado que entregue con vida al presunto violador Gerardo Cruz García, quien desapareció tras ser liberado por las autoridades el pasado 24 de febrero. A las 11 de la mañana, unas 250 personas bloquean los cuatro carriles de la citada vialidad durante al menos cuatro horas y media. Al lugar acude el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, quien asegura en conferencia de prensa que los comuneros responsabilizan del supuesto secuestro a 13 policías municipales –10 hombres y tres mujeres–, quienes permanecen retenidos en la alcaldía de Santa Clara. Finalmente, los comuneros acceden a liberar la carretera y acuerdan instalar una mesa de negociación con el gobierno del estado en las inmediateces del bloqueo carretero que mantienen en la comunidad de Opopeo, ubicado a 5 kilómetros de Santa Clara del Cobre.

Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Oaxaca protestan por la toma de nota otorgada por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Estado de Oaxaca en favor de Guadalupe Bautista Herrera como secretario general del gremio, y presentan una denuncia penal en su contra por falsificación de firmas. Los inconformes cumplen tres días de plantón en las afueras de la

ciudad administrativa Benemérito de las Américas, sede del poder ejecutivo, como medida de presión para que su líder, Héctor Ramírez Narcia, sea reconocido como dirigente sindical.

A las cinco de la madrugada, la empresa jalisciense Caabsa Eagle suspendió la recolección, pues la alcaldía de Acapulco, Guerrero, le adeuda 18 millones de pesos por servicios correspondientes a 6 meses. El gerente de la compañía, Eduardo Covarrubias Luna, explica que 15 vehículos y 80 trabajadores que prestan servicios en las zonas uno y dos del puerto recibieron la orden de no trabajar. Afirma lamentar haber llegado al paro, “porque los afectados son los trabajadores, que tienen que mantener a sus familias, y los ciudadanos por la acumulación de desechos”. Asegura que espera que haya una pronta solución, de lo contrario la protesta será indefinida.

El SNTE, que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, analizará en los próximos días los avances en la mesa de negociación del pliego general de demandas 2012, entregado en enero a la Secretaría de Educación Pública (SEP). A casi dos meses de que la cúpula del gremio magisterial iniciara las negociaciones formales con funcionarios de la dependencia, pese a que su titular, Alonso Lujambio Irazábal, se ausentó de sus responsabilidades oficiales desde el 12 de enero para ser atendido medicamente en Estados Unidos, no se han concretado avances significativos en el proceso de negociación, informa el gremio magisterial.

Por tercera ocasión durante la semana, vecinos del pueblo de Xoco, en el Distrito Federal, se manifiestan para exigir la suspensión del proyecto Ciudad Progresiva, el cual incluye una serie de grandes edificios, entre ellos una torre de 60 niveles, anunciada como la más alta de América Latina. Alrededor de las 8 de la mañana y durante casi dos horas, medio centenar de personas bloquean las avenidas Real de Mayorazgo, Puente de Xoco y Churubusco, que colindan con la obra, portando pancartas con leyendas como “No más violaciones a la ley” y “Respeto al uso del suelo”. Durante la protesta no se registran incidentes, aunque los manifestantes se quejan de que las autoridades, lejos de buscar negociar con ellos, pretenden dividir a los vecinos, pues no han recibido una propuesta seria de diálogo. Ante esto, señalan, prepararán un plan de acción para que las autoridades y la constructora se comprometan a reparar los daños que, aseguran, la obra ha provocado a la iglesia del pueblo y en las casas colindantes a la misma.

Sábado 3

Dado que desde hace dos semanas está estancada la negociación entre el gobierno federal y el SME, la organización gremial inicia una nueva etapa de movilización y asegura que no se retirará de las inmediaciones de los edificios centrales de la CFE. Martín Esparza, secretario general del SME, subraya que la SEGOB actúa con doble discurso, porque “por un lado dice que el diálogo va bien cuando del acuerdo firmado con [el ex secretario] José Francisco Blake Mora, el 13 de septiembre pasado, el primer punto indica la reinstalación de los trabajadores no liquidados. No obstante, la última propuesta que hicieron fue que 500 trabajadores se reinstalaran en CFE y los demás se fueran de contratistas, lo cual no acepta nuestra asamblea”, afirma.

Un grupo aproximado de 600 pobladores de la comunidad de Cuautlalpan, en Texcoco, Estado de México, retiene a dos funcionarios del gobierno estatal para exigir una reunión con el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, y que se resuelva su denuncia sobre el fraccionamiento ilegal de un predio de su poblado que realizó la organización priísta AC. La gente que retiene a los burócratas es la misma que desde el pasado 23 de enero mantiene tomada la presidencia municipal de Texcoco, en demanda de que las autoridades paren la lotificación de 2 mil 200 predios en el paraje Pimiango.

Cientos de profesores, alumnos y padres de familia acuden a la primera clase por la defensa de la educación pública y la democracia sindical, convocada por el magisterio democrático de la sección 9 del SNTE, como parte de una jornada nacional en contra de la ACE y de la evaluación universal. En decenas de carpas instaladas en la plancha del Zócalo capitalino, profesores de primaria y preescolar ofrecen clases de matemáticas, teatro, danza, manualidades y actividades lúdicas para cientos de niños que acuden con sus padres, quienes participan en la conferencia sobre educación pública y privatización dictada por César Navarro, investigador del Instituto Mora, y Manuel Pérez Rocha, ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Domingo 4

El director regional de Gobierno estatal en Texcoco, Édgar Reveles Andrade, y el coordinador de concertación política de la Subsecretaría General de Gobierno mexiquense, José Luis Bárcenas Trejo, son liberados ilesos luego de permanecer retenidos más de 6 horas por pobladores de la comunidad Cuautlalpan. Por la madrugada, los inconformes formaron una valla y acompañaron a los funcionarios –quienes estaban en la delegación municipal de la comunidad– a la salida del poblado, sin que la policía interviniera. Los más de 600 pobladores reunidos en la plaza principal de Cuautlalpan aceptaron liberar a los funcionarios a cambio de que éstos atiendan sus demandas. Los inconformes mantienen tomada la alcaldía de Texcoco desde el 23 de enero.

Unas cien personas se reúnen en el atrio de la catedral de Mérida, Yucatán, para recordar la agresión que grupos de choque identificados con el PRI perpetraron el 4 de julio de 2011 contra opositores a la construcción de un paso vial subterráneo en el Paseo de Montejo. Catedráticos de la Universidad Autónoma de Yucatán, estudiantes, políticos y empresarios que en esa ocasión fueron atacados exigen castigo a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, autora intelectual de la agresión, y a la entonces alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara –actual candidata del PRI a senadora–, a quien acusan de ordenar la golpiza.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC), junto con indígenas de varias entidades de México, presentará ante al Tribunal Permanente de los Pueblos un recurso de inconformidad y rechazo a la explotación de minas en territorios comunitarios, anuncia Valentín Hernández, asesor jurídico de la corporación. De igual manera, da a conocer que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, se presiona a comisarios municipales y de bienes comunales de poblados ubicados en la Montaña y la Costa Chica para que acepten la presencia de empresas mineras extranjeras que pretenden explotar yacimientos de oro, plata y zinc.

Integrantes del movimiento Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco, en el Distrito Federal, formalizan en la 40ª agencia del Ministerio Público la denuncia penal en contra del personal de seguridad privada de la empresa Arena Ciudad de México y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Queda registrada con el código FAZ/AZ-1/T1/270/12-02. Luego de las agresiones de los guardias privados –al servicio de Grupo Salinas– y de la omisión de policías auxiliares, que presenciaron los hechos y no intervinieron, los opositores al centro de espectáculos exigieron deslindar responsabilidades. En la denuncia señalan que cuentan con videos y fotografías del momento cuando sale el grupo de 60 hombres que custodiaba la Arena Ciudad de México, ataca a los manifestantes y “con lujo de violencia” los despoja de las mantas y agrede a las mujeres.

Alrededor de 30 policías municipales del municipio de Salvador Escalante, Michoacán, abandonan sus labores por estar presuntamente involucrados en la desaparición del comunero Gerardo Cruz García. Hasta el momento se desconoce el paradero de los 30 agentes, entre ellos el director,

Manuel Eliseo Duarte Monroy. La policía ministerial investiga a los uniformados, ya que el comunero Cruz García fue detenido el pasado 22 de febrero por violación. Salió del penal de Pátzcuaro dos días después, tras pagar una multa de 50 mil pesos, y luego ya no se le ha vuelto a ver. Indígenas de localidades cercanas a Salvador Escalante se movilizaron e incluso toman carreteras para exigir que Gerardo Cruz sea entregado con vida. El viernes anterior liberaron a 13 policías que fueron retenidos tres días, en demanda de que se busque a Cruz García. Fueron entregados a las autoridades para que los sometan a investigación.

Lunes 5

Alumnos adheridos a la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca se apoderan de al menos 48 autobuses urbanos y bloquean más de cinco horas avenidas y cruceros de la ciudad de Oaxaca para exigir al gobierno estatal que atienda su pliego petitorio. Entre sus principales demandas están la ampliación de la matrícula, la entrega de becas y la contratación automática al egresar, así como la cancelación de la ACE. Alrededor de las 8 a.m., unos 3 mil 500 estudiantes de 11 normales de la entidad cierran la circulación en avenida Héroes de Chapultepec y sus intersecciones con calles que comunican con el norte de la capital oaxaqueña.

Unos 600 estudiantes acompañados por académicos e investigadores universitarios bloquean el centro histórico de la ciudad de Jalapa, Veracruz, para exigir la localización con vida de tres jóvenes que desaparecieron el pasado fin de semana en esta ciudad. Cuatro horas después de la protesta, la vocera gubernamental, María Gina Domínguez, informa que uno de los desaparecidos, Mikhele Jalil Jiménez, fue localizado en buen estado de salud y que estaba sano, salvo y con su familia. Mikhele Jalil es hijo de Pedro Jiménez Lara, académico del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, por lo cual la comunidad universitaria se suma a la protesta.

Campesinos provenientes de los municipios de Chilapa, Tixtla, Zumpango, Copalillo y Chilpancingo, en Guerrero, exigen, en la capital del estado, la entrega de fertilizantes. Asimismo, unos 30 ex burócratas despedidos por el ayuntamiento de Tecoman exigen al gobierno estatal que les pague un laudo favorable por 32 millones de pesos que ganaron al municipio. Además, decenas de colonos de Acapulco arriban a Casa Guerrero, residencia oficial del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y queman tarjetas “La Cumplidora”, distribuidas cuando este día el mandatario estaba en campaña, con la promesa de entregar apoyos al portador. En tanto, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Guerrero, Fernando Hinterholzer Diestel, asegura que al menos 200 empresas cerraron y que se perdieron alrededor de mil 500 empleos en Acapulco y Zihuatanejo, debido a la violencia y a la baja afluencia turística en la costa guerrerense.

El jefe del Comité para la Protección de Periodistas en América, Carlos Lauría, exige al presidente Felipe Calderón Hinojosa y a los senadores descongelar la iniciativa que propone pasar al fuero federal las agresiones contra los periodistas, y demanda también a los virtuales candidatos presidenciales y a los partidos políticos incluir en su agenda electoral el tema de los comunicadores. Señala que “el Ejecutivo federal fracasó en su objetivo de brindar seguridad en el ejercicio periodístico, pues la Fiscalía Especial para la Prevención de Crímenes contra la Libertad de Expresión no tiene suficiente estructura, y la manera en que trabaja no es la adecuada para impartir justicia”. Está claro –insiste– que el gobierno de Calderón ha fracasado. Sabe, es consciente de lo que ocurre, pero la respuesta ha sido tan ineficaz como ineficiente.

Martes 6

Agentes antimotines de la policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, desalojan este martes a vecinos de la colonia Lomas de San Javier que bloqueaban una arteria de esa demarcación conurbada a la capital del estado, en inmediaciones de su cuartel general, para exigir obras sociales. Los inconformes, encabezados por el ex director jurídico de la Secretaría General de Gobierno estatal, Mario Emilio Zárate Vásquez, cierran durante casi dos horas la carretera que lleva al municipio aledaño de Cuilapan de Guerrero, en el cruce de las avenidas Porfirio Díaz y Morelos, una de las principales vías que comunican a las agencias municipales y a las colonias. En respuesta, los policías realizan un operativo para liberar la arteria vial y detienen a siete inconformes, entre ellos Zárate Vásquez. En la acción, los policías golpean y rocían en la cara con gas lacrimógeno a cinco reporteros y fotógrafos que cubrían la protesta, entre ellos el corresponsal gráfico del diario *La Jornada*, Jorge Arturo Pérez Alfonso. El reportero del diario *El Imparcial*, Alejandro Villafañe Tepox, es atendido por una ambulancia de la Cruz Roja e internado en un hospital por lesiones en la cabeza.

Campesinos del noroeste del estado de Chihuahua impiden la salida de unos 30 funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los hoteles en los que pernoctan en el municipio de Nuevo Casas Grandes, para evitar que clausuren pozos agrícolas en la localidad, obligándolos a permanecer en sus habitaciones hasta las 15 horas.

Alrededor de 250 comerciantes y prestadores de servicios turísticos de distintas playas del puerto de Acapulco, Guerrero, marchan por una de las aceras de la avenida costera Miguel Alemán para exigir a las autoridades que protejan a los ciudadanos. Alrededor de las 9:30 a.m., los manifestantes, la mayoría vestidos de blanco y con letreros que decían “Unidos por Acapulco”, parten de la glorieta de la Diana rumbo al zócalo de esta ciudad, donde realizan un mitin. Los prestadores de servicios turísticos de Puerto Marqués, Pie de la Cuesta y Caleta, entre otras playas, demandan al gobierno reforzar los programas de promoción turística e incluir a todos los sectores del comercio. Subrayan que la actividad económica se encuentra prácticamente paralizada de lunes a jueves y que la única esperanza de supervivencia son los fines de semana.

Miércoles 7

Padres de familia de los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tecámac y Naucalpan, en el Estado de México, cuyas hijas se encuentran desaparecidas, exigen a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dar con el paradero de las muchachas. Acusan a la procuraduría de negligencia en la integración de las averiguaciones previas, de extraviar expedientes y de tardar más de un año en dar a conocer algún avance en las indagatorias, además de humillar y discriminar a los denunciantes por su condición social o por tratarse de mujeres. Acusan a los funcionarios de la misma de “corruptos, insolentes y misóginos”, y subrayan que la aprehensión, fuga y recaptura del feminicida serial confeso César Armando Librado Legorreta, alias “El Coqueto”, hizo evidentes las irregularidades con que opera la dependencia. Respaldadas por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, presidida por Teresa Ulloa, seis madres de familia exigen a la dependencia hallar a sus hijas y esclarecer los feminicidios cometidos en la entidad.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México exige cesar el acoso laboral y los despidos injustificados por la rectoría. Demanda, también, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, investigar el allanamiento del domicilio de María Auxilio Heredia Anaya –ocurrido el pasado 28 de enero–, profesora e investigadora de esa

casa de estudios y secretaria general de aquella organización gremial, así como aplicar medidas de protección hacia la víctima para garantizar su integridad y seguridad.

Productores de frutas del municipio de Salvar Escalante y de Ario de Rosales, en el estado de Michoacán, denuncian las extorsiones, el cobro de cuotas, los secuestros, las desapariciones y los homicidios a que los somete la delincuencia organizada. “El año pasado nos cobraban mil pesos por hectárea de aguacate y este año nos subieron la cuota a 2 mil pesos”, asegura un ejidatario, que exige a los gobiernos federal y estatal combatir a estas bandas delictivas. En un plantón a las afueras de Santa Clara del Cobre, en la desviación a Zirahuén, representantes de comuneros y ejidatarios de unos 30 poblados de ambos municipios manifiestan que “los delincuentes también imponen cuotas a comerciantes, artesanos y campesinos, y no hay quien resuelva esta situación. Por eso nos sumamos al movimiento de quienes exigen que aparezca Gustavo Cruz García vivo o muerto”. Los inconformes amenazan con bloquear la carretera federal a Pátzcuaro y, si es necesario, ocupar la autopista a Uruapan.

Luego de haber recurrido sin éxito a todas las instancias de la justicia en el país, un grupo de 11 mujeres de San Salvador Atenco, Estado de México, agredidas sexualmente el 3 y 4 de mayo de 2006 por integrantes de la Policía Federal Preventiva, anuncian que iniciarán una batalla legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demostrar la culpabilidad del Estado mexicano y acceder a la justicia.

Jueves 8

Mujeres, integrantes del SME y familiares de los trabajadores de la extinta compañía estatal LFC protestan en la sede del PAN luego de realizar una protesta contra Josefina Vázquez Mota, virtual candidata del *blanquiazul* a la presidencia de la República, quien, afirman las manifestantes, “no las representa como integrantes del género femenino”. Las manifestantes arriban a la sede panista desde las ocho de la mañana y permanecen en la avenida Coyoacán sin entorpecer el tránsito vehicular. La mayoría porta cartulinas en las que se pedía “Ni un voto al PRI-AN” y “Di no a la Mota”.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer se realizan varias manifestaciones y protestas en el país. En Ciudad Juárez, Chihuahua, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, madres de mujeres desaparecidas o asesinadas se plantan frente a la sede de la fiscalía estatal, donde exigen que los casos no queden impunes. Demandan al gobierno investigar los 115 expedientes de mujeres desaparecidas en Juárez de 1995 a la fecha, la mayoría en la zona centro de esa localidad fronteriza, donde este año se han perpetrado al menos 21 feminicidios. En Monterrey, Nuevo León, miembros de agrupaciones feministas marchan de la plaza Zaragoza a la plaza La Purísima para exigir respeto a los derechos de las mujeres, igualdad de oportunidades de empleo e impulso a una cultura de equidad laboral, acceso a educación básica y estancias infantiles públicas. En Veracruz, un grupo de mujeres campesinas inicia una huelga de hambre frente al palacio municipal de la ciudad de Córdoba para exigir que el gobierno ordene a diversas dependencias cumplir las minutas firmadas con la Asociación Veracruzana de Mujeres Insurgentes para la entrega de lotes para vivienda y acceso a programas sociales. En la capital de ese mismo estado, Jalapa, madres solteras del poblado Las Trancas, en los límites con el municipio de Emiliano Zapata, protestan frente al congreso local en demanda de becas, microcréditos y apoyo a proyectos productivos.

Familiares de víctimas de feminicidios y activistas que protestan ante el palacio de gobierno del Estado de México para exigir a la autoridad que cumpla sus funciones de proveer de seguridad a la población. Las manifestantes sostienen que 54% de los presuntos feminicidios se concentran en 10

municipios: Ecatepec, con 118 casos, Nezahualcóyolt (78), Tlalnepantla (53), Toluca (45), Chimalhuacán (42), Naucalpan (40), Tultitlán (35), Ixtapaluca (31), Valle de Chalco (30) y Cuautitlán Izcalli (25). La mayoría de las víctimas tenía entre 11 y 30 años. Indican que mientras las autoridades mexiquenses sólo reconocen 56 feminicidios en 2011, ciertas organizaciones no gubernamentales contabilizaron 282, y detectaron que en el 73% de los casos las víctimas perecieron por uso excesivo de la fuerza. Mientras, estudiantes de la Preparatoria Oficial 128, en el municipio de Ecatepec, e integrantes del Movimiento Social Mexiquense se manifiestan frente a la representación del gobierno del Estado de México en el Distrito Federal en repudio a los *feminicidios* perpetrados en la entidad de 2005 a agosto de 2010, y en demanda de políticas públicas que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres.

Viernes 9

El SME informa que los 11 integrantes del gremio que fueron detenidos el jueves pasado por bloquear la entrada a la CFE fueron liberados durante la madrugada. Agregan que el martes próximo se reanudarán las negociaciones con la SEGOB. El secretario del exterior del gremio, Humberto Montes de Oca, afirma que “no había delito qué perseguir, ya que no estaban obstruyendo el acceso a la comisión. Eso se puede demostrar con fotografías y videos. No estaban impidiendo el libre tránsito de quienes realizan trámites en la paraestatal. Fue un acto arbitrario, pues se estaban manifestando de manera pacífica”.

Estudiantes y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León protestan, en la ciudad de Monterrey, por el asesinato de su compañero José Fidencio Garza Neri, alumno del décimo semestre de la carrera de sociología, quien fue asesinado por presuntos criminales cuando realizaba “pintas” contra la violencia que se vive en la entidad, como parte de su servicio social en el Instituto de la Juventud de San Nicolás de los Garza. El joven –quien se hacía llamar Suri Nandu en su página de *Facebook*, donde amigos y conocidos han dejado mensajes en su muro para externar sus condolencias–, murió la noche del miércoles en un hospital, al cual fue trasladado luego de que un sujeto que descendió de un taxi le disparó con un arma de fuego en dos ocasiones.

Cinco militantes de la Central de Organizaciones Campesinas Populares inician una huelga de hambre por tiempo indefinido frente al congreso local, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir la liberación de diez compañeros detenidos en 2010 acusados de varios delitos, informa Guillermo Hernández Pérez, uno de los dirigentes de la agrupación. Anuncia que el indígena tzotzil Elías Díaz Díaz, que participa en la protesta, se cosió los labios esta tarde “porque las autoridades se niegan a escuchar nuestras peticiones”.

Maestros jubilados del estado protestan frente a la sede del Poder Judicial Federal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para exigir que se agilicen los juicios de amparo que promovieron desde hace varios años para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) les liquide los 40 días de aguinaldo que, entre otras prestaciones, ha dejado de pagarles al pasar a retiro. El abogado Mario Amaya, quien asesora a los mentores, afirma que a fin de terminar con el trato injusto e ilegal para los trabajadores del Estado, promoverán juicios a escala nacional, por la “inconstitucionalidad del artículo 57 de la Ley del ISSSTE, porque es confuso”.

Sábado 10

Sindicalistas de diversas regiones del país expresan la necesidad de que ante la crisis originada por el sistema neoliberal se conforme una central nacional de trabajadores que luche por la reivindicación de los derechos de este sector, los cuales se encuentran amenazados por la intención de reformar la Ley Federal del Trabajo, el *outsourcing* –tercerización– y la precarización de los salarios, entre otras circunstancias. Reunidos en la Universidad Obrera de México, los sindicalistas repudian que “se quiera pasar la factura del desplome del sistema actual del mercado a los trabajadores, a través de la disminución de sus sueldos, prestaciones y la estabilidad en el empleo”. El sociólogo Pablo González Casanova, primer orador en el foro denominado “Ante el desastre nacional ¿es necesaria una nueva central de los trabajadores?”, plantea que por causa de la crisis es necesario rescatar las grandes luchas de los pueblos, de los trabajadores y de los excluidos. Martín Esparza Flores, dirigente del SME, señala que “urge dar impulso a la solidaridad entre gremios y trabajadores no organizados para enfrentar la ofensiva de gobierno y empresarios en contra de la clase trabajadora, pues tenemos que estar mejor preparados para defender nuestros derechos y frenar la reforma laboral”. Por su parte, Juan Melchor, de la sección 18 del SNTE, Michoacán, señala que “hoy más que nunca se requiere el triunfo de los trabajadores”, y concluye: “estamos convencidos de que necesitamos una central para luchar por los derechos perdidos”.

Comunidades de la organización Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica, adherentes de *la otra campaña* en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua, en Chiapas, denuncian hostigamientos y agresiones de la CFE, en combinación con prácticas de manipulación política en favor del Partido Verde Ecologista de México y trasunto, o prestanombres, del PRI en la zona norte del estado. Las comunidades denuncian “las formas silenciosas de violencia de Estado y de propagación del miedo para controlar y contener nuestras legítimas formas de resistencia. Ejemplo de estos métodos son la educación y la cultura oficial, los medios masivos de comunicación y otras expresiones afines a la violencia sicológica”.

En los primeros minutos del día, integrantes del SME levantan el plantón que sostuvieron frente a las instalaciones de la CFE, en la colonia Cuauhtémoc del Distrito Federal, desde el pasado 28 de febrero. El secretario del exterior del SME, Humberto Montes de Oca, informa que “esta decisión se tomó después de que se acordó con la SEGOB reanudar el diálogo para lograr un acuerdo que solucione la situación de los 16 mil 599 trabajadores que aún no han aceptado su liquidación”.

Al cumplirse cien días de que comuneros nahuas de Tetelpa se plantaran en el cerro La Tortuga, en el estado de Morelos, en demanda de que la empresa Casas Geo cancele la construcción de 750 viviendas en 10 hectáreas, los manifestantes denuncian que los trabajadores de esta empresa derriban árboles en la noche, sin esperar la resolución de un amparo que interpusieron ante juzgados federales para que confirmen que esos terrenos son comunales y no están en venta y menos para construir casas. Noé Castillo Torres afirma que el alcalde priísta José Carmen Cabrera no ha dado respuesta a su demanda de revocar las licencias de construcción que otorgó a dicha empresa inmobiliaria.

Domingo 11

Andrés Manuel López Obrador rinde protesta como candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano –antes Convergencia– y parafrasea al presidente Benito Juárez al asegurar que “el triunfo de la derecha, de los conservadores, hoy día es moralmente imposible. Lo más importante es unirnos todos los mexicanos para salvar a México”. En el teatro *Metropolitan*, en la Ciudad de México, reitera su llamado a la reconciliación. “Actuamos como pensamos, no tenemos doble

moral, doble discurso. Es sincero nuestro llamado. Nosotros no odiamos a nadie, no queremos venganza, sino justicia”, manifiesta. Además, convoca a trabajar para convencer a quienes todavía no deciden cómo van a sufragar en julio, cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales. López Obrador asegura que, como pocas veces en la historia del país, las elecciones del 1º de julio próximo serán decisivas. “Los mexicanos vamos a elegir entre cuatro candidatos —él, Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri—, pero en realidad habrá que definirse entre dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Se tendrá que decidir si queremos más de lo mismo, lo que encarnan y representan los otros tres candidatos, o si se toma el camino del cambio verdadero que proponemos como alternativa ante la terrible y dolorosa crisis de México”.

Por su parte, Josefina Vázquez Mota también rinde protesta como candidata del PAN a la presidencia de la República, en el Estadio Azul, en la Ciudad de México, donde se compromete a trabajar para construir un México mejor y, frente a los conflictos internos de su partido, hace un llamado a la unidad y a resolver las diferencias con apego irrestricto a la democracia. Poco después de la una de la tarde, cuando la aspirante presidencial apenas tomaba el micrófono e iniciaba su característico ir y venir por el escenario, en las gradas se veían ríos de gente que, exhausta por la larga espera bajo el sol del mediodía, caminaba en largas hileras hacia las salidas del inmueble. En su discurso, destaca que por primera vez en más de 70 años del PAN, hay una mujer candidata a la presidencia. Considera que Acción Nacional ha cambiado el rostro de México en los pasados 12 años y, como muestra, señala que “no hay un presidencialismo exacerbado, sino equilibrio de poderes: no existe simulación, sino enfrentamiento al crimen organizado”. Con todo, reconoce que hay deudas pendientes por saldar.

Un grupo de unos cien habitantes de Cuautlalpan que desde el 23 de enero mantienen ocupado el palacio municipal de Texcoco, Estado de México, encabezados por el delegado Manuel Rodríguez acuden al auditorio ejidal de Atenco para pedir el apoyo de los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y acuerdan realizar acciones conjuntas contra el fraccionamiento ilegal que realizan integrantes de la organización priísta AC en un predio de 38 hectáreas localizado en esta última comunidad. Los dirigentes del frente Ignacio del Valle Medina y Jesús Adán Espinoza señalan que apoyarán al pueblo de Cuautlalpan en su defensa de la tierra y contra la intromisión de aquella.

La dirigencia estudiantil de la normal rural de Ayotzinapa anuncia que esperará el dictamen de la CNDH respecto al desalojo policiaco de estudiantes del pasado 12 de diciembre, donde fallecieron Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, para que a partir de los resultados se impulse un plan de acción. Pablo Juárez Cruz, vocero estudiantil, asegura que será en esta semana cuando se dé a conocer el dictamen final y reconoce que hay incertidumbre porque “extraoficialmente se supo que había órdenes de aprehensión contra varios normalistas de Ayotzinapa”.

La Red por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Negro de México exige al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que incluya a este sector en el Censo Nacional de Población y Vivienda. El coordinador de la organización, Israel Reyes Larrea, precisa que la red y el Programa Universitario México Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicaron una encuesta en 22 localidades de la Costa Chica de Oaxaca, y que el 99% de los interrogados dijeron estar a favor de que el instituto los incluya en sus estadísticas.

Lunes 12

Un grupo de intelectuales, académicos y artistas, entre ellos Pablo González Casanova, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López; el escritor Javier Sicilia, los sacerdotes Gonzalo Ituarte y Miguel Concha, la investigadora Magdalena Gómez, los actores Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, el activista Miguel Álvarez y el antropólogo Gilberto López y Rivas, entre otros, convocan, mediante una proclama, a que la ciudadanía participe en la resolución de las problemáticas nacionales, más allá del proceso electoral de 2012. El objetivo del documento presentado es realizar un esfuerzo de unidad en medio de la veda electoral para impulsar acciones al margen de los partidos políticos y de los candidatos a fin de que la sociedad sea impulsora de la transformación nacional. Agregan que la iniciativa es suscrita por más de cien personas y organizaciones de 26 estados, como el Movimiento de Liberación Nacional, el SME, el CNTE y otros.

Con el respaldo de más de 60 centros, comités y comisiones independientes de derechos humanos de todo el país, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” y los familiares del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez exigen la liberación inmediata de quien es quizá el más importante preso de conciencia en el país. Informan también que el pasado 29 de febrero, Patishtán ganó un amparo para ser retornado a San Cristóbal de las Casas. Denuncian que el gobierno de Chiapas es responsable del castigo que padece el docente y activista indígena, quien tras 11 años en prisiones estatales, purgando una condena de 60 años, fue enviado punitivamente al distante penal federal de Guasave, Sinaloa, esto durante una huelga de hambre de presos de *la otra campaña* en tres cárceles chiapanecas, de la cual era vocero. Los organismos sostienen que las autoridades estatales pretendían enviarlo a las islas Marías.

Estudiantes de derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, exigen aclarar el asesinato de uno de sus compañeros, cometido la semana pasada, y la presentación con vida de Christian Fernando Castañeda, egresado de la carrera de odontología desaparecido en el municipio de Villa López, donde prestaba su servicio social. En silencio, vestidos de blanco y portando veladoras, decenas de alumnos realizaron un homenaje en la universidad al estudiante Pedro Ortiz Hurtado, ultimado a balazos cuando salía de un negocio. En un comunicado, la comunidad estudiantil de derecho de la misma señala que el objeto de esta manifestación es “mostrar unidad y solidarizarse con la familia de Pedro, ciudadano recto, buen alumno, hijo y compañero”.

Estudiantes de las ocho normales de Michoacán toman las casetas de cobro en las autopistas Occidente y Siglo 21, y retienen vehículos de diversas empresas en Tiripetío, Morelia, para demandar audiencia con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la publicación de la convocatoria para alumnos de primer ingreso, así como acceso automático a plazas de maestros. Los manifestantes se oponen a que el gobierno estatal reduzca la matrícula y el presupuesto a las escuelas normales. Mientras, representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero advierten que el Pacto Social por la Educación, firmado el 29 de febrero por el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario general de la sección 14 del SNTE, Emiliano Díaz Román, pone en riesgo las plazas de los profesores una vez que se jubilen, y no garantiza que los 100 millones de pesos anunciados como fondo de retiro sean entregados o alcancen para los 88 mil 500 trabajadores de la educación en el estado.

Docentes de 15 planteles del Colegio Nacional para la Educación Técnica Profesional en Sinaloa inician un paro en protesta por la contratación de personal ajeno a la institución y por el desplazamiento de sindicalizados en el otorgamiento de plazas. El secretario general del sindicato del colegio en Culiacán, Roberto Corrales, informa que el paro indefinido se inicia a las 10 horas y acusa su director, Ramón Lucas Lizárraga, de no atender sus exigencias.

Miembros de la comunidad lésbica, gay, transexual, transgénero e intersexo, activistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos en general rinden un homenaje póstumo, en la ciudad de Puebla, a la activista transgénero Agnes Torres Hernández, quien fue asesinada el pasado fin de semana. Exigen a las autoridades que se esclarezca el crimen y se promulguen leyes que garanticen los derechos de identidad para homosexuales. Los manifestantes presentan un pliego petitorio de 10 puntos, con el cual exigen respeto a su orientación sexual y a sus garantías individuales, y marchan hacia Casa Aguayo, sede de la secretaría general de Gobierno, donde el subsecretario Mario Rincón les informa que las indagatorias sobre los tres homicidios ya estaban en curso.

Martes 13

La mesa de negociaciones entre el gobierno de Guerrero y la Comisión Civil de Interlocución, en el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa, acuerda indemnizar a los familiares de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, muertos durante el desalojo de la Autopista del Sol el 12 de diciembre pasado por agentes de la Policía Ministerial de Guerrero y de la Policía Federal. Arturo Miranda Ramírez, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y único integrante del estado en la comisión, asegura que “el compromiso es que se va a reparar el daño con criterios internacionales, relativos a los dos casos de los estudiantes muertos”, sin especificar monto alguno.

Tres familias del poblado de San Mateo Huitzilzingo presentan una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por la detención de 22 habitantes, quienes enfrentan proceso vinculatorios por el linchamiento de tres jóvenes albañiles cometido el 10 de febrero. Gregorio Duarte, visitador general en Chalco, explica que los denunciantes argumentan que sus familiares no participaron en el triple asesinato. Detalla que la CODHEM trabaja de forma paralela en las tres quejas que se presentaron por separado y la que el organismo inició de oficio el 14 de febrero.

En respuesta a la demanda de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República presenta al pleno la iniciativa de ley que crea el mecanismo de protección a activistas y comunicadores.

Miércoles 14

Cientos de integrantes del Foro Cívico “México Laico”, República Laica, Católicas por el Derecho a Decidir y fieles de varias iglesias, entre ellas La Luz del Mundo, se plantan afuera del nuevo edificio del senado para exigir a los legisladores no aprobar los cambios a la Carta Magna relacionados con el artículo 24 constitucional. Los inconformes se instalan en las calles Paseo de la Reforma, París, Madrid e Insurgentes, cercando la sede senatorial con pancartas en las que se leía “El respeto al Estado laico es la paz”, “Como buitres, el clero ambiciona poder y dinero; no tiene llenadero”, “Si Juárez viviera con nosotros estuviera” y “Cada retroceso del Estado laico es un avance del Estado confesional”.

Organizaciones campesinas, sindicales y de derechos humanos anuncian la realización de la marcha-caminata denominada “Por la libertad, la justicia y el desarrollo”, la cual partirá de Chiapas el próximo 19 de marzo y arribará a la ciudad de México el 10 de abril, para exigir la liberación de presos políticos en la entidad, entre ellos Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Eric Bautista, vocero del Movimiento Campesino Regional Independiente, y el profesor Alberto Patishtan. En la movilización participarán inicialmente 400

campesinos y se espera que en el camino se sumen simpatizantes. Entre las organizaciones convocantes están el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, la Unión Nacional de Trabajadores y miembros del sindicato de la UNAM, entre otros.

Los más de 70 mil integrantes de la sección 22 del SNTE, con sede en Oaxaca, inician un paro de labores de tres días y marchan por la capital del estado en demanda de la presentación con vida de su compañero Carlos René Román Salazar, desaparecido el 14 de marzo de 2011. Respaldados por alumnos de las once escuelas normales y organizaciones sociales adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, parten de la agencia municipal Trinidad de Viguera, recorren parte de la carretera internacional Cristóbal Colón y llegan al palacio de gobierno. A la vanguardia avanza la comisión política, encabezada por el secretario general de la sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, y Marisol Ricárdez, pareja del profesor desaparecido, en un mitin. Santiago Chepi demanda a los gobiernos federal y estatal celeridad en las investigaciones sobre la desaparición. También exige castigo para los autores intelectuales y materiales del crimen del también profesor Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, ex secretario de Organización.

Habitantes de Capacuaro, Michoacán, retienen a cuatro soldados, cuatro policías federales y cinco de la policía ministerial, además de a un agente del Ministerio Público y a dos patrullas de la corporación federal y una camioneta de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El conflicto comenzó casi a las 3 p.m., cuando elementos de la Base de Operaciones Mixtas –integrada por fuerzas federales, estatales y militares– interceptaron a los ocupantes de dos camionetas de doble rodada, cargadas de madera en rollo, en la carretera Paracho - Uruapan. Posteriormente, una unidad de soldados intentó hacer una revisión de rutina a un grupo de jóvenes que se encontraba en un automóvil a la entrada de Capacuaro. Sin embargo, los jóvenes escapan, lo que origina una persecución que incluye disparos de los militares. En busca de los muchachos, los policías entran a una primaria, apuntan con sus armas a alumnos y maestros y generan alarma y temor. Estos hechos movilizan a decenas de habitantes, quienes son convocados mediante el repique de campanas de la iglesia del pueblo y alcanzan a los policías y militares, a quienes retienen junto con sus unidades.

Policías estatales y federales permanecen en la periferia de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, a 20 kilómetros de Morelia, capital del estado de Michoacán, en espera de la orden para ingresar al plantel y recuperar los 23 autobuses que retienen los estudiantes desde el domingo pasado. En respuesta, al menos 300 alumnos colocan una pipa de diesel de 20 mil litros a la entrada de la institución y debajo de los autobuses retenidos colocan colchones rociados de gasolina para incendiarlos si entran los uniformados. Los normalistas demandan asignación automática de plazas a los egresados de las ocho escuelas de la entidad y aumento de la cantidad de becas y de la matrícula, que es mayor de 650 alumnos sólo en Tiripetío.

Decenas de ex braceros –trabajadores migrantes– toman simbólicamente las oficinas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, en Monterrey, Nuevo León, para reclamar al gobierno federal por el atraso en los pagos del Fondo de Apoyo Social. Los manifestantes afirman que están cerradas muchas de las cajas de ahorro incluidas en una lista que les dio la Secretaría de Gobernación para que cobren 38 mil pesos por los descuentos que se les realizaron cuando trabajaron en Estados Unidos, de 1942 a 1964.

Jueves 15

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organizaciones no Gubernamentales del Senado de la República, Rubén Camarillo (PAN), presenta en tribuna la iniciativa que expide la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que crea el mecanismo

encaminado a salvaguardar la integridad física de ese sector de la población. A la presentación acuden el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca; la directora del Centro Nacional de Comunicación Social, Brisa Maya Solís, y el director de Amnistía Internacional, Alberto Herrera, entre otros, quienes posteriormente, en conferencia de prensa, llaman a los legisladores a aprobar la iniciativa en ambas cámaras del congreso en este periodo de sesiones, y subrayan que la misma recoge las recomendaciones que organismos internacionales han girado a México.

Al vencer el plazo de la toma de nota al comité ejecutivo nacional del SNTE, encabezado por Elba Esther Gordillo, decenas de miles de maestros marchan sobre la avenida Reforma, la calzada Ignacio Zaragoza y Tlalpan, hacia el zócalo capitalino, para repudiar la evaluación universal y exigir la caída del cacicazgo de la maestra, quien se mantiene en el poder desde hace 23 años. Procedentes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Morelos, entre otros estados, y los de la capital del país, exigen al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conducirse con legalidad y cancelar la toma de nota, que vence hoy, a la cúpula “gordillista”. A su vez, demandaron una auditoría por el uso indebido de recursos que presuntamente ha hecho el grupo de la profesora.

Continúa por segundo día consecutivo el paro de labores magisterial en Oaxaca, Michoacán y Chiapas. En esta última entidad, autoridades educativas anuncian descuentos en las nóminas a los faltistas. De acuerdo con autoridades educativas estatales, 80% de las escuelas de educación básica de Michoacán se quedó sin clases hasta el martes por la movilización de los profesores en la ciudad de México. El subsecretario de Educación Federalizada en Chiapas, José Luis Echeverría Escobar, afirma que se aplicarán descuentos a los maestros que desde el miércoles iniciaron un paro de labores de 72 horas. Mientras, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación toman las instalaciones de la Secretaría de Educación en Morelia, Michoacán, como parte de sus acciones contra la evaluación universal y la ACE. De acuerdo con la secretaria, el 80% de los planteles de educación básica suspendió las clases hasta el martes.

Viernes 16

Miles de integrantes del SME realizan una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir de nuevo al gobierno federal que retome el diálogo de forma seria y resuelva el conflicto laboral ocasionado por la extinción de la paraestatal LFC. Luego de realizar una marcha por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo sin mayores contratiempos, los contingentes de la organización gremial entran a la Plaza de la Constitución a alrededor de las cinco de la tarde, donde reciben el apoyo de los maestros de la CNTE, quienes ya se encontraban ocupando el lugar con casas de campaña. Entre consignas de “Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN”, el mitin da inicio con la participación de diversos representantes sindicales que manifiestan su solidaridad con los electricistas, entre ellos los del IMSS, la UNAM, los telefonistas y el personal de tierra de Mexicana de Aviación.

El gobierno del estado de Michoacán se compromete a otorgar 950 plazas de trabajo a los egresados de las ocho escuelas normales del estado durante 2012, a publicar la convocatoria para los alumnos de nuevo ingreso y a mantener la misma matrícula en cada plantel, luego de lo cual los alumnos de la Normal de Tiripetío liberan los 28 autobuses que mantenían retenidos desde el domingo pasado en predios de la institución. El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, se encarga de entregar a los alumnos una carta compromiso firmada, donde se detallan esos tres puntos, lo que permite que a alrededor de las 3 p.m. salieran de las instalaciones de la escuela las primeras unidades con ocho de los conductores que aún permanecían retenidos. Dos horas después, las 10 líneas de autobuses que

el martes suspendieron actividades en protesta por la retención de sus unidades reanudan las labores desde la Central Camionera de Morelia.

La CNTE firma un oficio que incluye la promesa de la SEP de participar en un foro de análisis sobre la evaluación universal, a realizarse la próxima semana en el senado. La propuesta es calificada como limitada, según advierten los líderes de los profesores que desde el jueves se manifestaron en la ciudad de México. No obstante, aceptan suspender las marchas, plantones y bloqueos en la capital, por lo que se espera que en las primeras horas del sábado partan a sus lugares de origen. “Estamos convocando a un debate nacional sobre el modelo educativo que se necesita para México. Hoy nos llevamos una respuesta insuficiente y la promesa de que está abierto el diálogo en Gobernación, pero no está definida la situación. Estamos empeñados en la defensa de la educación pública”, afirma Gonzalo Juárez, líder de la sección 14 en Guerrero, quien además ofrece a los capitalinos disculpas por las molestias ocasionadas.

Sábado 17

La Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, con sede en el *caracol* de Oventic, denuncia el encarcelamiento injustificado de Francisco Sántiz López, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el municipio oficial de Tenejapa, acusado de un crimen ocurrido cuando él no se encontraba en el lugar de los hechos. El 4 de diciembre de 2011 fue detenido cuando atendía un puesto de frutas y verduras en la cabecera municipal de Tenejapa, acusado falsamente de dirigir una provocación donde fue muerto Pedro Méndez López, militante del PRI del ejido Banavil. La JBG exige la libertad inmediata e incondicional de su compañero Francisco Sántiz, y de Lorenzo López Girón, quienes este sábado cumplieron 104 días en prisión. “Se les ha ofrecido la libertad pagando 32 mil pesos por el homicidio y 40 mil por portación de arma cada uno. Ellos se niegan a pagar porque su encarcelamiento es injusto”. La JBG considera “insoportables, inaceptables e inhumanas las actitudes de los jueces, ministerio y malos gobiernos estatal y federal, tan acostumbrados, corrompidos y amañados de fabricar delitos y condenar a personas inocentes. Los ataques violentos y absurdos, concluye, son contra la autonomía de las comunidades y municipios zapatistas; su objetivo es impedir el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía y la libre determinación como pueblos originarios”.

Domingo 18

Compañeros, familiares y vecinos de Alberto Patishtán Gómez, preso desde el 19 de junio de 2000, reúnen a un millar de personas en la cabecera municipal de El Bosque para demandar el retorno a Chiapas y la liberación del profesor tzotzil, quien al momento de su detención era maestro normalista en esa región, ubicada al norte de los Altos. Al grupo de inconformes se suman campesinos y artesanos de varios parajes. Se elaboran escritos para buscar la sustitución del edil y se envían al ayuntamiento y a instancias de gobierno como la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Educación estatales.

Profesores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Coahuila, levantan la huelga que iniciaron el 17 de febrero, tras aceptar el ofrecimiento inicial de la rectoría de 3.8% de aumento salarial. El rector, Eladio Cornejo, dijo que 383 de los más de 500 trabajadores académicos aceptaron la oferta, que incluye un pago único de 4 mil pesos por concepto de ayuda a la economía familiar. Los huelguistas entregarán la casa de estudios formalmente este lunes y las clases se reanudarán en la segunda quincena de abril.

Lunes 19

Los 150 mil integrantes de la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México acuerdan abandonar las filas de la Confederación Nacional Campesina y denuncian a su dirigente, Gerardo Sánchez García, por utilizar a la organización como un trampolín político electoral. “Al frente de diversas uniones de productores está nombrando a gente que nunca ha trabajado en el campo”, aseguran. Al concluir la inauguración del diplomado Introducción al Alto Rendimiento en el Cultivo de Maíz, en el Colegio de Posgraduados, los delegados de los 22 estados que conforman la CNPMM sostienen que declararán su autonomía política si la dirección nacional del PRI no frena los abusos de Sánchez García. En asamblea, afirman que la designación de Noé Barrueto Barrón, como dirigente de la Unión Nacional de Productores de Maíz, ofende a los campesinos.

Residentes de Acoxta y otras organizaciones vecinales que habitan en la zona de Coapa, en la Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, protestan por la construcción de desarrollos inmobiliarios y la apertura de negocios que han autorizado los gobiernos de la delegación Tlalpan, pese a que se violan las normas de desarrollo urbano y uso de suelo. Manifiestan que se oponen a la edificación de 140 departamentos en la calle Tenorios 7, pues el uso de suelo no está permitido, pues sólo se autoriza el unifamiliar. También rechazan al hotel que se pretende instalar en Calzada del Hueso 637, colonia Rinconada de Coapa. En la zona han crecido el comercio y los conjuntos habitacionales, a pesar de los problemas de servicios públicos que ya enfrentan los vecinos.

Martes 20

El juzgado primero de distrito, en Chilpancingo, Guerrero, dicta un auto de formal prisión al ex procurador de Justicia estatal, Alberto López Rosas, por delitos contra la administración de justicia y encubrimiento durante el operativo policiaco del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol México - Acapulco, donde perdieron la vida Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Sin embargo, por no estar considerados delitos graves en esta entidad, resuelve que puede seguir el proceso judicial en libertad, además de notificar dicha resolución a la PGR.

Trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares realizan un simulacro general de huelga, cierran simbólicamente sus áreas de trabajo y marchan hasta aglutinarse en la entrada del organismo en protesta porque en la revisión contractual que llevan a cabo sólo les ofrecen 5% de incremento salarial a trabajadores de los niveles 1 al 18 y de 0% a los demás, aunque piden un 12%. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Manuel García Barajas, informa que se avanza lentamente en la revisión de las cláusulas propuestas, la mayoría enfocadas a mejorar el funcionamiento y la productividad del organismo.

La CIDH condena el asesinato de Agnes Torres Sulca, transgénero defensora de los derechos humanos de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales en México. La CIDH insta a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de la señora Torres fue cometido en razón de su identidad de género y/o en razón de su labor de defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI.

Aproximadamente 400 comerciantes de mercados públicos y tianguis protestan frente a la alcaldía y en calles de Querétaro porque el ayuntamiento autorizó la instalación de 20 minibodegas de la empresa Aurrerá –cinco ya abrieron– cerca de sus negocios, lo que constituye, según afirman, “una competencia desproporcionada”. Los manifestantes acuden a la legislatura local para demandar a

los diputados que se prohíba en la ley orgánica municipal la instalación de sucursales de pequeñas o grandes cadenas comerciales a menos de tres kilómetros de donde se ubican mercados o tianguis.

La sala de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia en Chilpancingo, Guerrero, dicta un auto de libertad por falta de pruebas al indígena Maximino García Catarino, líder de la Organización del Futuro del Pueblo Mixteco. El defensor de los derechos humanos del pueblo mixteco fue encarcelado el 21 de enero, acusado de homicidio, delito que no se probó que cometiera.

Un centenar de estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Baja California se manifiestan frente a la rectoría para exigir la restitución de Daniel Solorio, catedrático de tiempo completo de la Escuela de Derecho y ex candidato a rector. Con una experiencia de 37 años en la cátedra universitaria, Solorio, quien también es candidato suplente al senado por los partidos de izquierda, fue notificado el 13 de marzo de la rescisión de su contrato laboral por supuestas faltas a clases.

Unos 2 mil feligreses de distintas iglesias evangélicas del estado de Guerrero marchan al mediodía por las principales avenidas de Chilpancingo contra la violencia que azota a dicho estado y a todo el país. Los contingentes, la mayoría vestidos de blanco, exigen a los gobierno federal y estatal modificar el método para combatir la delincuencia organizada.

Miércoles 21

Habitantes de la cabecera municipal de Cherán dan a conocer que 11 comuneros de la localidad fueron secuestrados, e instalan retenes en los accesos al pueblo, así como en las salidas a Nahuatzen y Paracho, para exigir a las autoridades el rescate de sus compañeros, presuntamente retenidos por habitantes de las comunidades vecinas El Cerecito, Rancho Seco y Rancho Morelos. Por la mañana, en la cuenta de Facebook de Radio Fogata Cherán, se informa que el martes en la noche comuneros de esa comunidad purépecha se enfrentaron con talamontes originarios de poblados vecinos. En represalia contra las autoridades comunales por el enfrentamiento –que aparentemente no dejó víctimas–, las comunidades citadas habrían secuestrado a 11 comuneros.

El coordinador de la Pastoral de Migrantes de la Zona Sur del Golfo, Alejandro Solalinde Guerra, denuncia que no cesan los secuestros de migrantes que cruzan el país –desde Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos–, perpetrados por bandas del crimen organizado. Por ello, apremia a defender a los centroamericanos de las mafias conformadas por funcionarios, policías municipales, agentes federales y miembros de la delincuencia, para que no les arrebaten sus sueños ni violen sus derechos humanos. En una visita a la sede de Puebla de la Universidad Iberoamericana, el sacerdote informa que hace cuatro días unos mil 500 migrantes de Centroamérica tomaron los vagones del tren en la ciudad de Arriaga, Chiapas, para intentar cumplir con el llamado sueño americano.

Las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACH), en huelga desde el 10 de marzo en demanda de incremento salarial del 20 por ciento, y las autoridades universitarias, permanecen detenidas, lo que afecta a los trabajadores administrativos, a más de mil profesores y a 8 mil estudiantes. Ambas partes se reúnen por segunda ocasión en la JFCA, pero sus posturas resultan divergentes y no se llega a ningún acuerdo.

Al menos 200 concesionarios afiliados a la Alianza de Autotransportistas Autónomos bloquean durante cinco horas con 40 unidades los accesos a los paraderos de estación del Metro Cuatro Caminos, lo que deja varados a cientos de usuarios y conductores en arterias que comunican el

ponente del estado de México con el Distrito Federal. Juan Sánchez y Jaime Soberanes, representantes de la AAA, aseguran que con el bloqueo buscan presionar a la Secretaría del Transporte del Estado de México para que erradique la invasión de rutas y derroteros por integrantes de AC. El subsecretario del Transporte, Ricardo Lugo, y Aldo Manzo, delegado regional, atienden a una comisión de inconformes, a la cual prometen intensificar el retiro de unidades irregulares.

Integrantes de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos toman en forma simbólica la embajada de Canadá, ubicada en el Distrito Federal, para protestar por los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y de Bernardo Vásquez Sánchez, militantes de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes se oponían a las actividades de la minera canadiense-mexicana Cuzcatlán. Los activistas demandan que el gobierno mexicano retire las concesiones a las mineras que trabajan a cielo abierto, ya que este método de extracción contamina y agota las reservas de agua, además de que las mineras no generan beneficio económico real para las comunidades donde se asientan.

Jueves 22

Comuneros del poblado Cerecito, en el estado de Michoacán, liberan a los 11 ciudadanos de Cherán que retuvieron en represalia por haber detenido tres camionetas cargadas de madera que sustrajeron ilegalmente, según informa el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García. El funcionario afirma que representantes de ambas localidades aceptaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado cite a declarar a los responsables del rapto y, a cambio, se brinde atención médica a dos mujeres de Cerecito que resultaron lesionadas la noche del martes, cuando los comuneros de Cherán detuvieron las camionetas con madera. Gonzalo Reyes, del concejo comunal de Cherán, asegura que “están cansados de que sus vecinos, protegidos por la delincuencia organizada, continúen con el saqueo de sus bosques. Por eso les pedimos a los gobiernos federal y estatal que actúen. De lo contrario tendremos que hacernos justicia por nuestras propias manos”. Afirma estar preocupado porque, “a pesar del enfrentamiento contra talamontes ocurrido en abril pasado, el gobierno no frena el robo de madera y los bosques siguen siendo devastados en las regiones purépechas, lo que pronto causará una grave crisis ambiental, económica y social”, advierte.

Domingo Patishtán, Amalia Gómez, Pedro Gómez y Miguel Ángel Rodríguez, integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), se extraen sangre en Tuxtla Gutiérrez y escriben con ella la palabra “Libertad” junto al escudo del estado de Chiapas, en el palacio de gobierno, para exigir la excarcelación de 10 de sus compañeros, acusados de diversos delitos. El pasado 8 de marzo, más de 50 miembros de la COCYP se plantaron frente al congreso local y ocho iniciaron una huelga de hambre. La semana pasada cuatro se cosieron los labios y dos se ataron a una cruz durante varias horas.

Se informa que el cuerpo del activista totonaca Gilberto Gómez Simón, integrante del Movimiento Unidad Popular, fue encontrado con tres impactos de bala y semienterrado en un paraje rural de Papantla, en el norte del estado de Veracruz. El 16 de marzo se reportó su desaparición. Fuentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y el líder estatal de la organización, Enrique Pozos Tolentino, agregan que habitantes del poblado El Manantial hallaron el cadáver la mañana del miércoles en una fosa clandestina cerca de un arroyo, y que se confirmó su identidad.

Viernes 23

Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) se manifiestan frente a la sede del gobierno de Nuevo León en el Distrito Federal en demanda de que las autoridades estatales resuelvan 34 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a las que el colectivo que dirige Javier Sicilia ha dado seguimiento. El acto se realiza en forma simultánea a otro organizado en Monterrey, donde, en el contexto de las seis mesas que se realizan sobre el tema, Emilio Álvarez Icaza se reúne con el titular de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, a quien le demanda que avancen las indagatorias de dichas violaciones de derechos humanos. Entre consignas de “No más sangre” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, cerca del mediodía los activistas llenan la fachada de la sede con pancartas y pañuelos bordados en los que recuerdan múltiples desapariciones forzadas ocurridas en años recientes, y exigen que este crimen de lesa humanidad sea tipificado en los códigos penales de todos los estados.

Organizaciones de la sociedad civil, en Ciudad Juárez, Chihuahua, afirman que los gobiernos estatal y federal mienten sobre la existencia de pruebas contra Israel Arzate Meléndez, quien presuntamente fue torturado por elementos del Ejército para que confesara haber participado en la masacre de 15 personas –en su mayoría jóvenes– en Villas de Salvárcar, el 31 de enero de 2010. El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes acusan que el gobierno federal envía datos falsos a instancias internacionales. Ante la comprobada inocencia de Israel Arzate, el Estado debe disponer su inmediata liberación, demandan. Arzate lleva dos años detenido acusado de participar en la matanza, uno de ellos, arraigado.

La mayoría de los más de 2 mil integrantes del STUACH aceptan la tarde de este viernes un alza salarial de 3.8%, 2.6% en prestaciones y 32 mil pesos como bono de recuperación salarial, con lo que se prevé concluya la huelga que comenzaron el pasado 10 de marzo.

Sábado 24

Integrantes del SME forman una cruz humana en la plancha del Zócalo capitalino con el fin de llamar la atención del papa Benedicto XVI sobre el hecho de que 44 mil trabajadores fueron despedidos por el gobierno de Felipe Calderón y pedir su intervención para lograr una solución justa a esta problemática. El secretario del exterior del SME, José Humberto Montes de Oca, resalta que tras la extinción de LFC y el despido de los 44 mil empleados, “los que optaron por la liquidación y creyeron en las promesas de reinserción laboral no han logrado incorporarse al mercado de trabajo, debido a que los programas gubernamentales al respecto fueron un engaño y a que, debido a la injusta campaña publicitaria que orquestó el gobierno en su contra, los electricistas son objeto de discriminación”.

Pobladores del municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, exigen a la CONAGUA clausurar las descargas domiciliarias de tres fraccionamientos a canales de riego, debido a que contaminan las 125 hectáreas de sembradíos de forrajes. Explican que las unidades habitacionales Galaxia Cuautitlán, Encinos y San Diego y Quiero Casa desfogon sus residuos a sus tierras, donde cultivan alfalfa y avena, que se emplean como alimento de ganado.

El director regional de Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Francisco Jiménez, niega que la dependencia haya dado plazo de una semana para que los pobladores de San Gregorio, Ranchería Corozal y Salvador Allende, asentados desde

hace 30 años en la reserva de la Biosfera de Montes Azules, en el estado de Chiapas, abandonen la zona, como denunció la Asociación Rural de Interés Colectivo - Unión de Uniones Independiente y Democrática. “Ese plazo nunca existió. Estamos negociando, pues no se pueden quedar ahí, pero eso es porque lo estipula la legislación”, aclara.

Ante el desabasto de agua potable, vecinos de diversas colonias de la delegación Iztapalapa e Iztacalco, Distrito Federal, bloquean en tres diferentes puntos ciertas avenidas principales durante más de cinco horas, con lo que desquiciaron el tráfico en las zonas aledañas. En Iztapalapa, su titular, Clara Brugada Molina, asegura que la situación que se vive es insostenible, por lo que insistió en que la CONAGUA y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México garanticen el líquido suficiente para esta demarcación.

Domingo 25

La escasez de agua potable en los límites de las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac provoca hechos de violencia y confrontaciones vecinales. La falta del recurso se agudizó después del sismo del pasado martes 20 de marzo, pues la zona ya tenía varios días con reportes por la carencia del líquido. Habitantes de la colonia Ermita Zaragoza señalan que cuando una pipa cruzaba el puente Amador Salazar, un sujeto la interceptó en un semáforo e intentó desviarla, amenazando al conductor con una pistola. Al detenerse en un semáforo, un sujeto amaga con una pistola al chofer, pero un grupo de vecinos se percata de los hechos y da aviso a las autoridades. Ante la resistencia del conductor, el hombre acciona el arma y dispara en tres ocasiones, pero el grupo de personas que apoya al chofer logran someterlo. Los vecinos exponen que los problemas por la falta de agua no surgieron por la ruptura de las tuberías luego del sismo, “pues desde antes del corte que hizo la CONAGUA por el fin de semana largo”, ya padecían bajos niveles de distribución.

Representantes de vecinos de diversas colonias de la delegación Tlalpan, Distrito Federal, como Lomas Altas de Padierna, Encinos y Cultura Maya, entre otras, a las que presta servicio la ruta 60 de transporte público, solicitan que, ante la falta de pericia de los conductores, se retire la concesión a las unidades del ramal López Portillo - Viveros y Metro CU, mientras otros colonos expresan su apoyo a los operadores de las unidades, pues “los primeros son comerciantes que quieren quitar la ruta para que los dejen poner [sus puestos] en nuestras calles”, aseguran.

El SNTE condiciona a la SEP a que antes de dar un paso más en el programa de evaluación universal establezca con transparencia qué hará con los resultados, presente el diseño de los instrumentos que se aplicarán en la prueba, diga cuáles son los proyectos de formación para los profesores y determine cuál es su infraestructura institucional para cumplir con los trayectos de capacitación del magisterio. Además, advierte que no permitirá que tome posesión ningún director en ninguna escuela, de los bachilleratos federales que controla la SEP, mientras éstos sean nombrados con lo que llamó un mecanismo unilateral de designación. También deja en claro a la dependencia que los trabajadores de la educación no marcarán su entrada y salida en el reloj checador de dichos planteles, “porque no estamos de acuerdo en eso”.

La Cámara de Senadores solicita a la Secretaría de Economía un informe detallado sobre la supuesta adquisición, por parte de la empresa minera canadiense Revolution Resources Corporation, del 100% de las cuatro concesiones mineras que poseía la empresa Lake Shore Gold en el país, y en especial de la que se encuentra en el territorio sagrado de Wirikuta. De igual forma, demanda al poder ejecutivo federal y a los gobernadores de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas un reporte de las acciones que han puesto en marcha en

cumplimiento del Pacto Huaxa Manaka, para la preservación y desarrollo de la cultura wixárika, signado en 2008.

Lunes 26

Decenas de trabajadores de base del Congreso de Chilpancingo, Guerrero, paran labores en demanda de un incremento salarial de 14% y anuncian que este martes iniciarán un paro indefinido. Antolín Denova Rabadán, dirigente de la sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, informa que su gremio reclama además treinta recategorizaciones y un bono de fin de legislatura equivalente a una quincena.

Maestros jubilados y pensionados bloquean durante 6 horas avenidas del primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para exigir al gobernador Marco Antonio Adame que pague la prima de antigüedad que adeuda a unos 8 mil 600 trabajadores de la educación. Los inconformes llegan al palacio de gobierno antes de las 10 de la mañana con la promesa de que funcionarios les informarían cuándo se les pagaría la prestación, pero la reunión se cancela, por lo que cierran las avenidas Galeana, Matamoros, Gutenberg, Rayón y Guerrero. Más tarde, se les informa que la administración estatal no tiene recursos para pagarles, por lo que anuncian que se manifestarán ante el congreso local.

En protesta por la detención sin orden de aprehensión y que violó los derechos humanos de cinco indígenas zapotecos, quienes se oponen a la construcción de un parque eólico en sus parcelas en Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, integrantes de comunidades indígenas, magisteriales y populares realizan un bloqueo de cinco horas a los trabajos que realiza la empresa Demex, filial de la trasnacional española Renovalia, en esa población.

Más de mil militantes del PRI marchan en caravana al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido para exigir que se reponga la selección de candidatos a presidentes municipales y diputados locales. Aseguran que el dirigente estatal Manuel Martínez Garrigós y el virtual candidato a gobernador, Amado Orihuela Trejo, se repartieron las postulaciones. Los inconformes con las candidaturas de unidad que asignó la dirigencia estatal el 17 de marzo, con aval del delegado del CEN del PRI en el estado, Joaquín Hendricks, subrayan que los dirigentes priístas no respetaron los procedimientos que marca la convocatoria. Además, de manera cínica, Garrigós impuso a su hermano como candidato a diputado local por el primer distrito, y el candidato virtual al gobierno estatal, a sus amigos. La Marcha por la Legalidad y los Derechos de los Militantes, también llamada Éxodo por la Legalidad, es encabezada por el diputado federal Jaime Sánchez Vélez y por unos 35 precandidatos locales excluidos por la dirigencia estatal, que de manera sorpresiva y a unas horas de las convenciones municipales y distritales –el 18 de marzo– nombró a candidatos únicos.

Martes 27

La CNDH emite treinta recomendaciones relacionadas con los hechos de represión cometidos contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: 13 de manera conjunta a la SSP y al gobernador de Guerrero, cuatro exclusivas a la SSP federal, 11 al gobernador del estado y dos al presidente de la mesa directiva del congreso del estado. Además, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, anuncia que presentarán una denuncia ante la PGR contra 184 servidores públicos, agentes ministeriales, estatales, elementos de la policía federal, el ex subprocurador general de Justicia y el ex secretario de Seguridad Pública, ambos del estado de Guerrero; y contra el ex comisionado de la policía federal, Facundo Rosas, en este caso, por omisión, ya que informó que no

se enteró del operativo sino hasta una hora después de efectuado. Además, la comisión sostiene que aunque dos policías ministeriales del estado de Guerrero se encuentran consignados por el asesinato de los dos estudiantes de esa escuela, “no fueron los únicos que dispararon. Deben ser investigados los 91 elementos que estuvieron armados en el operativo del 12 de diciembre de 2011”. Entre las recomendaciones de la CNDH están indemnizar a las personas afectadas y que en un acto público en el estado de Guerrero, ante víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo que implica el reconocimiento de las violaciones a sus derechos humanos.

El MPJD, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos, demandan a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados no concluir la aprobación del dictamen sobre el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, al considerar que su contenido se aleja de la reforma constitucional y legal en materia de garantías y amparo e implica de hecho una regresión al modelo inquisitorio. Durante una reunión con legisladores de PRD y del Partido del Trabajo, las organizaciones demandan iniciar una consulta pública, informada y plural en torno al nuevo Código de Procedimientos Penales, en el cual se asuma la centralidad del respeto a la institucionalidad democrática, los derechos humanos y el espíritu del sistema acusatorio de justicia penal.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear marchan por la tarde a la Secretaría de Energía, en el DF, en protesta porque las autoridades del organismo les ofrecen en su revisión salarial de este año un incremento por debajo del que dieron a otras instituciones del mismo ramo, e incluso les condicionan que no habría ningún ajuste adicional a sus prestaciones. En compañía de integrantes del SME y de otros gremios, los integrantes del sindicato marchan por los tres carriles de avenida Insurgentes, a la altura de esta dependencia, en la que realizan un mitin y denuncian que únicamente les están ofreciendo 3.5% de incremento a sus salarios.

Más de cien organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras envían una carta de repudio a las declaraciones que hizo el 24 de marzo el gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien afirmó que algunos colectivos lucran al denunciar atropellos a las garantías individuales en esa entidad, en particular los feminicidios. Estas afirmaciones, según los colectivos, demuestran un profundo desconocimiento de la evolución del sistema internacional de derechos humanos, y responsabilizan a Duarte de cualquier daño a la integridad de los defensores de los derechos humanos en Chihuahua.

Después de que activistas de Greenpeace desplegaran frente a Palacio Nacional una manta de 200 metros cuadrados con un mensaje para el presidente Felipe Calderón en el que le piden cancelar el proyecto Cabo Cortés, en Baja California Sur, que es un plan turístico autorizado al lado del parque nacional Cabo Pulmo, alrededor de 30 personas de esta organización son retiradas en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y liberadas treinta minutos después. La manta, en la que se leía “Calderón: ¡Cancela Cabo Cortés!”, es colocada por los activistas que ingresaron de manera pacífica a un inmueble en el Zócalo para mostrar el mensaje que apoyan 81 mil personas, las cuales se han pronunciado por la defensa del arrecife de Cabo Pulmo, ubicado en Baja California Sur.

Miércoles 28

Dirigentes de alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa consideran un triunfo del movimiento estudiantil y social de la entidad el dictamen que la CNDH difundió sobre la represión contra alumnos de ese plantel, durante el desalojo policiaco del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, en el que dos estudiantes fueron ultimados. Además, fijan de plazo hasta el final del periodo vacacional de Semana Santa para que el gobierno de Guerrero cumpla con dichas

recomendaciones. Exigen que se sancione a funcionarios del gobierno estatal, entre ellos la secretaria de Educación, Silvia Romero, y el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado.

Propietarios y trabajadores de 25 restaurantes de Puerto Marqués, Acapulco –de alrededor de 60 que operan en la zona–, exigen a los gobiernos estatal y federal su intervención para que el corporativo Grupo Mexicano de Desarrollo los indemnice por el daño ambiental, social y económico provocado a raíz de la construcción de una marina en la playa Majahua, ubicada a un costado de la bahía. Los prestadores de servicios mantienen un plantón desde el 27 de enero, por lo que los trabajos de edificación del atracadero se encuentran suspendidos.

Jueves 29

Más de mil integrantes de la CNTE marchan este jueves en Morelia, Michoacán. Ante el palacio de gobierno exigen a la administración estatal mantener programas sociales, respeto a su vida sindical y mejorar la infraestructura educativa, entre otras demandas. En tanto, estudiantes afiliados a la Coordinadora de Universitarios en Lucha toman escuelas, facultades y oficinas administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en Morelia, para protestar en contra del examen de admisión que, aseguran, pretenden imponer autoridades de la universidad nicolaíta en todas las áreas de salud.

En Chilpancingo, Guerrero, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero se manifiesta en defensa de la educación pública, en solidaridad con la normal de Ayotzinapa y por la entrega de recursos a 30 de 54 preparatorias populares dependientes de la UAG, informa Nicolás Chávez Adame, líder de la agrupación. A su vez, decenas de integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG paran labores y exigen a la rectoría 50 recategorizaciones y que se desista del amparo que se le concedió contra el derecho de huelga, así como la entrega inmediata de los fondos retenidos para la caja de ahorros.

Unas 150 personas se manifiestan en el zócalo de Acapulco, Guerrero, en defensa de Alberto López Rosas, ex procurador de Justicia del estado, quien el pasado 13 de diciembre fue separado de su cargo mientras se investigaban los hechos ocurridos un día antes en la Autopista del Sol, en los que perdieron la vida dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los simpatizantes del también ex alcalde de Acapulco (2002-2005) critican que las autoridades federales hayan incriminado a funcionarios de la procuraduría del estado sin hacer una investigación transparente y sin citar a funcionarios de la SSP federal. Rosario Merlín García, dirigente municipal del PRD, convoca a ciudadanos y simpatizantes a defender a López Rosas, pues “es aberrante pensar que el ex procurador haya dado la orden de asesinar a los estudiantes”. Además, exhorta al gobierno de Felipe Calderón a no reprimir a estudiantes en suelo guerrerense, y llamó “perseguido político” a López Rosas.

El juzgado décimo de distrito en materia administrativa otorga un recurso de amparo a 99 personas, integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, que obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a justificar de forma fundada si procede o no la petición de consulta pública que solicitaron los vecinos para exponer sus demandas sobre el impacto ambiental de la obra. Al respecto, la consejería jurídica del gobierno capitalino señala que el amparo otorgado a los vecinos no implica la suspensión de la obra, además de que tanto la dependencia federal como la constructora pueden impugnar el fallo.

Unos 180 transportistas de la zona conurbada del puerto de Acapulco bloquean por tres horas el bulevar Vicente Guerrero, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, uno de los principales accesos

para quienes llegan de la ciudad de México. Los choferes rechazan el sistema de transporte colectivo “Acabús” –una de las principales iniciativas del gobernador Ángel Aguirre Rivero–, cuyas obras comenzaron el martes pasado. A las 10 de la mañana, conductores y concesionarios estacionan unos 160 taxis colectivos amarillos y blancos en tres de los cuatro carriles del bulevar en dirección al centro de la ciudad. Los inconformes portan letreros y en los medallones de los vehículos escribieron pintas contra el Acabús.

Viernes 30

Da comienzo, en la sede de la CRAC-PC ubicada en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, el Encuentro de Radios Comunitarias. En la reunión se busca analizar la integración de una red de radios comunitarias de Guerrero, que aglutinará a siete emisoras, como parte de un proyecto comunicativo de transformación social. El acto, que concluirá el sábado, es convocado con la finalidad de fijar objetivos comunes en la defensa de las radios, entre las que destacan la *Radio Ñomda*, ubicada en el municipio de Xochistlahuaca, la emisora de la Normal de Ayotzinapa; *Baza Radio*, de Tlapa; *radio Unisur*, en Cuajinicuilapa; una más en Chilapa y las tres que conforman las estaciones dependientes de la policía comunitaria. En el primer día del encuentro se discuten los objetivos que tendrá la red de radios comunitarias, a partir de la necesidad de contar con la información que se genere en los poblados, que haya solidaridad ante actos de represión y no incluir a partidos políticos ni impulsar ningún tipo de proselitismo religioso. Se abordan tres mesas de trabajo con los temas: crear la red de radios comunitarias de Guerrero, crear un noticiario colectivo, y el de acuerdos y tareas operativas y organizativas previas.

Autoridades municipales y agrarias de la comunidad zapoteca de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, ubicado en la región de la sierra Norte, demandan a los gobiernos federal y estatal cancelar la concesión otorgada a la empresa canadiense Continuum Resources, que opera la mina de oro y plata La Natividad. Explican que debido a los daños provocados a los manantiales de la localidad, en 2006 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la mina, pero alertaron que la dependencia pretende suspender la sanción. Durante una conferencia de prensa, en compañía del secretario del comisariado de bienes comunales, Rodolfo Hernández Cosmes, el munícipe sostiene que el pueblo zapoteca de Capulalpam de Méndez ha enfrentado desde 2002 una lucha desigual contra las pretensiones de dicha empresa de continuar con la explotación minera en sus territorios.

Sábado 31

Habitantes de la Casa del Estudiante “2 de Octubre”, de la UMSNH, se enfrentan con policías estatales cuando éstos los desalojaron de la avenida Lázaro Cárdenas, donde sostenían un bloqueo. La riña deja a un alumno lesionado. A las 11 horas, alrededor de cien estudiantes salen de la casa donde se alojan y cierran dicha vialidad, a la altura de la Plaza Carrillo, para exigir el pago de becas en especie y manifestar su rechazo a la aplicación del examen del Consejo Nacional de Evaluación. Cuando los agentes municipales y estatales tratan de restablecer la circulación vial, los jóvenes les lanzan piedras y botellas, y los uniformados los repelen con gases lacrimógenos. Los alumnos nicolaítas ingresaron al albergue y desde la azotea continuaron arrojando objetos, cubriéndose el rostro con capuchas. Después de una hora y media, unos 300 policías liberaron la vialidad. Sin embargo, la circulación continuó cerrada porque los estudiantes amagaban con volver a bloquearla. En protesta por la intervención policiaca, habitantes de la Casa Nicolaíta –ubicada a unas cinco cuadradas de la Casa del Estudiante “2 de Octubre”– deciden respaldar a sus compañeros, para lo cual secuestran una camioneta de la Comisión Forestal del Estado con la que bloquean avenida Madero. Luego del enfrentamiento, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa afirma que Michoacán y todos sus

habitantes merecen respeto. “Seré firme ante quienes pretendan alterar la paz y tranquilidad de nuestro estado”, afirma.

Integrantes de la Coordinación de Estudiantes del Movimiento de Regeneración Nacional convocan a los jóvenes a sumarse a la iniciativa “00:01 Despierta Ya”, con la tomarán de manera simbólica las calles de la ciudad de México mediante carteles y grafitis, acción en la que participan alumnos universitarios, artistas plásticos, diseñadores y grafiteros. Manuel Otero, de la organización Redes Universitarias, señala que la idea es participar en un esfuerzo colectivo que permita ganar las calles a nuevas ideas, pero sobre todo a la esperanza, en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de los partidos de izquierda. La intención, agrega, es que con carteles, mensajes y grafitis en bardas de toda la ciudad se manifieste el rechazo a este modelo económico, pero también las demandas por una mejor educación, salud y calidad de vida.

Glosario de siglas

AC	Antorcha Campesina
ACE	Alianza por la Calidad de la Educación
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CNDH	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CRAC-PC	Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
JFCA	Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
LFC	Luz y Fuerza del Centro
MPJD	Movimiento Paz con Justicia y Dignidad
PAN	Partido Acción Nacional
PGJEG	Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
SEGOB	Secretaría de Gobernación
SEP	Secretaría de Educación Pública
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SSP	Secretaría de Seguridad Pública
STUACH	Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
UMSNH	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de México del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Coordinadores: Massimo Modonesi y Lucio Oliver.

Relevamiento y sistematización: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana.

Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

México

Abril 2012

Editada en julio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Norad
Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



Govern
de les Illes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1132

***Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
México***



Integrantes	Mariana López de la Vega Fernando Munguía Galeana Massimo Modonesi Lucio Oliver
-------------	--

Fuentes	El Universal y La Jornada
---------	---------------------------

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevó y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA “Justo Arosemena” (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES “Padre Juan Montalvo” (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

México

Cronología del conflicto social

Abril de 2012

Domingo 1

En Silao, Guanajuato, doscientos trabajadores de la planta Volkswagen Silao –que se encuentra apenas en proceso de arranque– inician una huelga, debido a los bajos salarios que quiere imponer la armadora alemana en el contrato colectivo de trabajo que regirá las relaciones obrero - patronales cuando entre en operaciones. La empresa contrató a técnicos que están en proceso de capacitación –algunos en el extranjero– y les ofreció ciertos salarios y prestaciones. Sin embargo, ahora que está próximo el arranque les quiere pagar menos de lo que se les ofreció inicialmente, explican los afectados. Lo que se pide es un salario acorde al mercado, “pues no es gente que tenga estudios de primaria o secundaria, son técnicos”, dice Hugo Varela Flores, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM) en Guanajuato.

Mazatlán, Sinaloa, policías ministeriales desalojan a más de 600 manifestantes afectados por la construcción de la presa Picachos, quienes en dos contingentes caminaban por las carreteras libre y de cuota con dirección a la capital del estado para instalar un plantón frente al congreso. Durante el operativo 200 campesinos son detenidos, acusados de obstruir las vías de comunicación. Por tercer día, los afectados por la construcción de la presa marchan, unos por la Maxipista –carretera de cuota– y otros por la México 15 – carretera libre. El primer contingente es desalojado a la altura del kilómetro 76 y el segundo en el kilómetro 67 del Río Piaxtla. Unos 200 policías se colocan frente a los manifestantes y los obligan a dejar la vialidad.

Lunes 2

En Culiacán, Sinaloa, unos 200 afectados por la construcción de la presa Picachos inician un plantón en las instalaciones de la Unidad Administrativa, sede del gobierno estatal, para exigir indemnizaciones y la liberación de los 46 campesinos que continúan detenidos, así como la devolución de sus vehículos. Una de las inconformes en el plantón expresa: “nos corrieron de la parte techada del palacio de gobierno, nos obligaron a salir y dormir a la intemperie. Si ellos no quieren que estemos adentro permaneceremos aquí, en la explanada, hasta que nos devuelvan a todos nuestros familiares y nuestros carros, pues aparte de que se llevaron a los compañeros nos quitaron los vehículos. Señalan que los agentes ministeriales privaron de la libertad a alrededor de 20 comuneros más que no aparecen en la lista formal de detenidos, sino que se encuentran desaparecidos”. El pasado viernes, al menos 600 pobladores de seis comunidades de la zona serrana de los municipios de Mazatlán y Concordia –donde fue construida la presa–, emprendieron una marcha simultánea de Mazatlán a la capital sinaloense, por las carreteras México - Nogales 15 y la Maxipista.

En el primer trimestre del año fueron interpuestas 30 mil denuncias contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por altos cobros y cortes, asegura Aleida Alavez, presidenta de la comisión especial sobre servicios, suministros y altos cobros de energía eléctrica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Hace 10 días se intensificaron las amenazas e intimidaciones contra usuarios que presentaron quejas ante la comisión por incrementos de hasta 12 mil por ciento.

Martes 3

“Nosotros somos los olvidados del presidente”, asegura la señora María Hernández Serrano, de 71 años de edad, habitante del municipio de Mártires de Tacubaya, perteneciente al distrito de Jamiltepec, sitio que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, visita como parte de una rápida gira realizada por Guerrero y Oaxaca para verificar los daños resultado del sismo del pasado 20 de marzo y sus casi 300 réplicas.

En Culiacán, Sinaloa, dos jóvenes que estaban desaparecidas desde el 20 de marzo fueron encontradas sin vida y con huellas de tortura en las inmediaciones de la comunidad Protomártir, municipio de Angostura, informa la policía ministerial del estado. Las jóvenes fueron identificadas como Deysi Avendaño Gaxiola de 23 años, y Jeny Guadalupe Burgos Ureta de 30, ambas con domicilio en esta región, a 110km de Culiacán. En lo que va del año han sido asesinadas, sobre todo a balazos, unas 20 mujeres en Sinaloa. Durante 2011, la suma de homicidios de mujeres en la entidad llegó a 114 y ninguno fue esclarecido, ni detenidos los responsables.

Miércoles 4

Un comando conformado por más de cien sujetos que portaban armas largas irrumpen la tarde de este miércoles en la cabecera de Jiménez del Teúl, Zacatecas, a bordo de unas 30 camionetas de lujo, y luego de disparar contra la comandancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, levantan a un policía y a tres civiles. Por la noche, el ejército informa que durante un enfrentamiento ocurrido con hombres armados en el kilómetro 15.8 de la carretera que va de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Piedras Negras, Coahuila, fallecen cuatro presuntos pistoleros, entre ellos Francisco Medina Mejía “El Quemado”, presunto líder zeta señalado por autoridades de Nuevo León como uno de los autores intelectuales del atentado al casino Royale.

En Villahermosa, Tabasco, policías antimotines desalojan a los alumnos que mantenían ocupadas las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana (ITSM) en demanda de la destitución del director, Enrique Lorenzo Bellizia Rosique, a quien acusan de malos manejos administrativos, por lo que demandaban una auditoría. Durante el operativo, 27 estudiantes son detenidos. Testigos dicen que unos 200 agentes llegaron al plantel lanzando gases lacrimógenos pasadas las cuatro de la madrugada de este miércoles, cuando los manifestantes dormían, y de este modo fueron detenidos y trasladados a la capital tabasqueña.

En Culiacán, Sinaloa, un total de 41 comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, acusados por el gobierno del estado de obstruir las vías de comunicación, quedan en libertad tras pagar una fianza de 3 mil pesos fijada por el Juzgado Séptimo Penal. No obstante, cuatro dirigentes del movimiento continúan detenidos, entre ellos Atilano Román, a quien se negó el beneficio de este derecho, informa la vocera de los campesinos, María José Osuna.

Jueves 5

En Ciudad Juárez, Chihuahua, agentes de la policía ministerial investigadora detienen a José Luis Castillo Carreón, activista del Comité de Familiares de Mujeres Desaparecidas, a quien se acusa de cometer un robo a mano armada en 2008. El detenido es padre de Esmeralda Castillo Rincón,

desaparecida el 19 de mayo de 2009, cuando tenía 14 años de edad. En busca de la menor, Castillo Carreón estuvo en la ciudad de México el mes pasado.

En Hermosillo, Sonora, unas 200 personas se reúnen este jueves con padres de las víctimas mortales del incendio en la Guardería ABC para volar papalotes y exigir justicia por la muerte de 49 niños, al cumplirse 34 meses de que ocurrió la tragedia en la estancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social. El acto se realiza en un lote baldío en la zona conocida como Vado del Río. Los padres de las víctimas exigen nuevamente a las autoridades aplicar la ley contra los responsables del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, y por el cual –dicen– ninguno de los socios de la guardería, ni funcionario gubernamental de alto nivel, han sido castigados.

El rechazo de agricultores y consumidores hacia Monsanto y los alimentos transgénicos se extiende cada día en el mundo. Esa empresa ha arruinado agricultores y dañado comunidades en su afán de dominar la producción de alimentos y controlar este mercado, advierte el informe *Combatiendo a Monsanto*. Estos casos se han presentado en India, Europa y América Latina, donde la empresa ha provocado campañas que demandan su expulsión, el establecimiento de prohibiciones del cultivo de sus productos y el rechazo al consumo de sus alimentos, reporta el documento elaborado por Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional y Combat Monsanto.

En Cuernavaca, Morelos, el empresario restaurantero y ex catedrático del Instituto Tecnológico de Zacatepec, Armando Salgado Méndez, es asesinado por hombres armados que lo esperaban fuera de su negocio, aparentemente con la intención de secuestrarlo, informó la Procuraduría de Justicia de la entidad.

En Guadalajara, Jalisco, dos mujeres fueron asesinadas, al parecer por dos sujetos que la noche del miércoles ingresaron a su domicilio en la colonia Jardines del Bosque, informa la Procuraduría de Justicia del estado. La policía ministerial da cuenta del asesinato de María del Carmen Álvarez Rodríguez, de 33 años, por arma blanca, y de Lesly del Carmen Calderón Rodríguez, de 17 años, quien fue degollada. Tres niñas de 12, 10 y dos años que se encontraban en el domicilio se escondieron en un clóset y así salvaron la vida.

En Villahermosa, Tabasco, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa que fueron liberados 23 de los 27 estudiantes detenidos el miércoles pasado, durante el desalojo del ITSM, por “no existir pruebas suficientes” en su contra. Los otros cuatro permanecieron arrestados, porque las autoridades encontraron elementos suficientes contra ellos.

Integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual en el estado de Oaxaca dan a conocer que autoridades locales les exigen pago de cuotas, y les cobran los exámenes médicos requeridos en el Reglamento para el Control del Ejercicio de la Prostitución en el municipio de Oaxaca de Juárez, a pesar de estar afiliadas al Seguro Popular. “Dichos cobros son una expresión de violencia misógina institucionalizada en las estructuras del ayuntamiento”, afirma este jueves en la ciudad de México Jaime Montejo, vocero de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, asociación de enlace con la Red.

Estados Unidos exporta una epidemia de obesidad a México aplicando políticas comerciales y empresariales previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que han transformado el sistema alimentario mexicano en reflejo de su vecino del norte, concluye una investigación. La investigación, publicada en el *Journal of Occupational and Environmental Health* – Revista de Salud Ocupacional y Ambiental– señala que el incremento de obesidad y sobrepeso en

México –12% entre 2000 y 2006– coincide con la aplicación del tratado. Durante ese lapso se incrementó en el país el consumo de productos procesados, bebidas gaseosas y otros alimentos con altos niveles de grasa y azúcar, mientras cada vez más empresas estadounidenses aumentaron su presencia en toda la gama de producción y procesamiento, así como en restaurantes y en la venta de comida con la cual transformaron el “ambiente de alimento” y con ello provocaron un incremento en las tasas de obesidad.

Viernes 6

“Ahorita vas cantar”, espetó en la Navidad de 2008 un militar mexicano a una mujer del estado de Chihuahua, mientras le quitaba el pantalón y la colgaba en una jaula para golpearla hasta el desmayo y, dos días después, dejar que otro soldado encapuchado la violara. El caso de esta mujer está integrado en las 5 mil 176 recomendaciones emitidas en seis años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tratos crueles y degradantes a entidades como el ejército, la Secretaría de Marina y los cuerpos de policía, entre otras autoridades, dice Andrés Aguirre, tercer visitador general de este organismo. Entre ellas hay 113 casos de tortura infligida por militares y policías. En el caso de la chihuahuense, los soldados buscaban que la víctima denunciara a traficantes de droga y armas.

En Matamoros, Tamaulipas, diez estudiantes normalistas denuncian penalmente a Sandra Lucía Rivera Araujo, jefa del sector 27 de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), quien los defraudó con 600 mil pesos con la promesa de otorgarles plazas de maestros de jardín de niños en Matamoros.

San Juan de Sabinas, Coahuila, integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos representan un viacrucis. Más de un centenar de cruces a la orilla de la carretera San Juan de Sabinas - Múzquiz para dar testimonio de la muerte de igual número de personas en las minas de carbón de la zona, todas ocurridas después de febrero de 2006, cuando explotó el pozo número 8 de Pasta de Conchos y segó la vida de 63 trabajadores. Obreros, familiares y amigos de las víctimas en la zona carbonífera denuncian así las condiciones en que trabajan y reiteran su llamado a que sean recuperados los cadáveres de sus familiares sepultados.

En Mazatlán, Sinaloa, comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos instalan un plantón en este puerto para exigir la liberación de cuatro líderes, consignados y recluidos en el penal de Aguaruto, en Culiacán, acusados de obstruir vías de comunicación tras una marcha el pasado 1º de abril. Mientras en la capital del estado, otro grupo de inconformes abandona la protesta que sostenía en la explanada de la Unidad Administrativa por el temor de nuevos actos represivos del gobierno estatal.

En Monterrey, Nuevo León, Consuelo Morales Elizondo, directora de la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), dice que el traslado de 149 reos de penales de Nuevo León hacia las Islas Marías, el martes pasado, sin avisar a sus familiares, constituyó una arbitrariedad de las autoridades federales. Critica que las autoridades estatales no han tomado medidas para garantizar la vida de los internos, pues esta semana hubo un nuevo asesinato en el penal del Topo Chico y en dos años han ocurrido 200 muertes en los centros penitenciarios.

Sábado 7

La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado advierte sobre el recrudecimiento de la persecución y criminalización de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en Chiapas. Demanda la liberación de 19 tzotziles reclusos en penales de esa entidad y en las islas Marías, a quienes se les encarceló “sin existir prueba de los delitos que se les imputan”. En nombre de su bancada, Carlos Sotelo, quien encabezó la comisión senatorial que dio seguimiento al llamado michoacanazo, se refirió también a la situación de Alberto Patishtán Gómez y Fernando Gabriel Montolla Oseguera, encarcelados “en represalia por defender derechos de campesinos indígenas y proteger el medio ambiente”.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, un juez de garantía declara que existen elementos para vincular a proceso –dar auto de formal prisión– al activista social José Luis Castillo y a su hijo Lorenzo, a quienes se acusa de un presunto asalto cometido hace casi cuatro años en un negocio de masajes. Durante la audiencia ante el juez de garantía –que en el nuevo sistema de justicia penal del estado analiza si existen elementos para que un acusado sea juzgado– ambos niegan los cargos y piden ampliar el término constitucional para presentar pruebas y testigos de la inocencia que alegan.

Domingo 8

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, miembros del llamado “sector social” de Chiapas, integrado por diferentes organizaciones, comienzan este domingo marchas en diferentes regiones del estado que arribarán el martes próximo a Tuxtla Gutiérrez en protesta por “la violación sistemática de los derechos humanos y contra la represión”, y en demanda de que se libere a los “presos políticos”, entre ellos Alberto Patihstán Gómez, adherente de la otra campaña, informa Filmar Joaquín López, dirigente de una de las fracciones de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

En Acapulco, Guerrero, unas 700 personas marchan en el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, para protestar por la “imposición” de los candidatos que propuso la dirigencia estatal del PRD tanto para contender por la alcaldía como por el octavo distrito local, que abarca dicha cabecera y la zona poniente de Acapulco. La movilización parte de la sede municipal del PRD, avanza por un carril de la carretera federal Acapulco - Zihuatanejo, cuya circulación fue suspendida 20 minutos, y concluye en el zócalo de Coyuca.

Lunes 9

Culiacán, el juez séptimo de primera instancia del ramo penal en Culiacán niega la libertad bajo caución a cuatro comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, que fueron detenidos el pasado 1º de abril cuando marchaban por la Maxipista Culiacán - Mazatlán y la México - Nogales 15. El procurador de justicia en Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, dice que la dependencia a su cargo solicitó al juez negar el derecho al pago de fianza, debido a que se les imputa el delito de ataque a las vías generales de comunicación; además, a los detenidos se les podría juzgar por otras faltas al integrarse más averiguaciones, que el funcionario no precisó.

En Saltillo, Coahuila, decenas de miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifiestan en Saltillo contra la falta de apoyos de los gobiernos estatal y federal. Los campesinos,

que arribaron a pie, montados en caballos y mulas, o a bordo de camionetas y tractores, marcharon por las calles Allende, Aldama, Juárez, Victoria e Hidalgo del centro histórico de la capital coahuilense. Posteriormente instalan un campamento en la explanada del palacio de gobierno en espera de ser recibidos por el mandatario estatal, Rubén Moreira Valdez.

Organizaciones del movimiento El hambre no espera, investigadores, académicos y agrupaciones ecologistas exigen a la Cámara de Diputados que suspenda la aprobación del proyecto de Ley Federal de Variedades Vegetales, pues además de favorecer a empresas trasnacionales de semillas convierte al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) en una “agencia investigadora y juzgadora de presuntos infractores, generalmente agricultores”. Advierten que la institución, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tendrá facultades para imponer multas impagables para la mayoría de los campesinos, impedirles el uso de sus predios de forma indefinida y clausurar los lugares o establecimientos donde se haya utilizado la variedad vegetal protegida.

Martes 10

En los primeros cinco años del actual sexenio, 46 mil 391 militares y marinos desertaron de las fuerzas armadas, se destaca en un informe que el presidente Felipe Calderón hace llegar al Senado de la República. En el documento, el ejecutivo sostiene, sin embargo, que la cifra disminuyó en más de 50% con respecto al gobierno de Vicente Fox, en que desertaron más de cien mil integrantes del ejército y la armada. La disminución, sostiene el mandatario, es resultado de la mejora en las prestaciones sociales de los militares y de “una mayor atención a sus necesidades, lo que incrementa la moral y deseo de pertenencia a este instituto armado”.

La organización Human Rights Watch (HRW, por su sigla en inglés) considera “sumamente alentador” que el congreso mexicano esté discutiendo la posibilidad de reformar el Código de Justicia Militar, ya que dicho sistema ha sido uno de los factores que han perpetuado la impunidad en diversos casos de atropellos cometidos por soldados.

Durante el 93 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, diversas organizaciones campesinas encabezan protestas en al menos cinco entidades federativas, para exigir a los gobiernos estatales y federales apoyos económicos ante la crisis que vive el sector agrario, así como la liberación de presos políticos. En Morelos, el acto oficial inicia con una hora de retraso, luego que policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia detienen de manera violenta al dirigente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, Florencio Ixpango Merino, acusado de haber cometido un presunto despojo en 1999.

Centenares de manifestantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) anuncian que realizarán un plantón permanente frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde se instalan, luego de realizar dos marchas. Los agricultores demandan que la secretaría, como coordinadora de gabinete, instale una mesa de diálogo con las otras dependencias para desahogar los paquetes de asuntos agrarios, productivos y de pobreza que en muchos casos, tienen pendientes, en muchos casos, desde el año pasado, agrega.

En Mazatlán, Octavio Atilano Román Tirado, José Isabel Osuna Lizárraga, Óscar René Osuna Díaz y Hortensia Gutiérrez Zamora, comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, son

declarados formalmente presos, acusados de ataque a las vías generales de comunicación por el juzgado séptimo penal en Culiacán, donde fueron recluidos el pasado 1º de abril tras una protesta sobre la carretera de cuota Mazatlán-Culiacán. Un abogado de los comuneros, Julio Lozano Bailón, informa que a las 22hrs del lunes el juez del séptimo de distrito notifica a los inculpados presos en el penal de Culiacán la resolución, y posteriormente a los representantes jurídicos y a los familiares que esperaban afuera del juzgado. Precisa que tendrán tres días hábiles para apelar del fallo o ampararse contra el dictamen, pues existen diversas irregularidades en el proceso.

Un tribunal de garantía del sistema de justicia penal de Chihuahua dicta auto de formal prisión contra el activista social José Luis Castillo Carreón de 51 años, y su hijo José Luis Castillo Rincón de 24, por un robo cometido hace cuatro años en un negocio de masajes de la colonia Hidalgo. Les dictaron prisión preventiva por 60 días para enfrentar juicio oral en la Fiscalía General del Estado. La familia acusa a funcionarios estatales de “fabricar” el delito que se les imputa.

Unos 300 pobladores protestan la mañana de este martes en el municipio de Coyuca de Catalán, contra la presencia de la Policía Federal, a la que acusan de incursionar en viviendas y negocios de dos colonias. Una de las manifestantes denuncia que el lunes decenas de elementos policiales llegaron a las colonias 10 de Mayo, y José López Portillo. “Se introdujeron a varias casas, golpearon a la gente, y violaron sus derechos humanos. Con esto que pasó ya no sabemos de quién cuidarnos, si de los policías o de los delincuentes”, finaliza.

En Xonacatlán, Estado de México agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del estado de México detienen la mañana de este martes a 43 de los 70 policías que integran la dirección de seguridad pública municipal de esta demarcación, acusados de brindar protección y tolerar actividades del grupo criminal La Familia Michoacana en la zona. Los uniformados fueron citados esta mañana en el palacio municipal, y todos fueron desarmados y detenidos por los ministeriales, quienes los remitieron a la procuraduría en Toluca para que rindieran su declaración y se deslindaran responsabilidades.

El juzgado decimotercero de distrito en materia administrativa resuelve que los vecinos del Frente Amplio contra la Supervía Poniente carecen de interés jurídico para conocer datos técnicos y financieros sobre esa vialidad, mismos que autoridades capitalinas y de la concesionaria les negaron argumentando que es “información restringida”. De esta manera, el juez sobreseyó el juicio de amparo que los vecinos interpusieron en noviembre de 2011, pese a que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal había avalado la solicitud, explica en entrevista Francisco López Rodríguez, uno de los voceros del grupo opositor a esa vialidad de cuota.

La señora Antonia López Cruz está desesperada por recuperar a su hija de seis años, Concepción Antonia Fernández López –que le fue arrebatada en Puebla el 21 de marzo pasado por la coordinadora del Ministerio Público del estado, Leticia Villaraldo, misma que la entregó a Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal– se cose los labios y se cuelga de una cruz en las rejas del Senado, en demanda de que le entreguen a su hija. Su esposo, Antonio Fernández Sánchez, quien se encuentra en plantón afuera del Senado, junto con sus otros dos hijos, denuncia: “nos quitaron a nuestra hija Concepción Antonia –Cuco–, en represalia porque mi esposa y yo defendemos a indígenas y campesinos ante la arbitrariedad del gobierno de Puebla, que encabeza Rafael Moreno Valle”.

Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazan un incremento de 3.8%, como propuso la víspera el secretario de

Educación, José Ángel Córdova Villalobos, para poco más de 1.2 millones de trabajadores de la educación, pues destacaron que “cualquier avance en la negociación salarial debe partir de un piso básico. Nada por debajo de 4.7% obtenido el año pasado”. Afirman que se sigue trabajando en “algunos puntos” en las mesas de negociación integradas por representantes del sindicato y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), “sobre todo en el tema de prestaciones, pero seguimos esperando una mejor propuesta salarial”.

Miércoles 11

Después de dos décadas de que inician los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, el senado aprueba en comisiones tipificar como delito grave el feminicidio, con penas de 40 a 60 años de cárcel y una multa de 500 a mil días de salario a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La minuta procedente de la Cámara de Diputados que reforma el Código Penal Federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Digna Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, fue modificada en varios artículos, por lo que una vez que se apruebe en el pleno será devuelta a la legisladora para continuar con el proceso. Organizaciones de derechos humanos y académicos sostienen que de aprobarse en la Cámara de Diputados el dictamen para un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales se fortalecerá la visión represiva en la estrategia anticrimen, se criminalizará a los sectores más desposeídos y marginados de la sociedad y en general se dará a las leyes anticrimen un carácter autoritario, y se brindaría poderes excesivos al gobierno y sin ningún tipo de contrapeso. Esto podría generar nuevas violaciones a los derechos humanos. Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirma que en las condiciones actuales, la propuesta de modificar el código no es coherente con la reforma de 2008 al sistema penal, ya que dicha iniciativa pretendía garantizar derechos tanto a las víctimas de un delito como a los acusados de cometerlo, y eso no sucedería con las modificaciones propuestas hoy.

Jueves 12

Aunque las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura incorporan algunos avances importantes, como endurecer las multas y penas de cárcel para quienes cometan dicho crimen –especialmente si son servidores públicos–, todavía hay muchos aspectos necesarios que no han sido tomados en cuenta, como derogar la figura del arraigo o tipificar la tortura como delito de lesa humanidad. Tal fue la advertencia que lanzaron activistas de organizaciones de derechos humanos, quienes subrayan la posibilidad de que esta iniciativa sea únicamente un “elemento cosmético” de cara a la evaluación que realizará el próximo mes el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura sobre lo hecho en el país contra dicha práctica.

Organizaciones civiles exigen más atención a la infancia callejera en el proyecto de Ley General para la Protección de los Derechos de la Niñez, que se discute en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, toda vez que este sector requiere acciones específicas para su atención, por las situaciones particulares que enfrenta. Asimismo, insisten en la exigencia de que el debate y construcción de dicha ley involucre a organismos internacionales, académicos y organizaciones sociales especializadas en la defensa de los derechos de la infancia.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, presuntos elementos de la policía estatal detienen esta noche en Tuxtla Gutiérrez a Caralampio Gómez Hernández, dirigente de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), perteneciente al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), sin que se sepa de qué delitos se le acusa, informa su hijo, Pablo César Gómez Alfaro. Dijo que su padre, quien desde el pasado 10 de abril se encuentra en plantón frente al palacio de gobierno en esa ciudad, junto con cientos de campesinos, para exigir solución a demandas agrarias y la liberación de presos políticos, fue aprehendido alrededor de las 20hrs, cuando circulaba en un vehículo junto con un hijo y una nieta.

En Toluca, México, un tráiler conducido a exceso de velocidad se quedó sin frenos cuando circulaba por el kilómetro 41 de la autopista México - Toluca, cerca del municipio de Ocoyoacac, donde embistió a un autobús en el cual viajaban 36 estudiantes y tres profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a siete automóviles más. El saldo es de seis muertos y 33 heridos.

Viernes 13

Hermosillo, Sonora, maestros de la Universidad de Sonora (UNISON) se plantaron frente al congreso del estado para exigir que los diputados aprueben el presupuesto 2012, y así puedan apoyar con más recursos a la Universidad de Sonora, a la cual tienen emplazada a huelga para el próximo 19 de abril. Los mentores denuncian falta de interés de los diputados y del gobierno estatal por atender su demanda. Dicen que las autoridades preparan aulas en las preparatorias públicas para dar clases ahí a los alumnos universitarios, lo que representa una clara violación al derecho de huelga.

Sábado 14

En Chilpancingo, Guerrero, el próximo martes quedará formalmente conformada la Comisión de la Verdad, la cual se encargará de investigar parte de lo sucedido en la llamada guerra sucia ocurrida en esta entidad entre los años 1979 y 1989, informa José Enrique González Ruiz, uno de sus integrantes y ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). “Sabemos que en el Congreso de Guerrero se tomará protesta formal a los integrantes de la comisión, pero hay que esperar, porque no hay nada en concreto”, advierte.

En Chilpancingo, Guerrero, cientos de niños y jóvenes provenientes de los estados de México, Michoacán y Guerrero, integrantes de la organización Pandillas de la Amistad, marchan por esta ciudad en demanda de paz y en rechazo a la guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico. Alrededor de las 11hrs, unos 600 jóvenes cristianos –la mayoría cuyas edades van de los 11 a los 20 años–, recorren las principales calles de Chilpancingo para pedir el cese de dicha estrategia del gobierno federal, porque “la violencia se combate con amor, no con más violencia”.

Domingo 15

En Saltillo, el gobierno de Coahuila informa que mil 700 personas han desaparecido de manera forzada en la entidad desde el año 2000; admite que el número de casos va en aumento, por lo que habrá cambios en la estrategia vigente desde diciembre para encontrar a los ausentes y llevar a la cárcel a los responsables. “Queremos que los criminales paguen por lo que hicieron y la justicia se imponga, no la venganza, por más duros que hayan sido los crímenes que estas personas hayan cometido”, advierte el

mandatario estatal Rubén Moreira Valdez, quien presentó ante los medios de comunicación a Jorge Luis Morán Delgado y a Homero Ramos Gloria como titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia en la entidad, respectivamente.

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, unos de cien indígenas y campesinos trasladan a esta ciudad el plantón que desde el pasado 10 de abril mantenían frente al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir respuesta a demandas sociales, la cancelación de órdenes de arresto y liberación de “presos políticos”, y a partir del pasado jueves la excarcelación de Caralampio Gómez Hernández, dirigente estatal de la Organización Proletaria Emiliano Zapata.

Lunes 16

En Morelia, Michoacán, unos 200 disidentes de la comunidad religiosa Nueva Jerusalén salen en marcha hacia Morelia, la capital de Michoacán, para exigir al gobierno estatal que intervenga, pues fanáticos religiosos cerraron las escuelas de educación básica en agosto de 2011, con el argumento de que la educación “es cosa del demonio” y es contraria a los designios de la Virgen del Rosario, santa patrona de esa población, fundada en 1973 por Papá Nabor, fallecido en febrero de 2008.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y organizaciones civiles hacen un llamado a la Cámara de Diputados para que “regrese a comisiones el proyecto de Ley General de Protección Integral de los Derechos de la Niñez”, a fin de abrir un debate público para complementar y reestructurar esa propuesta, que deberá votarse antes del próximo 30 de abril, una treintena de integrantes de organizaciones civiles y de la REDIM hacen un mitin en el Ángel de la Independencia para demandar a los diputados modificar ese proyecto de ley que aprobaron en comisiones hace unas semanas, debido a que “la nueva ley que elaboraron los legisladores no responde plenamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, de la ONU, aprobada en 1989”.

Martes 17

La Cámara de Diputados aprueba el modelo del presidente Felipe Calderón y del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para la operación de cárceles de “súper máxima seguridad”, que ya están en construcción y adonde se enviará a reos de alta peligrosidad, sentenciados por delincuencia organizada, quienes serán vigilados las 24 hrs y permanecerán en total aislamiento, sin estímulos y visitas sólo por medios electrónicos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el dirigente estatal de la OPEZ, Caralampio Gómez Hernández, detenido el pasado 12 de abril acusado de tentativa de homicidio y daños en propiedad ajena, se declaró en “rebeldía” en el penal de El Amate –ubicado en el municipio de Cintalapa–, informa su hijo Pablo César Gómez Alfaro. “Mi padre decidió no declarar ministerialmente ni acudir a ninguna diligencia judicial, porque es inocente”, dice Gómez Alfaro, quien participa en el plantón que unos cien campesinos e indígenas mantienen desde el sábado anterior en la Plaza Catedral de esta ciudad para exigir la libertad del dirigente, así como por demandas agrarias y la excarcelación de “presos políticos”. Pablo César adelanta que el próximo jueves vence el plazo para que el juez de la causa dicte auto de formal prisión o de libertad a Gómez Hernández, quien fue aprehendido en Tuxtla Gutiérrez, mientras una comisión de indígenas y campesinos que estaban en plantón frente al palacio de gobierno negociaba demandas agrarias y sociales con el secretario de Gobierno, Noé Castañón León. Al

dirigente campesino se le atribuyen crímenes en que habría incurrido el 10 de abril anterior, cuando participaba en una marcha en conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

Encarcelar activistas para reducirlos psicológicamente, al mismo tiempo que se causa terror y desmovilización en el resto de la sociedad, sigue siendo una táctica represiva vigente en la actualidad, cuyos verdaderos objetivos son ocultados y, por tanto, poco discutidos. Así lo advierten integrantes de diversas organizaciones, quienes participan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en un foro con motivo del Día internacional por la libertad de los presos políticos, donde explican cómo opera esta práctica en realidades muy diversas.

Integrantes de diversas organizaciones sociales realizan un mitin frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir el esclarecimiento del asesinato de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010, y anunciar que interpondrán una denuncia penal internacional contra el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz. Demandan que los testigos del caso reciban protección policiaca, y apremian al gobierno a concluir el expediente al respecto, “pues se tienen todas las pruebas y testimonios necesarios” y sólo es cuestión de voluntad política para resolverlo. Para presionar a las autoridades mexicanas a resolver el asesinato, la familia de Cariño anunció que viajará a Finlandia –país de origen de Jaakkola–, donde se interpondrá la denuncia contra Ruiz, por su responsabilidad en el crimen.

Miércoles 18

En Cherán, un enfrentamiento a balazos entre habitantes de la comunidad indígena de Cherán y el poblado Casimiro Leco, mejor conocido como El Cerecito, deja un saldo de ocho personas fallecidas y al menos cuatro heridos, dio a conocer la PGJE de Michoacán. El enfrentamiento ocurrió entre las nueve y once de la mañana de este miércoles, cuando jornaleros que trabajaban en el área de bienes comunales, como trabajadores temporales, ponían una cerca en territorio reforestado al norte de Cherán, y fueron atacados por habitantes armados de El Cerecito, pueblo al que los cheranenses identifican como “la cueva de los talamontes”.

En San Cristóbal de Las Casas, autoridades de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, que desde hace casi 40 años se disputan la propiedad de más de 900 has en la zona limítrofe de esas localidades, instan al gobierno y a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a convocar una reunión para encontrar una solución al conflicto. El primer regidor de Chalchihuitán, Marcos Pérez, dice que desde hace más de un año el llamado grupo multidisciplinario concluyó un estudio sobre el origen del diferendo que ha causado muertos y heridos por los terrenos, a causa, dijo, de la errónea ejecución de la resolución presidencial de 1973 por parte de peritos de la SRA.

En Hermosillo, maestros de la Universidad de Sonora protestan frente al Congreso local y el palacio de gobierno, en esta ciudad, para exigir la aplicación urgente de recursos públicos a la institución, cuyas autoridades están emplazadas a huelga este jueves, con lo que 30 mil estudiantes y unos 4 mil trabajadores suspenderían actividades. El dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, Jorge Rountree, informa que este jueves se realizará la votación en una asamblea del sindicato para determinar si los docentes aprueban instalar las banderas rojinegras.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha encontrado en 12 meses, en la zona del valle de Juárez –que incluye a los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravo–, 23

cuerpos de mujeres asesinadas, 12 de ellos entre enero y febrero pasados. Las seis víctimas que han sido identificadas durante 2012 fueron previamente levantadas en el centro de Juárez. Organizaciones no gubernamentales consideran que el Valle de Juárez representa el cementerio clandestino de mujeres más grande reportado en la entidad de 1993 a la fecha, superando la cifra de ocho cuerpos hallados en 2001 en el paraje conocido como Campo aldonero.

En Morelia, tras dos días de marchas, unos 700 disidentes de la comunidad religiosa La Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, llegan a la capital para demandar al gobierno local reabrir escuelas, que dejaron sin clases a 200 niños y jóvenes hace ocho meses, luego de que fanáticos religiosos las cerraron por considerarlas “creación del demonio” y contrarias a los designios de la Virgen del Rosario, santa patrona de esa población.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó medidas precautorias a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para evitar que se sigan violando los derechos de personas supuestas responsables de cometer un delito con su presentación pública.

El 70% del territorio sagrado de Wirikuta, el principal centro ceremonial de los huicholes wixárika, concesionado para la explotación minera a la empresa canadiense First Majestic, debe ser defendido por todos los mexicanos, no sólo por los afectados, sostiene Santos de la Cruz, uno de sus líderes. Con esta premisa participaron en el foro de análisis para una propuesta legislativa: Wirikuta el derecho de lo sagrado, que tuvo lugar en el senado, la escritora Elena Poniatowska, quien pidió al gobierno federal que respete los derechos de los indígenas; expertos en la materia, como Rodolfo Stavenhagen, Magdalena Gómez y Alfredo López Austin, además de decenas de representantes de ese pueblo, que aún tiene cerca de 50 mil integrantes.

Jueves 19

En Ginebra, los enfrentamientos por el control de rutas entre los cárteles de narcotraficantes en México son la principal causa del desplazamiento interno de unas 160 mil personas, revela un informe avalado por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según el informe elaborado por el Consejo Noruego de Refugiados se estima que en 2011 unas 160 mil personas se vieron forzadas a desplazarse dentro del territorio nacional a causa de la violencia provocada por dichos grupos delictivos.

Javier Sicilia, integrante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), envía a la Cámara de Diputados una misiva donde expone consideraciones en contra del dictamen de reforma al Código de Procedimientos Penales que se presentaría, para su aprobación, en el pleno. En su carta, el escritor refiere que ha seguido con interés y preocupación el proceso de aprobación del código, porque es fundamental para la protección de la dignidad humana en los procesos judiciales: “Pese a las recomendaciones hechas por diversas organizaciones civiles, entre las que se encuentra el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, recomendaciones que apuntan a hacer más profunda esa adecuación, el código no se ha modificado en lo sustancial”.

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprueba una reforma al artículo 325 del Código Penal Federal, calificada de histórica, que tipifica como delito grave el feminicidio, es decir, los crímenes de odio contra mujeres que hayan sido violadas, incomunicadas, amenazadas, mutiladas, torturadas y vejadas, además de ser privadas de la vida. Se establece una sanción de 40 a 60 años de prisión, multa

de 500 a mil días de salario mínimo vigente y la pérdida de derechos, incluidos los de carácter sucesorio, para quien cometa ese delito. Además, se sanciona a las autoridades que incurran en negligencia y entorpezcan la investigación de casos de feminicidio con penas de tres a ocho años de cárcel, multas de 500 a mil 500 días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a 10 años.

La Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) expresaron que el rescate de los mineros muertos en la localidad de Coahuila hace cinco años es una “cuenta pendiente que tiene el gobierno de Felipe Calderón”, lo cual hicieron notar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que en enero pasado les pidió ratificar los alegatos en el proceso que iniciaron contra el Estado mexicano. Las organizaciones indican que la CIDH les re envió la información aportada por el Estado y les dio un mes para hacer observaciones a dichos alegatos.

Con una ley minera que lesiona los intereses nacionales y abre la riqueza nacional a la explotación extranjera, los megaproyectos mineros en México sólo han generado contaminación, destrucción ambiental y desintegración del tejido social, afirman investigadores y activistas sociales, quienes agregaron que las transnacionales “no pagan ni el impuesto predial. Por ha, entregan al fisco entre 5 y 111 pesos, sin importar si lo que extraen es oro o tezontle”. Al participar en el seminario megaproyectos mineros, devastación ambiental y derechos humanos, aseguran que estas empresas “no han generado empleos ni desarrollo para las comunidades; por el contrario, prácticamente no entregan impuestos, no hay inversión tecnológica y la riqueza que extraen se la llevan del país”.

Es falsa la información difundida por la PGJE de Michoacán, con respecto a que hubo un enfrentamiento a balazos entre la comunidad de Cherán y El Cerecito”. Lo que hubo, señala el comunero Salvador Campanur y miembros del concejo mayor en entrevista telefónica, “fue una emboscada de grupos paramilitares asociados con el crimen organizado y los talamontes que operan en la región, en la que fueron asesinados dos pobladores de Cherán y dos más están heridos”. Campanur afirma que “están sembrando muertos en nuestro territorio. Desconocemos el móvil de las seis muertes que está reportando la Procuraduría de Justicia y el modo en que fueron asesinados. Aquí hay disputas internas entre el crimen organizado y los paramilitares y lo que están haciendo las autoridades es hacer aparecer esos muertos como parte de un enfrentamiento que no hubo. Nos quieren culpar de algo que simplemente no hicimos”.

En Hermosillo, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) estalla la huelga, en demanda de mejoras al sistema de jubilación y pensión, basificación de más de cien docentes y creación de un programa de nivelación salarial para que maestros de unidades ubicadas en las zonas centro y sur del estado ganen lo mismo que los docentes del gremio que viven en la zona fronteriza con Estados Unidos.

Durante la asamblea realizada la tarde de este jueves en el museo y biblioteca de la Universidad de Sonora (UNISON), 801 maestros votan por la huelga contra 661, por lo que a las cinco de la tarde instalan las banderas rojinegras en los planteles que la institución tiene en cinco municipios. Con el paro, alrededor de 30 mil estudiantes se quedarán sin clases.

En Culiacán, Sinaloa una juez de distrito ordena poner en libertad a Atilano Román Tirado, Hortencia Gutiérrez Zamora, Óscar René Osuna Díaz y José Isabel Osuna Lizárraga, comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, recluidos en el penal de Culiacán desde el primero de abril, tras ser detenidos durante el desalojo de una carretera que bloqueaban. La excarcelación se da este jueves,

luego que la juez federal Alba Galaviz Ramírez, titular del juzgado tercero de distrito, resolvió otorgar la suspensión provisional ante el juicio de amparo 260/2012 interpuesto el martes por la defensa de los comuneros, el martes. Los cuatro pagan una garantía de 5 mil pesos y deberán acudir cada lunes a los juzgados, a firmar, mientras dura el proceso penal en el juzgado séptimo penal, que se negó a otorgar la libertad bajo fianza por considerarlos, junto con la procuraduría estatal, pandilleros y “peligrosos para la sociedad”, además de ser acusados de obstrucción de vías de comunicación. El procurador Marco Higuera calificó de “ilegal” la liberación, se dijo “desconcertado” por la decisión del juzgado y que no ha sido notificado de la solicitud de amparo ni del fallo emitido, además de que podrían interponer un recurso ante la judicatura federal.

Desde hace dos años cerca de 400 estudiantes de la secundaria 126, del pueblo de Zapotitlán, Tláhuac, se han visto obligados a tomar clases en aulas prefabricadas, que cuando llueve se inundan, y en esta época es insoportable el calor. El inmueble anterior estaba dañado desde el sismo de 1985 y sus fallas se acentuaron con la construcción de la línea 12 del Metro, por lo que fue demolido.

La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y organizaciones afines al gobierno popular de Iztapalapa se declaran en “huelga de brazos caídos” y no promoverán el voto en favor de los abanderados del PRD a los diferentes cargos políticos en esta demarcación, ante la inclusión de candidatos sin arraigo en la zona y el desplazamiento de los liderazgos históricos, asegura el diputado local Víctor Varela.

Familiares de los cinco estudiantes y un profesor de la Facultad de Economía de la UNAM que fallecieron el pasado 12 de abril, presentan una denuncia contra la empresa propietaria del tráiler que ocasionó el accidente en la autopista México-Toluca, por lo que buscarán llegar “hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia”. Al concluir dos homenajes en Ciudad Universitaria en memoria de los fallecidos: Mariana Bárcenas Flores, hermana de Daniela, una de las víctimas, indica: “estamos peleando la responsabilidad de la empresa (transportista), pues contaba con dos razones sociales; desapareció una de ellas y quiere dejar como único responsable al chofer”, Rafael Durán Lozano.

Viernes 20

El general retirado Arturo Acosta Chaparro Escapite, uno de los jefes de la Brigada Blanca, grupo dedicado a detener, torturar y desaparecer opositores políticos y miembros de grupos guerrilleros en los años 70 y 80, es “ejecutado de manera directa” de tres tiros en la cabeza, en la colonia Anáhuac, delegación Miguel Hidalgo, de la ciudad de México, informa la procuraduría capitalina.

Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hace un llamado “urgente y duro” a las autoridades del país para exigirles que aprueben cuanto antes la ley general de víctimas, ya que ese fue su compromiso, y en caso de no hacerlo pronto, las posibilidades de lograrlo se alejan cada vez más. Al recibir el 20 Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, en ceremonia realizada en la parroquia de la colonia San Pedro Mártir, el poeta lamentó que en la sesión de comisión del pasado jueves en el Senado no hubiera quórum suficiente para aprobar una ley fundamental.

“De 26 (legisladores), únicamente fueron cinco, y si para el martes no se aprueba, no vamos a tener ley. Les exijo que cumplan lo que prometieron en los diálogos de Chapultepec; les exijo que hagan su trabajo”, recalca.

En Oaxaca, la sección 22 del SNTE suspende clases en las más de 13 mil escuelas de la entidad, para realizar asambleas delegacionales de información y consulta, a fin de definir el pliego petitorio que presentarán a los gobiernos federal y estatal en mayo próximo. El secretario general de la gremial, Azael Santiago Chepi dice que las asambleas delegacionales permitirán determinar las demandas educativas, de justicia, seguridad social, políticas y económicas.

Este viernes, en el municipio de Jiutepec, Morelos, es encontrado el cuerpo de una mujer de entre 20 y 25 años. Con éste suman cinco asesinatos de mujeres en ese estado en la semana, perpetrados en los municipios de Emiliano Zapata, Cuautla, Cuernavaca, Temixco y Jiutepec. En lo que va del año 15 mujeres han sido ultimadas en la entidad, la mayoría por parejas sentimentales o conocidos. Mientras, en una huerta de tamarindo del municipio de Tecomán, Colima, es hallado el cadáver de una mujer con huellas de golpes, con lo que suman ocho feminicidios en la entidad en lo que va del año.

Diversas organizaciones civiles realizarán este viernes un mitin frente a la nueva sede del Senado de la República para solicitar la despenalización de la marihuana, al tiempo que fumarán el enervante en la calle. La convocatoria, denominada Gran Festival Acústico y Mitin de Mariguanas y Mariguanos, se difunde en redes sociales por el grupo Frente de Artistas y Organizaciones por la Liberación de la Marihuana. Ante la polémica que ha generado el tema, donde un grupo importante de personas exigen la legalización de esa droga, los organizadores aseguran que lograrán convocar a más de 10 mil manifestantes.

Sábado 21

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba realiza una jornada de volanteo y difusión, para apoyar la liberación de cinco ciudadanos isleños presos en Estados Unidos. La movilización de solidaridad se lleva a cabo de manera simultánea a las actividades efectuadas en Washington con el mismo objetivo. Frente a la embajada estadounidense, los manifestantes explican la problemática de los detenidos y piden el respaldo de los transeúntes, con lo que se sumaron a la iniciativa “cinco días por los cinco cubanos”, organizada por el comité internacional por la libertad de los isleños.

En las semanas recientes, el flujo de migrantes indocumentados que acuden a diversos albergues del país ha aumentado más de 100%, lo cual ya generó una “crisis” de abastecimiento en esos refugios, pues en muchas ocasiones no alcanza la comida o las cobijas para todos los que las necesitan, o se deja fuera a decenas de personas. Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, señala que la extraordinaria llegada de personas puede generar, además, un aumento en el número de violaciones a los derechos humanos.

Domingo 22

En San Cristóbal de las Casas, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a las constantes exigencias en México y en diversos países por la libertad de Francisco Sántiz López, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de Alberto Patishtán Gómez, adherente de la otra campaña, presos ambos por delitos que no cometieron, siguen sumándose acciones y mensajes, y ya se anuncia un foro en esta ciudad contra la prisión política y por la libertad de estos indígenas, el 12 y 13 de mayo. La campaña internacional, que incluye dicho foro en la Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas, sostiene que Patishtán ya representa “una figura emblemática que lucha contra la injusticia en

las cárceles; sabemos que hay mucha más represión política en el país, la cual queremos visibilizar en este foro”. El profesor Patishtán “podría ser el caso paradigmático que refleja la injusticia en México y alrededor del cual construir una red de lucha y una movilización nacional e internacional”.

Catorce trabajadores del ayuntamiento de Tulum inician huelga de hambre este domingo, y 160 mantienen plantón desde el pasado jueves frente al palacio municipal para exigir a la alcaldesa priísta, Edith Mendoza Pino, cumplir con un laudo laboral y cesar el recorte de salario que ha aplicado desde el inicio de su administración, el 10 de abril de 2011. La mayor parte del personal del municipio de reciente creación paraliza labores en áreas básicas como servicios públicos, recolección de basura, jardinería, bacheo y alumbrado público, dejando a la deriva ese municipio de la Riviera Maya.

Lunes 23

En Oaxaca, el pintor Francisco Toledo afirma que fue amenazado de muerte en un correo electrónico que le enviaron personas, quienes se identificaron como miembros del grupo delictivo Los Zetas. En conferencia de prensa, el también escultor expone este lunes que la advertencia fue recibida recientemente en la dirección electrónica del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Explica que en el mensaje los presuntos zetas le indican que fueron contratados por alguien para asesinarlo, pero sin ofrecer alguna razón o motivo. “Trae una firma y la señal de Los Zetas, se puede pensar que no son o sí son, pero no se puede saber realmente”, señala el artista.

La liberación de Alberto Patishtán Gómez está en manos del presidente Felipe Calderón. Por ello, dentro de la creciente campaña internacional que demanda su retorno y ex carcelamiento, a partir de este lunes se han generado y multiplicado mensajes en *Twitter* y *Facebook* dirigidos al mandatario, pues su gobierno se niega a resolver dicha demanda, respaldada por decenas de organismos civiles nacionales e internacionales. Ante la falta de voluntad del gobierno de Chiapas para gestionar una solución federal, no obstante el compromiso público en ese sentido del gobernador Juan Sabines Guerrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) destaca que “durante los más de 11 años de su innecesaria condena”, el profesor tzotzil “ha sido un modelo de luchador social en favor de los más olvidados, generalmente pobres e indígenas”.

Indígenas afiliados a la Fundación Defensa Wixárika aseguran que unos 10 mil coras y huicholes, habitantes de 30 comunidades de los municipios serranos de Tepic y El Nayar, en Nayarit, consumen agua de la presa hidroeléctrica Aguamilpa, pues la falta de lluvias secó arroyos y ríos, y no tienen agua para beber. Mientras, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informa que autoridades de Sinaloa decidieron destinar la poca agua de las presas de la entidad al consumo humano y renunciar a su uso para la agricultura. Braulio Muñoz Hernández, presidente de la citada fundación, sostuvo en conferencia de prensa, en Tepic, que la situación es “muy grave en la zona serrana (de Nayarit); los niños salen de la escuela y beben agua en las orillas de la presa, y pues también dejan de ir a clases”.

Unos 50 maestros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, en paro laboral desde el pasado jueves, protestan este lunes frente a las instalaciones del Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Sonora (CECYTES) “porque las autoridades estatales y académicas violaron su derecho a huelga”, y habilitarán espacios donde se impartirán clases extramuros para los estudiantes universitarios durante el periodo de suspensión de labores. Los docentes informaron a los alumnos del plantel CECYTES, de nivel medio superior, ubicado en la colonia El Mariachi, en Hermosillo, que el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde,

pretende utilizar las instalaciones de la preparatoria, lo que violenta el derecho sindical de manifestarse para exigir mejores condiciones de trabajo y despojará de su espacio a los estudiantes de bachillerato. El secretario de gobierno de Sonora, Roberto Romero López, dice en entrevista que el gobierno estatal tiene derecho a ofrecer clases extramuros a los universitarios que no quieran perder su semestre. Acusó que hubo intentos de sindicalistas de ingresar ilegalmente a la instalación del CECYTES, lo cual dice, no será permitido.

Dos de las zonas ambientales más importantes del país, los humedales de Marismas Nacionales, que abarcan territorio de manglares de Nayarit y Sinaloa, y el parque arrecifal Cabo Pulmo están en riesgo por la autorización de megaproyectos turísticos por parte de la Semarnat, señalan expertos. Ante la importancia ambiental de los dos sitios, una misión de la Convención Ramsar los visitó, y en el caso de Cabo Pulmo están pendientes de conocerse las recomendaciones. Mientras que en la zona de Marismas Nacionales, correspondiente a Sinaloa, cuyo decreto como área natural protegida está en la consejería jurídica de la Presidencia de la República desde hace un año, ya hay conclusiones.

Martes 24

San Cristóbal de las Casas, “Los pueblos debemos persistir en la organización para defender nuestros territorios ante la falta de procuración de justicia y la impunidad de los malos gobiernos, quienes además de no garantizar la seguridad de nuestras comunidades y pueblos, de procurar el despojo y ensanchar la brecha de la pobreza, son cómplices o responsables directos de la violencia contra quienes decidimos organizarnos de manera autónoma mediante amenazas, represión, hostigamiento, procesos legales y asesinatos.” Esto concluyen una treintena de organismos civiles, ejidos y movimientos de base reunidos en esta ciudad.

Pobladores de San Sebastián Nopalera, perteneciente a Santa Lucía Monteverde, región de la Mixteca, Oaxaca incendian unas 500 has de la localidad vecina de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, la cual cuenta con medidas cautelares de la CIDH, por un conflicto agrario entre ambas comunidades. Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, dice que los pobladores de San Sebastián Nopalera provocaron la conflagración la mañana del jueves pasado en el paraje Tierra Colorada, donde quemaron unas 250 has de bosques de pino y ocote, árboles frutales, pastizales y tierras cultivadas con maíz.

En México coexisten las brechas de desigualdad social que imperan en el mundo: hay municipios tan ricos como naciones de la Unión Europea y otros en condiciones similares a los de los países más pobres, como el africano Burkina Faso. Esto ocurre aunque la inversión dirigida al sector rural creció 240% en una década, lo cual no ha ayudado a que las familias salgan de la pobreza extrema, y al menos 60% de los mexicanos que viven en esa condición se encuentran en el campo.

La inseguridad alimentaria en que viven más de 20 millones de personas en México se terminaría si contaran con un ingreso de un salario mínimo por individuo, lo cual se antoja complicado por la carencia de empleo y porque el país reporta los niveles más elevados de inflación en alimentos, advirtió Rafael Pérez Escamilla, director del Centro para la eliminación de disparidades de salud entre los latinos, de la Universidad Yale, Estados Unidos.

Sergio Cabrera, presidente del comisariado del ejido Melchor Ocampo, de Tepeji del Río, Hidalgo, denuncia una “persecución” en su contra por funcionarios del gobierno del estado, que se han erigido

en “defensores oficiosos de los empresarios que intervinieron en la construcción y ahora operación del Puerto Seco” en tierras ejidales, presuntamente adquiridas en forma irregular.

Miércoles 25

En las postrimerías de la legislatura, de forma unánime, el Senado de la República aprueba la Ley General de Víctimas, entramado jurídico que representa “el principio de un camino nuevo, de mayor justicia, atención y cuidado” para quienes sufren violaciones a sus derechos humanos o el embate de la delincuencia organizada, según comenta en tribuna el priísta Jesús Murillo Karam. “Es un paso muy importante que reivindica los derechos humanos en esta lucha en que estamos inmersos entre un Estado policiaco y un Estado de plena libertad”, dice el senador del PRD Pablo Gómez, al dar la bienvenida a esa ley de “nueva generación”, que declara corresponsable al Estado mexicano de los atentados contra la vida, la seguridad y la propiedad de las personas, y ordena la reparación integral del daño. Al final, después de la participación de legisladores de todos los partidos –y de algunos cambios de última hora al dictamen–, con 94 votos en favor y ninguno en contra se aprobó la nueva ley entre aplausos de familiares de víctimas, integrantes del MPJD, que desde la zona de invitados siguieron emocionados el debate.

Un día después de que el pleno del senado aprueba por unanimidad la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la organización Amnistía Internacional lanza la campaña Informar no debe costar la vida, mediante la cual pedirá que esta nueva legislación vaya acompañada de medidas concretas para garantizar la investigación adecuada de los ataques contra comunicadores. Alberto Herrera, director ejecutivo del organismo en México, afirmó mediante un comunicado que ahora es el turno de la Cámara de Diputados para demostrar que no se tolerarán más agresiones contra periodistas, y por tanto se dará fin a la impunidad en estos casos. La campaña incluye el lanzamiento de un spot en redes sociales y en la página de Internet alzatuvoz.org/periodistas/, en el cual se recrea una situación ficticia donde un comunicador se encuentra retenido en un vehículo y a punto de ser ejecutado.

En su asamblea general de jubilados, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordó demandar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por violaciones al contrato colectivo de trabajo, para que diga “dónde se encuentran los fondos de jubilación y del programa habitacional” que pertenecían a estos trabajadores, “los cuales el gobierno ha hecho perdedizos”. El gremio toma la decisión de llevar a juicio a los directivos del SAE que fueron los encargados de todos los bienes y recursos que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro, pero también de los fondos y recursos que los trabajadores habían ahorrado por años.

San Sebastián Bachajón, Chiapas, Antonio Estrada Estrada y Miguel Vázquez Deara, pobladores de este ejido tzeltal y adherentes de la otra campaña, se encuentran presos luego de sufrir intensa tortura por parte de policías preventivos y judiciales del estado para obligarlos a inculparse como asaltantes. Sus testimonios –entregados a La Jornada por sus familiares– confirman la persistencia de la práctica de tortura y fabricación de delitos en Chiapas. Los representantes del ejido sostienen que son inocentes y los consideran “presos políticos” porque sus familias “participan mucho en la otra campaña”.

Jueves 26

La senadora Rosario Ibarra lamenta que por presiones del alto mando castrense se quedara en la congeladora la reforma que elimina el fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas contra civiles, y que tampoco se hayan aprobado las leyes General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas y la que crea la comisión de la verdad. “No quieren tocar al Ejército ni con el pétalo de una rosa; es lamentable que las dos principales fuerzas políticas en el Congreso no cumplan con su tarea de crear las leyes para proteger a los mexicanos”, afirma la senadora.

El sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, afirma que la PGR y las autoridades de Oaxaca ya investigan las amenazas de muerte que sufrió hace una semana, e incluso ya han interrogado a algunas personas. Sin embargo, el religioso advirtió que los actos de hostigamiento en su contra no se van a detener, porque la zona de Ixtepec sigue siendo clave para los grupos de la delincuencia organizada que lucran con los migrantes.

El pleno del SME aprueba en asamblea y por unanimidad la constitución de la “junta provisional promotora de una nueva central de trabajadores”, que será democrática, clasista e independiente, que aglutinará a diversas corrientes del sindicalismo independiente y, además, lanzará una “agresiva campaña para organizar a todos los sectores sociales explotados y oprimidos por el capitalismo”. En dicha asamblea, los electricistas en resistencia entregaron un reconocimiento al catedrático y escritor Pablo González Casanova, por ser un “delegado fraterno y apoyar la lucha del SME”. El sociólogo, por su parte, entrega a este sindicato un proyecto de lo que podría ser el marco teórico ideológico de la nueva central de trabajadores, como punto de partida para la construcción de este organismo y titulado Por una nueva organización de los trabajadores.

Indígenas cucapás bloquean las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Mexicali, Baja California, para exigir la entrega de 130 ton de pescado que les retuvo la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca hace una semana, con el argumento de que excedieron el límite establecido de captura autorizado para ellos en el Alto Golfo de California. “Si no pescamos no existimos”, dice Hilda Hurtado Valenzuela, presidenta de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá. Explica que de dicha actividad depende un centenar de familias de los poblados Indiviso, Mayor Cucapá y La Puerta, quienes ante “la sordera e insensibilidad de la autoridad” interpusieron el amparo 272/2012 ante un juez federal, el cual ordenó la liberación del producto, así como la suspensión del tope de captura.

La junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, del caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer con sede en La Garrucha, denuncia invasiones y agresiones en particular contra el pueblo autónomo Nuevo Paraíso, donde pobladores de Pojkol, Guadalupe Victoria y la ranchería Las Conchitas de los municipios de Ocosingo y Chilón, se introducen en las tierras recuperadas de la comunidad rebelde “y están haciendo daños a nuestros compañeros”. Los problemas de Nuevo Paraíso iniciaron, según la JBG, el pasado 26 de octubre, “cuando habitantes de Pojkol ingresaron a nuestros cafetales para cortar el café; iban armados y dispararon varios balazos de alto calibre”. Los invasores dañaron 3 has y sustrajeron mil 800 kg. En noviembre robaron la milpa del colectivo, 4 has que rinden cien zontes –unos 35 costales– de maíz.

Habitantes de Cherán y organizaciones sociales anuncian la realización del encuentro nacional de resistencias autónomas anticapitalistas en esa comunidad, del 24 al 27 de mayo con temas como la

defensa de la tierra, el territorio, los bienes naturales, las tradiciones comunitarias y la autodeterminación de sus usos y costumbres. El día anterior, las organizaciones realizaron una marcha del hemicycle a Juárez al Zócalo en solidaridad con los comuneros, luego de que hace una semana un grupo de ellos fueron emboscados, con saldo de dos muertos y dos heridos.

Viernes 27

Por segundo día consecutivo, cientos de agremiados a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas Asociación Civil (AMOTAC) se manifiestan en varios estados y en vías de acceso al Distrito Federal, en rechazo al aumento en los precios de los combustibles y para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cambios en las normas sobre peso y dimensiones de vehículos que circulan en carreteras. En la mayoría de los casos, los inconformes suspendieron temporalmente las protestas en espera el resultado de las negociaciones que el presidente nacional de la agrupación, Rafael Ortiz Pacheco, inicia por la mañana en Querétaro con autoridades de la dependencia federal. Los transportistas, además de demandar que se ponga un alto a los constantes gasolinazos, exigen que las policías de los tres niveles de gobierno “cesen los operativos de extorsión” en carreteras.

Ocosingo, Chiapas, al encontrarse aislados de los presos políticos organizados en algunas cárceles de Chiapas, Miguel Vázquez Deara y Antonio Estrada Estrada, adherentes de la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón, enfrentan su encarcelamiento, que insisten en considerar infundado, en condiciones de mayor soledad. Vázquez Deara, recluso en el penal de Ocosingo, fue detenido y torturado, refieren sus familiares, al ser señalado por los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista que están entregando el ejido al gobierno. Esto, “porque participamos mucho en la otra campaña”, expresan. “En la tortura le exigían que dijera quiénes dirigen la otra campaña. Él tenía el cargo de policía comunitario para detener tantos asaltos hechos por partidistas protegidos por el gobierno”.

Morelia, . Por segundo día consecutivo, integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha mantienen tomada la avenida Madero y retenidos nueve vehículos, en demanda de contratar autobuses y pagar viáticos para promover en el estado y entidades vecinas la inscripción a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde las seis horas del jueves, unos cien estudiantes que promueven la inscripción ocupan varias calles del centro y retuvieron ocho vehículos. La mañana de este viernes toman dos más, incluida una patrulla de la policía municipal, la cual devuelven al mediodía.

En Ciudad Juárez, el empresario juarense Nicolás Fernández, quien es proveedor de los comedores de los Centros de Rehabilitación Social estatales, es sorprendido robando agua en tomas clandestinas ubicadas en dos residencias de su propiedad en el fraccionamiento Campestre, por empleados de la Junta Local de Agua y Saneamiento y policías municipales. Según personal del departamento de bomberos, “movió un hidrante de la junta de aguas, de donde llenaba dos pipas que fueron aseguradas y le servían para surtir agua a sus negocios.”

En Villahermosa, Tabasco, la organización Antorcha Campesina confirma que las autoridades estatales liberaron a los 18 estudiantes que fueron detenidos en el desalojo del jueves cuando los jóvenes protestaban en la plaza de armas de Villahermosa para exigir el reconocimiento de dos preparatorias. La agrupación informa que localizaron a otros 12 compañeros que habían denunciado como desaparecidos y anuncia que marcharán el próximo miércoles, para insistir en el reconocimiento de las

dos escuelas, ubicadas en zonas rurales de los municipios de Macuspana y Centla.

Sábado 28

Con un pronunciamiento de solidaridad con pueblos indígenas de México que están siendo objeto de políticas y acciones de despojo social y territorial por “intereses ilegítimos” de diversa índole, como los megaproyectos hidroeléctricos, eolo eléctricos y mineros, así como con el artista juchiteco Francisco Toledo, dos veces amenazado de muerte por defender el patrimonio cultural y natural del estado de Oaxaca, concluye el foro nacional e internacional Por la conservación y la integridad del territorio zoque An’pon Chimalapa: la región más biodiversa de México.

En San Cristóbal de las Casas, familias de la comunidad tzeltal de Banavil, municipio de Tenejapa, simpatizantes zapatistas que fueron desplazadas el 4 de diciembre tras ser agredidas por los caciques oficialistas al frente de unas 30 personas, demandan la aparición de su padre Alonso López Luna y la liberación inmediata de Francisco Sántiz López, base de apoyo zapatista acusado falsamente de agredir a los mencionados atacantes, siendo que ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos.

Policías federales y estatales desalojan con violencia a los moradores de las tres casas de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Los jóvenes respondieron con palos, piedras y otros objetos. El saldo es de siete estudiantes golpeados, 194 detenidos y 15 policías con quemaduras, informa el secretario de Gobierno Jesús Reyna García. Desde el jueves, integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) tomaron calles y retuvieron 12 vehículos oficiales en demanda de que el gobierno del estado les entregue 30 autobuses o recursos económicos para trasladarse a los municipios a promover el ingreso a licenciatura.

En Villahermosa, Tabasco, pobladores de la comunidad de Tapijulapa, municipio de Tacotalpa –donde el martes 24 de abril cuatro menores fueron asesinados– exigen la instalación de un retén militar permanente a la entrada de esa población, ante el temor que causó la tragedia. Mientras, el gobernador Andrés Granier Melo, tras condenar el homicidio de los niños, asegura que “se aplicará todo el rigor de la ley” contra los responsables del multi homicidio.

Domingo 29

Hace 20 años el gobierno federal puso en marcha el sistema carcelario de máxima seguridad, en el cual se mantiene al interno 14hrs diarias en su celda y sólo se permite una hora de sol. Hasta 2006 eran cuatro las prisiones de ese tipo y en ellas había 3 mil internos. La nueva estrategia endurece más las condiciones de internamiento. Para agosto de 2012, la Secretaría de Seguridad Pública federal tiene programado custodiar a 48 mil 66 reos en 22 prisiones, en las cuales habrá mil 350 celdas de máxima seguridad, en las que los reos estarán confinados un máximo de ocho meses; posteriormente serán evaluados para cambiarlos al nivel de máxima seguridad.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, hace un exhorto a las y los trabajadores del país a no decaer en la lucha por sus derechos y contra la injusticia, que los hace más pobres todavía, durante la audiencia pública del Tribunal Internacional de Libertad Sindical que se inicia en esta ciudad. Ante representantes sindicales y expertos laborales de México, Estados Unidos, Chile, Argentina, España y otros países, el prelado indica que hoy en día, la mentalidad del poder político y el empresariado está

caracterizada por un sentido de la dominación y la esclavitud, lo que ha provocado en los grupos sindicales un sentimiento de lucha, donde lo más importante es no decaer ante las arbitrariedades e injusticias del Estado mexicano y de los patrones.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca entrega las guías de pesca a los indígenas cucapás para que puedan comercializar las 102 toneladas de corvina golfina decomisadas y sostuvo que para la temporada de pesca –de febrero a abril– autorizó 575 toneladas en total para las comunidades indígenas y de Bajo Río. Durante siete días, indígenas cucapás de los poblados Indiviso, Mayor Cucapá y La Puerta mantuvieron un plantón en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Mexicali, Baja California, para exigir la liberación de 130 toneladas de pescado retenido por carecer de los permisos correspondientes; incluso interpusieron un amparo para recuperar el alimento. El viernes, las autoridades entregaron las guías de pesca, pero no dijeron que habían ampliado el volumen de captura ni se firmó un acuerdo, explica Mónica González, representante legal de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá.

Lamalzat, Chiapas, en esta comunidad tzeltal del vasto ejido San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, también tienen un preso considerado político. Fue torturado por la policía estatal luego de su detención en Ocosingo, acusado y encarcelado por cargos que su hermano y su esposa aseguran que son falsos. Miguel Demeza Jiménez, adherente de la otra campaña, se encuentra en el penal de El Amate, en Cintalapa, desde el 7 de octubre de 2010, aún sin sentencia. Acusado de participar en el secuestro de un menor en Ocosingo, Demeza Jiménez pasó dos meses bajo arraigo en la finca Pitiquitos, en las afueras de Chiapa de Corzo. Su esposa Lucía y su hermano Pedro sostienen que es completamente inocente. Existe un presunto testigo que no se ha presentado a declarar ya en tres ocasiones. Miguel Demeza, quien participó en la protesta de ayuno y huelga de hambre de presos de la otra campaña en septiembre y octubre de 2011, a un año y medio de haber sido golpeado y torturado por agentes policiacos sigue padeciendo un fuerte dolor de espalda, y no recibe atención médica, asegura su cónyuge en lengua tzeltal.

En Morelia, Michoacán, unos 250 alumnos universitarios realizaron este mediodía una marcha silenciosa que partió del monumento a Lázaro Cárdenas al centro histórico de Morelia, para demandar la liberación de 174 compañeros detenidos, durante tres desalojos policiacos simultáneos de las casas de estudiantes de la UMSNH. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban cartulinas con frases como ¡No más violencia! ¡Alto a la represión! ¡Somos estudiantes, no delincuentes! ¡Pedimos que se entregue con vida a los desaparecidos! El contingente llega a la fuente Las Tarascas y de ahí regresó a la plaza Melchor Ocampo, frente a la catedral. Los jóvenes rechazan y lamentan el uso de la fuerza pública contra los universitarios. Asimismo reprobaron la decisión del gobierno michoacano de desalojar las casas de estudiantes Nicolaíta, 2 de Octubre y Lucio Cabañas. Señalaron que luego de la intervención policiaca desconocen el paradero de algunos compañeros. Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, desmiente tales afirmaciones desde el pasado sábado, cuando agrega que, además de la presencia de los medios de comunicación, se videograbaron los tres desalojos y la recuperación de 12 vehículos.

Lunes 30

En Morelia, Michoacán, trece estudiantes de la UMSNH son consignados y reclusos este lunes en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, acusados de incendiar y dañar 12 vehículos, así como de causar destrozos en tres casas de estudiantes. Los otros 181 jóvenes detenidos el pasado

viernes, durante los desalojos de las casas estudiantiles por policías federales y estatales, quedaron en libertad.

En Irapuato, Guanajuato, Monserrat Reyes, de 19 años, fue violada, golpeada y estrangulada. Su cuerpo desnudo fue abandonado en un paraje de la entidad y localizado por autoridades policiacas. Con ella suman 18 feminicidios en la que va del año en la entidad. El cuerpo de la vendedora de periódicos fue tirado en un terreno baldío entre las colonias San Carlos y Los Paraísos. Tras el hallazgo, personal de la Procuraduría de Justicia del estado detuvo a dos hombres por su presunta participación en el feminicidio. En 2011 fueron asesinadas 54 mujeres, un 20% más que en 2010. En la mayoría de los casos los cuerpos han sido desnudados y dejados en la vía pública, según información del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez. El 26 de mayo pasado, el Congreso local aprobó la tipificación del delito de feminicidio, que se castiga con penas de 25 a 35 años de cárcel y se comete “cuando la víctima de homicidio sea mujer, la incomuniquen o violenten sexualmente, cuando sea vejada o mutilada, o haya existido violencia intrafamiliar del activo contra ella”. “Nos encontramos frente a un tipo penal inoperante y lo único para lo que tiene efectos es para decir que el feminicidio ha bajado o ya no existe en el estado”, lamenta Ángeles López García, directora del centro Victoria Díez.

En Chimalhuacán, más de 500 personas bloquean hora y media la autopista Circuito Exterior Mexiquense a la altura del paraje Tlatel Xochitenco, en protesta porque fueron desalojadas el jueves pasado del predio federal Hidalgo y Carrizo, ubicado en el municipio de Texcoco. Los manifestantes dicen que compraron de buena fe, entre 35 mil y 50 mil pesos, terrenos en el predio que la CONAGUA recuperó la semana pasada. Funcionarios estatales dicen a los manifestantes que la Federación era responsable del problema, y les ofrecieron tramitar una audiencia con la CONAGUA, lo que concluye la movilización.

Glosario de siglas

ACNUR	Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados
ALDF	Asamblea Legislativa del Distrito Federal
AMOTAC	Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas Asociación Civil
CADHAC	Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos
CDHDF	Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CECYTES	Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Sonora
CEN	Comité Ejecutivo Nacional
CEREAL	Centro de Reflexión y Acción Laboral
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNDH	Comisión Nacional de Derechos Humanos
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CTM	Confederación Nacional de Trabajadores
CUL	Coordinadora de Universitarios en Lucha
DIF	Desarrollo Integral de la Familia
Frayba	Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
HRW	Human Rights Watch (Por su sigla en inglés)

ITSM	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
JBG	Junta de buen gobierno
MLN	Movimiento de Liberación Nacional
MPJD	Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
OCEZ	Organización Campesina Emiliano Zapata
OPEZ	Organización Proletaria Emiliano Zapata
PGJDF	Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
PGJE	Procuraduría General de Justicia del Estado
PGR	Procuraduría General de la República
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PRI	Partido Revolucionario Institucional
REDIM	Red por los Derechos de la Infancia en México
SAE	Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SEP	Secretaría de Educación Pública
SET	Secretaría de Educación de Tamaulipas
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNICS	Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SRA	Secretaría de la Reforma Agraria
STAUS	Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UAG	Universidad Autónoma de Guerrero
UMSNH	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNISON	Universidad de Sonora
UNTA	Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
UPREZ	Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata

Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de País del Observatorio Social de América Latina de México (OSAL-CLACSO).

Coordinadores: Massimo Modonesi y Lucio Oliver.

Relevamiento y sistematización: Mariana López de la Vega y Fernando Munguía Galeana.

Fuentes: Diarios La Jornada y El Universal.